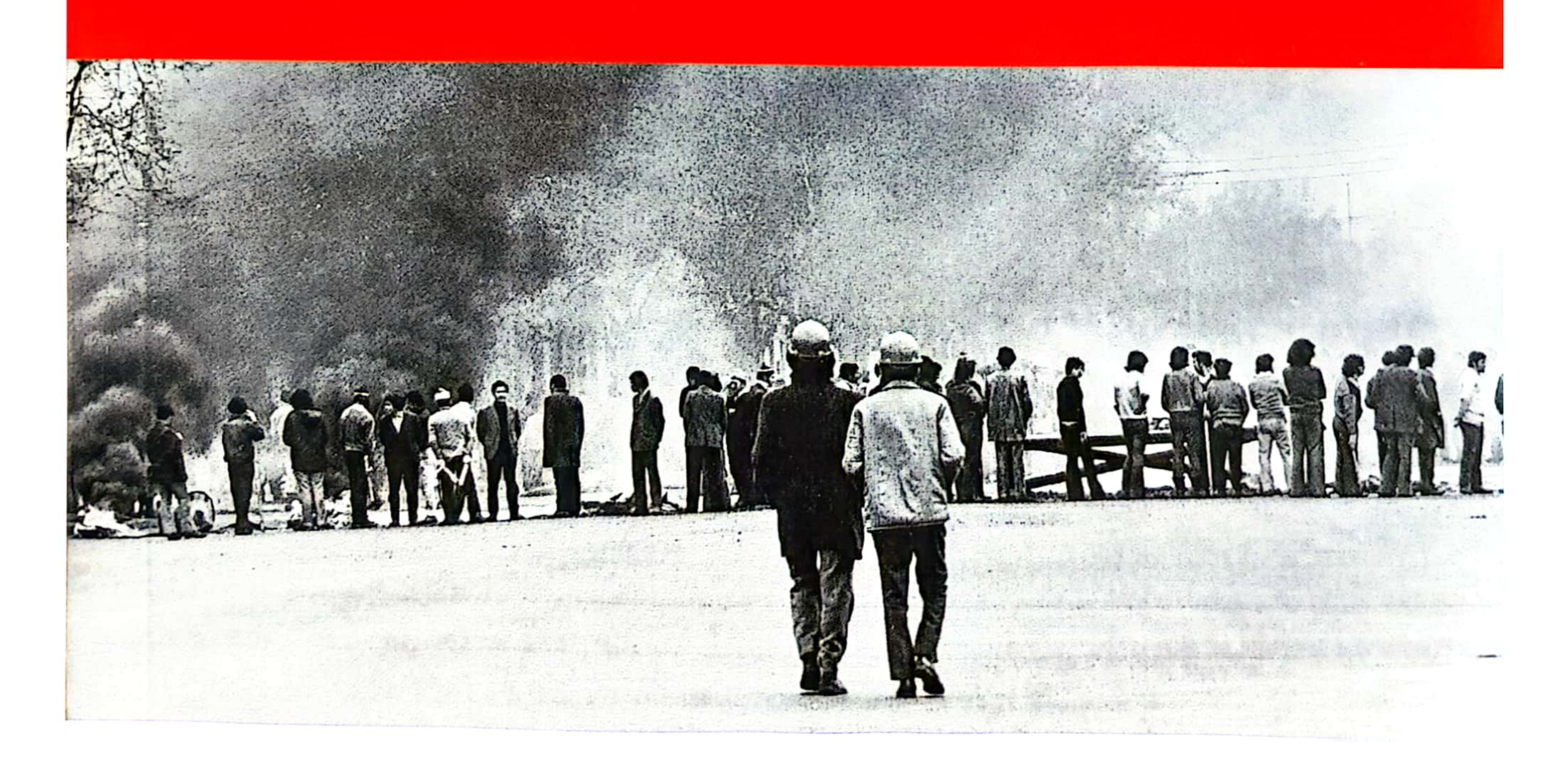


El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1970-1973

Alejandro San Francisco / Milton Cortés / José Manuel Castro



José Manuel Castro
Magíster en Historia por la PUC. Candidato a Doctor en Historia por University College London. Investigador del Instituto de Historia y del CEUSS de la Universidad San Sebastián. Autor de *Jaime Guzmán. Ideas y política 1946-1973. Corporativismo, gremialismo, anticomunismo* (2016) y coautor del proyecto *Historia de Chile 1960-2010*.

Milton Cortés
Doctor en Estudios Americanos, mención Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Historia por la PUC. Investigador del Instituto de Historia y del CEUSS de la Universidad San Sebastián. Autor de *Juan Antonio Ríos. El presidente olvidado* (2022) y coautor del proyecto *Historia de Chile 1960-2010*.

Alejandro San Francisco
Doctor en Historia por la Universidad de Oxford (Inglaterra). Director del Instituto de Historia e investigador del Centro de Extensión y Estudios (CEUSS) de la Universidad San Sebastián. Profesor de la PUC. Director general y coautor del proyecto *Historia de Chile 1960-2010*. Autor de *La guerra civil de 1891* (2007/2008), 2 tomos.

El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1970-1973

CIP – Universidad San Sebastián

San Francisco, Alejandro.
El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1970-1973 / Alejandro San Francisco, Milton Cortés, José Manuel Castro.

Incluye bibliografía

1.– Allende Gossens, Salvador, 1908-1973. 2.– Chile – Política y Gobierno – 1970-1973. 3.– Unidad Popular (Chile) – 1970-1973. 4.– Chile – Historia – 1970-1973. I.– t. II.– Cortés, Milton. III.– Castro, José

CDD 23
983.0646 2023 RCA2

"El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1970-1973"

Publicación de Ediciones Universidad San Sebastián,
Bellavista 7, Recoleta, Santiago de Chile

Primera edición: septiembre 2023
2.000 ejemplares

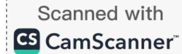
ISBN
Tapa rústica: 978-956-6115-49-6
Tapa dura: 978-956-6115-50-2

Registro de Propiedad Intelectual N° 2023-A-9289

Diseño de portada: Carolina Akel S.
Fotos portada: Gentileza *El Mercurio*

Diagramación: Angela Gramola V.

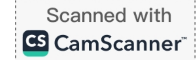
Hecho en Chile/ Printed in Chile
Andros Impresores



El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1970-1973

Alejandro San Francisco
Milton Cortés
José Manuel Castro





ÍNDICE

Introducción 9

Allende y la izquierda chilena. Un largo camino hacia La Moneda 13
- Salvador Allende 13
- La era de las revoluciones 20
- El último tramo hacia La Moneda 23

La elección presidencial de 1970 27
- La campaña y los resultados 27
- Los intentos para evitar la asunción de Allende: el "Gambito Frei" y el asesinato de Schneider 35

El primer año de gobierno 39
- La euforia de los primeros meses 39
- El asesinato de Pérez Zujovic y sus consecuencias 45
- El plan económico 47
- La nacionalización del cobre 53
- La reforma agraria 56
- Estrellato mundial 63
- La visita de Fidel Castro 68

El inicio de la crisis y el cambio en la correlación de fuerzas 73
La oposición a la ofensiva 73
Las nuevas definiciones de la izquierda 78
El Paro de Octubre 80
El gabinete con integración militar 86

1973: el año decisivo 89
La elección parlamentaria de marzo de 1973 89
La Escuela Nacional Unificada 95
La huelga de los mineros de El Teniente 104
El debate por la libertad de expresión 108
Allende y la democracia 113
La crisis económica 118
La crisis social 122
La crisis política 129
La crisis institucional 134
Chile a mediados de 1973 138

Ruptura y desenlace 141
La recta final 141
La Cámara de Diputados y el quebrantamiento del orden constitucional 148
La definición de los militares 152
El 11 de septiembre 157

Anexo: Los ministerios del presidente Salvador Allende 163

Ensayo bibliográfico 171

INTRODUCCIÓN

El aniversario 50° de la crisis y quiebre de la democracia ha reavivado la discusión pública sobre la historia de Chile. En ese contexto, este libro breve quiere ser una contribución al conocimiento de nuestra historia, destinado al público general, sobre la base de una investigación mayor que hemos desarrollado en la Universidad San Sebastián en el proyecto Historia de Chile 1960-2010, obra colectiva que a la fecha lleva seis volúmenes publicados. Los tomos 5 y 6 se concentran en *Las vías chilenas al socialismo: El gobierno de Salvador Allende (1970-1973)*, en los que participaron como autores José Manuel Castro, Milton Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo Larios, Monserrat Risco, Ángel Soto y Alejandro San Francisco (director general). Se trata de un trabajo que procura analizar el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular desde diversos ángulos, comenzando por una estructura y un estudio de carácter político, incorporando además las relaciones internacionales, la economía, la cultura, la educación y la Iglesia Católica, así como otros temas de interés.

Aunque es una obviedad señalar que el 11 de septiembre marcó el final de la "vía chilena al socialismo" y el comienzo de un largo régimen militar, este libro quiere destacar la importancia del periodo 1970-1973 como última etapa de la crisis de la democracia chilena, según hemos analizado a lo largo de la obra general. A mediados del siglo XX Chile vivió la paradoja de tener una democracia relativamente estable y sólida, apreciada en el contexto internacional, con continuidad en la sucesión gubernativa y ampliación del cuerpo electoral. Por otro lado, los problemas sociales se acumulaban sin soluciones prontas y adecuadas, con una pobreza extendida y expectativas crecientes que no lograban

ser satisfechas. A todo ello se sumó la irrupción de una demanda por soluciones rápidas y transformaciones estructurales, en una era revolucionaria, que se extiende en Chile desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 hasta el término del gobierno de la Unidad Popular, el 11 de septiembre de 1973.

En ese sentido, este libro se apoya en dos premisas.

La primera es que la crisis de la democracia no se explica solo por lo sucedido en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, entre 1970 y 1973. La democracia chilena arrastraba problemas de larga data y el ensayo de proyectos revolucionarios con Frei, Allende y Pinochet fue la fórmula que encontró el país para intentar poner punto final a una larga crisis, que había perdurado por décadas. El análisis de esos elementos estructurales que explican la totalidad de la crisis puede ser consultado en los volúmenes ya publicados de nuestra "Historia de Chile 1960-2010". Sin embargo, a pesar de la complejidad de la crisis que terminó por liquidar el sistema democrático –y que, insistimos, supera con mucho la experiencia de la Unidad Popular– quisimos, a través de este libro, poner el gobierno de Salvador Allende bajo la lupa. Entendemos que fueron tres años cruciales y que en ese periodo confluyeron y estallaron complejos procesos históricos que derivaron, para quienes protagonizaron los acontecimientos, en una suerte de callejón sin salida. Durante esos tres años se pusieron en evidencia, de forma manifiesta, los agudos problemas y las contradicciones más profundas de la democracia chilena.

La segunda premisa en la que se apoya este libro sostiene que es imposible aventurarse a esbozar una explicación del 11 de septiembre considerando solo el actuar de la izquierda que en ese momento gobernaba en La Moneda. Todo análisis del periodo debe dar cuenta del carácter multicausal de la crisis de la democracia y de la multiplicidad de actores involucrados en el proceso. Por eso, este libro examina cómo se entrelazó el rol protagónico que jugó Salvador Allende y la Unidad Popular como conductores del proceso político, sin desconocer, como es obvio, el papel que desempeñaron otros actores decisivos, como la Democracia Cristiana, el MIR, la Iglesia Católica, la derecha, los

militares, Estados Unidos y los gremios. Estos últimos articularon, por primera vez en la historia de Chile, una robusta oposición social a la izquierda en el poder y que sería crucial en el desarrollo del proceso político. Si la Unidad Popular derivó en una crisis que sería fatal para nuestra democracia, fue en parte porque, a lo largo de esos tres años, cada vez más personas –mucho más allá de los partidos de oposición– llegaron a la convicción de que la puesta en marcha del proyecto de la Unidad Popular significaba la disolución de principios mínimos de la convivencia como nación y de valores fundamentales de la existencia humana.

El proyecto de la Unidad Popular se planteó como una vía legal al socialismo, un segundo camino revolucionario, distinto al emprendido en Rusia en 1917 o al que triunfó en Cuba en 1959. El camino chileno sería en pluralismo, democracia y libertad, como solía repetir el presidente Salvador Allende. ¿Era viable esa fórmula, de acuerdo con la tradición política chilena y con la doctrina marxista-leninista que abrazaban la mayoría de los partidos que encabezaron el proyecto socialista en Chile? Así lo creían sus promotores, y así lo especificó el propio presidente Allende en un discurso clave, del 5 de noviembre de 1970, apenas dos días después de haber llegado a La Moneda:

> "Personalmente, sé muy bien, para decirlo en los términos textuales de Engels, que: 'Puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva, en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde de acuerdo con la Constitución, se puede hacer lo que se desee, desde el momento en que se tiene tras de sí a la mayoría de la nación'. Y este es nuestro Chile. Aquí se cumple, por fin, la anticipación de Engels".

Ahí está, en buena medida, el corazón de la vía chilena. Quizá ahí radica también el germen del fracaso o derrota de la Unidad Popular. Si el presidente Allende acertaba en recordar a Engels, cometía un error de apreciación, de hecho, sobre la realidad nacional. Si bien había llegado constitucionalmente al gobierno, elegido por el Congreso Pleno tras obtener la primera mayoría relativa el 4 de septiembre de 1970, no tenía "tras de sí a la mayoría

de la nación" y tampoco la representación popular era favorable a la revolución en la fórmula prevista por el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, ni concentraba "todo el poder" para llevar adelante ese proyecto. Por ende, si quería seguir adelante, debía enfatizar la búsqueda de acuerdos con algunos sectores de la oposición o bien la obtención de las respectivas mayorías que se comprometieran con la vía chilena. Pero junto con las dificultades respecto a la estrategia existía otro problema de fondo. La vía democrática al socialismo era, a pesar de su nombre, contradictoria con la democracia histórica chilena, de la cual recelaba, con temas centrales como la división de poderes o la independencia de la sociedad civil con respecto al Estado. El proyecto de la Unidad Popular buscaba sustituir esas bases liberales –"burguesas" en la terminología marxista– de la democracia, buscando por todos los medios el monopolio del Estado en diversas áreas de la existencia social, lo que generó preocupación y temor en diferentes sectores de la población, que luego se opusieron de manera más decidida y denunciaron el intento de implantar un régimen totalitario en Chile. Eso estuvo en el corazón de la discusión sobre el desprecio a la ley y la institucionalidad por parte del gobierno, junto con la permanente amenaza de desatar la violencia revolucionaria si su proyecto encontraba resistencias. Ningún sistema democrático puede funcionar bajo estas circunstancias, por lo que desde las derechas e izquierdas anunciaron con anticipación que el choque de clases o el enfrentamiento final podría ser inevitable.

El libro es un análisis principalmente político del gobierno de Salvador Allende, que estudia en forma cronológica y temática algunos de los desafíos y problemas principales que enfrentó el gobierno en aquellos años tan densos históricamente y que todavía despiertan un gran interés. Como se trata de un libro pensado para el amplio público lector y que busca favorecer la fluidez de su lectura, hemos reemplazado las convencionales notas al pie de página por un ensayo bibliográfico al final del texto, el que realiza un recuento de la bibliografía utilizada.

ALLENDE Y LA IZQUIERDA CHILENA. UN LARGO CAMINO HACIA LA MONEDA

Salvador Allende

Si bien la actividad política del gobierno de la Unidad Popular (UP) vio la participación de numerosos actores nacionales e internacionales, al punto de involucrar a la mayoría de la población en las grandes controversias de la época, es claro que estos años no se pueden entender sin prestar atención especial a su protagonista central, el presidente Salvador Allende Gossens. Su llegada a La Moneda el 3 de noviembre de 1970 fue el punto culminante de años de lucha, campañas electorales y una activa participación en la política nacional, en la que ocupó los principales cargos políticos del país: ministro, diputado y senador. Su bandera de lucha era la "vía chilena", que buscaba ser la primera transición al socialismo en "pluralismo, democracia y libertad", conjugando la tradición democrática nacional con una doctrina de apelación universal, el marxismo. Para entender sus opciones políticas, que dieron punto de partida a una de las mayores crisis de la historia nacional, es necesario remontarnos a sus orígenes.

Allende nació en Santiago, el 26 de junio de 1908, hijo de Salvador Allende Castro y Laura Gossens Uribe, en el seno de una familia acomodada asentada en Valparaíso. Durante sus primeros años residió algún tiempo en Tacna, y posteriormente realizó sus estudios escolares en Valparaíso y en Santiago, en el Liceo Eduardo de la Barra y en el Instituto Nacional, respectivamente. Se identificaría con la ciudad puerto durante el resto de su vida, al punto de considerarse y presentarse como porteño de nacimiento.

Allende llevaba la política en sus venas. Entre sus ancestros destacaba su abuelo Ramón Allende Padín, médico, militante radical

y senador, que fue conocido como "el rojo", a quien Salvador prestaba especial reconocimiento. Allende rememoraría en su adultez que su despertar político ocurrió durante su adolescencia, en las conversaciones que tuvo con un carpintero anarquista italiano, Juan Demarchi, quien lo habría introducido en sus primeros conceptos políticos y le prestaba libros.

Allende decidió estudiar Medicina en la Universidad de Chile. Durante sus años universitarios profundizó sus lecturas políticas, que en su mayoría estaban dentro de la órbita del marxismo. Sin perjuicio de ello, estaba lejos de ser un doctrinario, y se reconocía un hombre de acción, que desde joven había estado "en la primera barricada". Entre los textos que leyó podemos mencionar el *Manifiesto Comunista* y *El Capital* (aunque probablemente en forma fragmentaria) de Marx; *El Estado y la Revolución*, de Lenin; también algo de Trotski, que no leían los comunistas. Sin perjuicio de ello, consideraba que este tipo de obras no debían leerse "como el Catecismo Romano", sino que debían servir como base y adaptarse a la realidad social.

Fue en esa época de estudiante universitario cuando tuvo su primera actividad que podría considerarse política, al ser elegido primero como presidente del Centro de Alumnos de Medicina y luego como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). También participó activamente en las protestas que llevaron al derrocamiento de Carlos Ibáñez.

Allende se tituló de médico cirujano y ejerció su profesión durante algunos breves años, si bien mantuvo el interés por los temas de salud durante el resto de su vida. Su tesis de grado había versado sobre el tema *Higiene mental y delincuencia*, basado en su experiencia en el Manicomio. Posteriormente ejerció su actividad profesional en el Hospital Carlos Van Buren, de Valparaíso, en el área Anatomía Patológica, donde le correspondió realizar numerosas autopsias.

La vida política de Allende estuvo marcada por su militancia en el Partido Socialista (PS). La colectividad había nacido el 18 de abril de 1933, debido a la confluencia del Partido Socialista Marxista, la Acción Revolucionaria Socialista, el Orden Socialista

y la Nueva Acción Pública, en un contexto de eclosión de las ideas de izquierda en el país, producto de la grave crisis económica conocida como la Gran Depresión. Los principales líderes de la nueva agrupación –que después se convertiría en uno de los partidos más importantes del país– eran Óscar Schnake, Marmaduke Grove y Eugenio Matte. En su Declaración de Principios, aceptaba el marxismo como "método de interpretación de la realidad", asegurando que debía ser "enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos y revolucionarios del constante devenir social". Reconocía la existencia de la lucha de clases y sostenía que el "Estado actual" era "un organismo de opresión de una clase sobre otra". Esperaba la transformación del régimen económico capitalista hacia uno de carácter socialista; estimaba que en el proceso habría una dictadura de trabajadores; se declaraba antiimperialista. A diferencia del Partido Comunista (PC), que había nacido en 1922 y que estaba afiliado a la Tercera Internacional, con sede en Moscú, el Partido Socialista tenía una clara vocación latinoamericanista. En su primer congreso el PS puntualizó una serie de criterios definitorios y se proclamó antioligárquico y antiaristocrático, anticlerical, anticapitalista, antiimperialista, antifascista, antimilitarista, antiindividualista, antiestatista, y contrario al socialismo reformista de la II Internacional y al comunismo soviético de la III Internacional.

En 1937, antes de cumplir los 30 años, el joven médico postuló a diputado por Valparaíso y Quillota, resultando elegido en su primera incursión electoral, donde mostró su gran capacidad como candidato, que confirmaría en numerosas ocasiones. No obstante, ejerció el cargo solo por algún tiempo, ya que pronto sería llamado a importantes actividades de gobierno.

En 1938 fue elegido el radical Pedro Aguirre Cerda como Presidente de la República, tras una estrecha elección en la que derrotó a Gustavo Ross. Aguirre Cerda encabezó el Frente Popular, que incluía a los partidos Radical, Socialista, Comunista, Radical Socialista y Democrático. Era una fórmula que se insertaba en las disputas mundiales contra el fascismo, como enfatizaba la Internacional Comunista, que tuvo distintas expresiones en España,

Francia y también en Chile. El nuevo presidente convocó a Salvador Allende para que asumiera como ministro de Salubridad Pública, cargo que ejerció entre agosto de 1939 y abril de 1942. Con ello, Allende se transformaba en una figura de renombre nacional.

Siendo ministro, Allende publicó un libro titulado *La realidad médico-social chilena* (1939). En esta obra realizó un lapidario análisis demográfico y social del país, las enfermedades que afectaban a sus compatriotas y también la miseria en que vivía una parte importante de la población nacional. La obra comenzaba dando cuenta de un hecho terrible: "Chile tiene la más alta mortalidad infantil del mundo". También aparecen en su estudio las enfermedades venéreas, el alcoholismo, la prostitución y otras lacras que afectaban principalmente a los sectores populares. El problema de la desnutrición –y en general los asuntos relativos a la salud y las enfermedades– sería una de las preocupaciones fundamentales del médico socialista durante sus largos años de vida política y parlamentaria.

La vida de Salvador Allende también cambió en el plano personal. Conoció a Hortensia Bussi, con quien se casó en 1940, teniendo tres hijas: Carmen Paz, Beatriz e Isabel, las dos últimas con participación política en distintos momentos de sus vidas. En otro plano, decidió ingresar a la masonería, institución a la que también habían pertenecido su abuelo –el serenísimo Gran Maestro Ramón Allende Padín– y su padre. Sin perjuicio de ello, en alguna oportunidad señaló que permanecía "en sueño" en su logia, porque sus deberes ciudadanos le habían impedido participar con regularidad.

El ascendiente de Allende dentro del Partido Socialista fue en aumento, al punto de llegar a ser Secretario General en 1943, desplazando al propio Grove. En 1945 Allende fue candidato y resultó elegido como senador, por la circunscripción de Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes. Se mantendría en el Senado hasta su elección como Presidente de Chile, obteniendo victorias continuas a pesar de sus numerosos cambios de circunscripción. En la década de los 1940, Allende mostraba una ideología socialista bastante ecléctica, no muy diferente a su propio partido,

mezclando marxismo con la influencia del aprismo peruano y elementos del *New Deal* de Franklin D. Roosevelt. Pero una constante en su pensamiento fue su rechazo del "imperialismo norteamericano", que era la forma en que concebía la acción de los grandes capitales estadounidenses en Chile y América Latina. Particular atención prestó al tema del cobre, acusando que los Estados Unidos se habían enriquecido a costa de las riquezas nacionales durante la Segunda Guerra Mundial, por haber fijado artificialmente bajo el precio del metal rojo. Era el germen de la idea de "recuperación" de las riquezas nacionales, que culminaría en 1971 con la nacionalización del cobre.

El año 1948 fue importante para Allende y para la izquierda chilena en general. Debido a la ruptura del presidente Gabriel González Videla con el Partido Comunista, este último fue proscrito mediante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que los comunistas llamaron "ley maldita". Allende se opuso rotundamente a la proscripción de este partido, lo que lo llevó a conflictos con otra facción del Partido Socialista, al punto de provocarse una ruptura dentro de la agrupación. De esta postura nacería una indisoluble relación entre Salvador Allende y el Partido Comunista, que en muchas ocasiones demostraría ser más leal a Allende que los propios socialistas.

A mediados de siglo Allende ya era una figura política relevante, que seguiría creciendo en importancia los años siguientes, en los que buscaría constantemente la Presidencia de la República. En 1952 levantó por primera vez una candidatura presidencial, con el apoyo del Partido Socialista y del todavía proscrito Partido Comunista. Su programa levantó las banderas de la nacionalización del cobre y del salitre, una reforma agraria y la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. No obstante, la candidatura de Allende fue desde el comienzo una acción testimonial, sin posibilidades reales de éxito: en esa ocasión –cuando resultó elegido Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958)– el líder socialista logró poco más de 50 mil votos, que representaban el 5,4%.

En la década de 1950 se produjeron dos grandes cambios que fueron decisivos para el desarrollo de la izquierda en los años

siguientes. El primero fue la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT), en 1953, cuyo principal líder era el dirigente Clotario Blest. En sus principios fundacionales estableció que el régimen capitalista era la "explotación del hombre por el hombre", y debía ser reemplazado "por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases", lo cual ilustraba que sus convicciones y acciones excedían ampliamente la mera representación de los trabajadores y se extendían a un proyecto propiamente político. En un primer tiempo se definió como una institución apolítica –una de las obsesiones de Blest– aunque más tarde pasaría a estar dirigida por líderes del PC, el PS y en menor medida de la Democracia Cristiana (DC). Hasta 1973 la CUT fue un factor relevante de organización social, de agitación política y de oposición a los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, así como de adhesión al del propio Salvador Allende.

El segundo aspecto fue la conformación del Frente de Acción Popular (FRAP), un proyecto nacido en 1956, que procuraba unir a "las fuerzas que estén dispuestas a la lucha por un programa antiimperialista, antioligárquico y antifeudal". Así se produjo el pacto que unió al Partido Socialista y al Partido Comunista –si bien ambos conservaban su autonomía– y representó el camino de la vía chilena al socialismo. El tema cobra mayor importancia si consideramos que Allende daba especial relevancia a la unidad socialista-comunista para la conformación y eventual triunfo de un proyecto popular: "El PC es el partido de la Unión Soviética, el primer estado socialista del mundo. Y quien quiera formar un gobierno socialista sin los comunistas, no es un marxista. Y yo soy un marxista".

Ahí puede encontrarse la explicación, al menos parcialmente, de la participación de Allende en el homenaje a Stalin, tras la muerte del dictador soviético el 5 de marzo de 1953. En esa ocasión el Partido Comunista preparó un reconocimiento especial para quien había sido su líder mundial durante casi tres décadas, en un masivo y sentido evento en un teatro de la capital, registrado en el periódico *El Siglo*. Ahí aparece el poema de ocasión, leído

por el poeta Pablo Neruda: "En su muerte", se tituló el homenaje. Allende pronunció un largo discurso en que abundó las alabanzas al jerarca de la Unión Soviética, terminando con la siguiente declaración: "Camaradas del Partido Comunista, nosotros sabemos que hay sombra y dolor en vuestros corazones, que es ancha y profunda vuestra angustia. Vuestro consuelo, el saber que hay hombres que no mueren. Stalin es uno de ellos".

Chile era distinto en 1958, cuando el líder socialista nuevamente compitió por el sillón presidencial. Su figura política había crecido y ya existía el "allendismo", como expresión de apoyo personal hacia el candidato. A la creación del FRAP se le sumaba el regreso a la legalidad de los comunistas, tras la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia. En una elección a cinco bandas, Allende parecía bien perfilado para una victoria. Esta se le escapó por poco: obtuvo el 28,8% de los sufragios, siendo superado por Jorge Alessandri, con el 31,5% y apenas 33 mil votos más que su contendor.

Es preciso remarcar que la izquierda era mucho más que los dos partidos que conformaba el FRAP, es decir, las fuerzas socialistas y comunistas. Existía también una gran presencia en las organizaciones sociales, como la mencionada CUT y las federaciones de estudiantes universitarios. Además, en aquellos años se desplegó un mundo cultural que, en materia política, era amplia y principalmente favorable al Partido Comunista, pero también a otras fuerzas revolucionarias o independientes de izquierda: entre ellos destacaban artistas, cantantes, cineastas y otros que representaron el cambio del país en materia cultural. A ello se sumaría el impacto de la literatura de la década de 1960, que se conoció como el "*boom* latinoamericano", en buena medida influenciado políticamente por el triunfo de la Revolución Cubana.

Muchos pensaron que en 1964 llegaría la hora definitiva para Salvador Allende, considerando los resultados de 1958. Sin embargo, ello no ocurrió, pues la derecha decidió apoyar a Eduardo Frei Montalva, el candidato de la Democracia Cristiana, ante el riesgo de que Allende obtuviera la victoria, especialmente después de unas elecciones complementarias para la Cámara de Diputados,

en las que triunfó el candidato socialista Óscar Naranjo, también en una elección entre la Democracia Cristiana, la izquierda y la derecha. En la elección presidencial de ese año triunfó Frei Montalva, con el 56%. Si bien Allende subió considerablemente su votación –obtuvo 977 mil votos y el 38,9%– la derrota dejó mucha desilusión y preocupación en la izquierda, especialmente en un momento en que América Latina vivía una gran efervescencia revolucionaria, producto del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, liderada por dos figuras que llegarían a tener una estatura continental: Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara.

La era de las revoluciones

Ya a mediados de la década de 1950, Allende y la izquierda chilena se habían radicalizado. Cada vez eran más frecuentes las críticas a la denominada democracia formal o burguesa. Se consideraba que las libertades políticas eran ilusorias si no iban acompañadas por la democratización de la economía. Atrás quedaban los coqueteos con tendencias socialdemócratas europeas y latinoamericanas. Toda posible simpatía por los demócratas norteamericanos, fuerte en el socialismo durante la década de la Segunda Guerra Mundial, había fenecido con motivo de la intervención norteamericana en Guatemala en 1954.

En 1959 vino el parteaguas que fue el triunfo de la Revolución Cubana, con su enorme impacto internacional, especialmente en América Latina. Chile no estuvo exento de las emociones y esperanzas que despertó el comienzo de la primera experiencia socialista en el continente.

En el plano personal, desde entonces Salvador Allende viajó prácticamente cada año a Cuba, como recordaría en su viaje a la isla ya siendo Presidente de Chile: "Vine por primera vez en enero de 1959 y prácticamente todos los años hasta 1968, concurrí a Cuba para estar junto a su pueblo y ver cómo se afianzaba su conciencia revolucionaria, cómo los conductores de la revolución y cómo Fidel Castro daban el ejemplo de una voluntad creadora

para derrotar al imperialismo y hablar el lenguaje de solidaridad a través del mundo". El Che Guevara le regaló su libro *Guerra de guerrillas* al senador socialista chileno, con una ilustrativa dedicatoria: "A Salvador Allende, que por otros medios busca lo mismo. Afectuosamente, Che". Allende, por su parte, sostenía que la revolución en América Latina sería antiimperialista y "antiyanqui", si bien precisaba que los métodos no debían ser los mismos en el caso de Chile, pues seguía adhiriendo a la llamada vía chilena.

El impacto de la Revolución Cubana fue muy amplio en Chile, donde era tema habitual de conversación política, de discursos en el Congreso Nacional e incluso de publicaciones de proclamas y documentos de Fidel Castro. Más importante todavía, el éxito de la guerrilla y el comienzo de la construcción del socialismo en Cuba tuvo una consecuencia fundamental, como fue la radicalización política en América Latina y los intentos por construir una segunda Cuba en otras naciones. Después de todo, para la izquierda la isla era la representación del "primer territorio libre" en el continente y su lucha antiimperialista constituía un ejemplo para quienes compartían sus principios. Numerosos movimientos políticos y grupos de jóvenes, especialmente, asumieron como propio el mensaje de Castro en la Segunda Declaración de la Habana: "El deber del revolucionario es hacer la revolución". Y aunque existía la convicción de que esta triunfaría en el continente, enfatizaba que un revolucionario no podía sentarse en la puerta de la casa "a ver pasar el cadáver del imperialismo". Esto llevó, en la práctica, a que muchos decidieran la vía armada como el camino que permitiría la conquista del poder para el pueblo. La nueva realidad se expresó en la formación de grupos guerrilleros en diferentes países; también muchos partidos o movimientos asumieron la necesidad de la vía violenta; finalmente, surgió una verdadera "internacional" de la revolución, que se expresó de diferentes maneras.

La izquierda chilena también asumió parcialmente esa discusión y toma de posiciones, experimentando una radicalización y cierta fascinación por la vía violenta o armada, si bien ello se expresó más en el pleno retórico que en la organización de guerrillas u otras

formas de lucha armada. La línea general del Frente de Acción Popular había sido "la vía chilena", pero hubo dos casos muy notables que graficaron la transformación táctica en los años 60. El primer hito está representado por el nacimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en agosto de 1965, que se definió como la "vanguardia marxista-leninista de la clase obrera", cuyo objetivo era llegar a la sociedad sin clases, previa destrucción del capitalismo mediante el "enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas". Expresamente, el MIR rechazaba la teoría de la vía pacífica, porque desarmaba al proletariado y resultaba inaplicable, por lo que reafirmaba "el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar al régimen capitalista es la insurrección armada". Hasta 1973 fue la agrupación que, bajo el liderazgo de Miguel Enríquez, desarrolló con mayor determinación las tesis contrarias a la democracia burguesa y favoreció las vías de hecho, así como mantuvo la convicción en la necesidad de realizar la auténtica revolución, proletaria y campesina.

En 1967, el Partido Socialista adoptó una resolución en la misma dirección en su Congreso de Chillán. En esa oportunidad, se definió como "organización marxista-leninista", que buscaba "instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo". En su resolución, los socialistas afirmaban que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima", como resultado del "carácter represivo y armado del estado de clase". Consideraba que "las formas pacíficas y legales de lucha" –de carácter reivindicativo, ideológico o electoral, por ejemplo– no conducían por sí mismas al poder: la violencia revolucionaria constituía "la única vía que conduce a la toma del poder político y económico… Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués puede consolidarse la revolución socialista".

¿Por qué el Partido Socialista –el de Allende– llegó a esta convicción y a estas definiciones tan radicales? La respuesta se encontraba, parcialmente, en la misma declaración del Congreso de Chillán: "Los acontecimientos vividos en América Latina durante los últimos años como consecuencia directa o indirecta de

la revolución cubana han ido progresivamente continentalizando el proceso revolucionario y desplazándolo al terreno de la violencia, en la medida en que el imperialismo ha ido acentuando su estrategia continental y mundial contrarrevolucionaria para oponerse a los movimientos populares liberadores". Al ejemplo de la Revolución Cubana se sumó un nuevo factor: el tercer fracaso de Allende como candidato a Presidente de la República, esta vez en las elecciones de 1964, que ocurrió en su momento de mayores posibilidades de triunfar y de mayor fervor revolucionario. La nueva derrota cosechada por la izquierda llevó a muchos a mirar otros caminos por fuera de la vía electoral. Finalmente, no cabe duda que también tuvo gran influencia la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que se realizó en La Habana a fines de julio y comienzos de agosto de 1967, la cual buscaba difundir la revolución armada en el continente como método de cambio político y social. En este encuentro participaron destacados líderes comunistas y socialistas chilenos, como Volodia Teitelboim, Carlos Altamirano y, por cierto, Salvador Allende. Al terminar la reunión en La Habana, el socialista chileno Clodomiro Almeyda declaró que el Partido Socialista debería "adecuar una táctica que se compagine con la estrategia que hemos aprobado en la Conferencia de la OLAS".

El último tramo hacia La Moneda

La elección de 1964 significó una desilusión, un desencanto para muchos miembros de la izquierda chilena, en momentos que la democracia burguesa –como se le llamaba con tono despectivo– tenía críticos decididos en el partido de Allende y en otros sectores de la población.

Sin embargo, el "porfiadísimo compañero", según Neruda se refería a Allende, no estaba en esa línea. Se podría decir que una vez terminada la elección de 1964 ya comenzó a preparar la campaña siguiente. Como se puede comprender, no fueron años comunes y corrientes, no solo por lo que hemos mencionado sobre

el avance de la opción por la violencia, sino también porque hubo una gran efervescencia política en Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, a quien los socialistas decidieron negar "la sal y el agua" desde el comienzo de la "Revolución en Libertad". La oposición a Frei fue dura y sistemática, a lo que se sumó la erosión de ciertas instituciones tradicionales en el país, algunas por el avance de la revolución –así ocurriría con las estructuras de propiedad, especialmente en el campo–, en tanto otras fueron propias de las contradicciones del momento histórico, como fue el caso de la Iglesia Católica, las universidades e incluso el Poder Judicial y el Ejército.

Allende fue un duro contradictor de Frei Montalva. Desde un comienzo consideró que el candidato de la Democracia Cristiana había obtenido una "victoria sucia", por el antimarxismo que dominó la campaña y los numerosos recursos utilizados para ello, en lo que la izquierda denominaría una verdadera "campaña del terror". En los temas de fondo, consideraba que el gobierno de Frei era "un mero reformismo", sostenía que solo el socialismo era un sistema alternativo al capitalismo, por lo cual el sistema comunitario de la DC no sería viable. Como evaluación general, Allende estaba convencido que el gobierno de Frei fue un "fracaso", que había significado incluso retrocesos.

Durante aquellos años Allende se mantuvo como una figura principal de la política nacional. De hecho, a fines de 1966 fue elegido Presidente del Senado, uno de los cargos más importantes del país. Asumió en la Cámara Alta con el apoyo de sectores amplios de la izquierda y manifestó: "Nuestra Democracia, con todas sus imperfecciones, es el resultado de las luchas históricas del pueblo chileno". La elección del senador socialista era un problema para el gobierno de Frei, porque el Senado no solo sería liderado por alguien de oposición, sino también porque Allende era una figura fundamental de la izquierda y eventual candidato presidencial en 1970.

Las ambigüedades ideológicas tiñeron la acción política de Salvador Allende durante la segunda mitad de la década de los sesenta. Había señalado al asumir la Presidencia de la Cámara

Alta que no haría política sectaria y respetaría los fueros de cada senador. Sin embargo, paralelamente, por esos años Allende mostraba esas dos dimensiones contradictorias que eran parte de la política revolucionaria de entonces: por una parte, una trayectoria democrática e incluso el liderazgo en el Senado; por otra parte, su adhesión a Fidel Castro en Cuba, la participación en la OLAS y otras circunstancias contradictorias con la democracia. Por ejemplo, en 1968 Allende ayudó a tres guerrilleros cubanos que se fugaron de Bolivia –donde habían luchado con el Che Guevara–, y los acompañó vía Tahití para que volvieran a su país. También cruzó la Cortina de Hierro hacia la República Democrática Alemana (RDA), para solicitar apoyo para el Partido Socialista. La explicación podría ser esta: en la disputa global de la Guerra Fría, Salvador Allende se alineó con la revolución mundial, adhirió a quienes encabezaban los procesos de cambio radical del orden existente y luchaban contra el imperialismo, así lo hicieran con las armas en la mano, fuera en Vietnam, al este de la Cortina de Hierro o en América Latina. Sin embargo, en el ámbito local, Allende estaba convencido que la vía chilena era la electoral, que existían las condiciones, por el desarrollo político nacional, de aspirar a un cambio radical de las estructuras políticas y económicas mediante el uso de la Constitución vigente y la legalidad burguesa en general. Allende, sea por la separación de estas dos dimensiones o por su tradicional muñeca política, logró hacer coexistir ambos mundos, medios y formas de comprender el socialismo.

En tal ambiente político, Allende y la izquierda chilena se prepararon para una nueva contienda electoral, la presidencial de 1970, que para muchos parecía la última oportunidad de la vía electoral al socialismo que defendía Allende.

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1970

La campaña y los resultados

La elección presidencial de 1970 se realizó en un ambiente políticamente tenso, pues muchos sectores habían comenzado a descreer en la democracia. En la izquierda había una creciente reivindicación de la violencia política por parte de importantes sectores, los cuales también comenzaban a considerar que las elecciones eran una farsa, puesto que los votantes siempre podían ser engañados. La "campaña del terror" se les aparecía como una muestra evidente de ello. También existía la amenaza militar. El Tacnazo había demostrado un profundo descontento en las Fuerzas Armadas, si bien no estuvo en peligro el régimen político. En el resto de América Latina, gran parte de los gobiernos democráticos fueron reemplazados en estos años por dictaduras militares, que ahora tenían la característica de que eran institucionales, no personalistas, que buscaban realizar cambios estructurales. Esto se dio particularmente en el caso de Argentina y Brasil, donde los golpes de Estado tuvieron una orientación de derecha, mientras que en Perú fue de izquierda. La democracia estaba de capa caída a lo largo del continente, en gran parte como reacción al desafío que representaba la Revolución Cubana a los distintos regímenes políticos de la región.

En Chile, si bien el presidente Frei había conservado gran parte de su prestigio personal, no podía presentarse a la reelección. Su partido, la Democracia Cristiana, había retrocedido en su caudal electoral. La derecha, desafiando los pronósticos de una inminente extinción, vivía una recuperación electoral, si bien todavía incompleta. En la izquierda, se había conformado la coalición de

la Unidad Popular, que sumaba a la tradicional alianza socialista-comunista a los radicales, el MAPU, el Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente. La decisión de la Democracia Cristiana de seguir una vía propia, sin alianzas políticas o electorales, implicó que ningún sector político tuviera una mayoría. Por ello el sistema de partidos correspondió a lo que se ha llamado los "tres tercios", que si bien no eran matemáticamente iguales, representaban a tres sectores que tenían posibilidades reales de llegar a la presidencia. Importante fue también que sus proyectos políticos aparecieran como mutuamente excluyentes.

El candidato de la derecha fue el expresidente Jorge Alessandri. Este había conservado un nivel importante de popularidad, que sobrepasaba por mucho a su sector político. Su campaña se caracterizó por una denuncia de la politiquería y el partidismo, propugnando por una restauración del orden y la autoridad en la vida pública. A diferencia de sus contrincantes, no hizo promesas de nuevas reformas, aunque se anunció que no se revertirían las ya realizadas. Su programa presidencial, que se enfocaba particularmente en soluciones técnicas para los problemas del país, no logró formar una narrativa política potente.

Sobre los temas doctrinarios más polémicos, Alessandri planteaba una vía intermedia. No pretendía revertir la reforma agraria, si bien prometía aplicarla con criterios técnicos y no políticos. Tampoco retrocedería en la nacionalización pactada del cobre que había negociado Frei. Sus principales promesas se referían hacia una mayor "racionalización" en el proceso productivo, terminando con los despilfarros de la abultada administración pública, combatiendo la corrupción y el partidismo.

La confianza en la figura salvífica de Alessandri sería el talón de Aquiles de la campaña. Aunque el arrastre de Alessandri superaba con mucho a la izquierda, el excesivo peso en su persona lo hizo blanco predilecto de los ataques de la izquierda y de la Democracia Cristiana. Clave fue el uso por parte del gobierno de sus medios de comunicación. En un programa político "Decisión 70" de Televisión Nacional, en donde se entrevistaba a los candidatos, la cámara se centró en la mano de Alessandri, que temblaba sin que

él lo notara. Ello permitió a sus rivales atacarlo por su supuesta senectud e incapacidad.

Otras formas de ataque fueron más violentas. Durante un evento en Lota, una turba de militantes de izquierda agredió a sus partidarios al finalizar una concentración. Luego, cuando se dirigía a Concepción, su auto y los de su comitiva fueron atacados a piedrazos. Los medios de izquierda celebraron abiertamente los hechos, afirmando que Alessandri se los merecía por haber "reprimido" a los mineros del carbón. El gobierno y la DC guardaron un silencio cómplice.

La Democracia Cristiana presentó como candidato a Radomiro Tomic. Este era percibido como el sucesor natural de Eduardo Frei, si bien el presidente no vio con muy buenos ojos esa postulación. Tomic representaba al ala izquierdista del partido y propugnaba un programa que podría ser calificado de populismo nacionalista de izquierda, con llamados a la nacionalización del cobre y la superación de las estructuras neocapitalistas mediante un "comunitarismo" nunca bien definido. Incluso pretendió formar una alianza con la izquierda, siendo de los primeros en plantear la idea de una "unidad popular", si bien estos partidos no querían saber de alianzas con la DC –"con Tomic ni a misa", exclamó el comunista Luis Corvalán–, puesto que habría sido el partido dominante. De verborrea fácil aunque insustancial, se benefició en gran medida del apoyo que le prestó el gobierno a través de sus medios de comunicación, *La Nación* y Televisión Nacional.

Tomic fue visto por la mayoría de los comentaristas como el candidato con menores posibilidades, al representar a un solo partido. Además, le afectó la polarización de la campaña, que fue concentrando el interés y las posibilidades de triunfo en Alessandri y Allende. No obstante, logró obtener un porcentaje importante de la votación. Parte de ello se debió a que, hacia el final de su campaña, trató de asociarse expresamente con el proyecto político que representaba el presidente Frei, del que se había querido alejar en un primer momento.

En la izquierda, la Unidad Popular escogió como candidato a Salvador Allende. El camino a la candidatura no fue fácil, e

incluso Allende encontró oposición en su propio partido, siendo su precandidatura aprobada por 13 votos contra 12 abstenciones, toda una humillación. Los otros partidos de la UP tenían sus propios precandidatos. El PC presentó a Pablo Neruda, pero como saludo a la bandera, puesto que su primera opción seguía siendo Allende. Los radicales postularon a Alberto Baltra, el Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente a Rafael Tarud y el MAPU a Jacques Chonchol. El complejo sistema elegido, dos votos por cada partido, estancó las negociaciones por un tiempo. Al final, el peso de los partidos más grandes de la coalición, socialistas y comunistas, se hizo sentir y Allende fue elegido candidato.

Durante la campaña, Allende desarrolló abiertamente un discurso de lucha de clases, entre los ricos y pobres, entre el pueblo y los acomodados, con la violencia revolucionaria como amenaza implícita. Como muestra, en un discurso pronunciado el 29 de junio, advirtió:

> “El programa de la UP es claro y definido: queremos que todo Chile sepa qué es lo que va a pasar en este país cuando el pueblo sea gobierno: ya lo hemos dicho, heriremos los poderosos y bastardos intereses del capital extranjero y los monopolios nacionales; de esa minoría que ha esquilmado al pueblo chileno, y que es cómplice de las ventajas y granjerías que ha obtenido el capital foráneo en nuestra patria.
> Pero que no se nos atribuyan cosas que no son nuestras: la violencia está institucionalizada y se agrega la represión. Nosotros no queremos la violencia. No la necesitamos, no la provocaremos. Pero si bien está claro esto, es bueno que sepan que si se pretende amenazar nuestro triunfo, responderemos a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria”.

Allende, incluso como Presidente de la República, repetiría muchas veces esta fórmula.

La campaña de la Unidad Popular dio una importancia central a su programa político, presentándolo casi como texto sagrado. En este programa se analizaban las causas de los males de Chile, culpando al sistema sociopolítico capitalista, dependiente del imperialismo, que solo provocaba miseria para la mayoría y riqueza

para algunos pocos. El diagnóstico de la UP sostenía que Chile sufría una profunda crisis, que el país se gobernaba y legislaba en favor de unos pocos, que el 50% de los menores de 15 años padecía desnutrición y denunciaba otras tantas lacras sociales. La solución era la transición al socialismo, que incluía transformaciones radicales en las esferas política, económica y social. En lo político, se apuntaba a la "conquista del poder", en el entendido que no bastaba tener el gobierno. Ello implicaba la participación activa de las masas, mediante los Comités de la Unidad Popular, que ejercerían el "poder popular" en los diferentes niveles de la vida social. En lo institucional, se prometía una nueva constitución y la substitución del Congreso por una Asamblea Única del Pueblo.

En lo económico, lo medular era aumentar aún más el control del Estado sobre la economía, mediante estatizaciones en las áreas consideradas clave, como la gran minería del cobre, el hierro y el salitre, por ejemplo; el sector financiero, el comercio exterior, las empresas de distribución y todas las empresas grandes en general. Junto a ello, se llamaba a una aceleración de la reforma agraria, cuyo objetivo expreso no era crear nuevos propietarios, sino establecer formas cooperativas de propiedad, en donde en última instancia el dueño de la tierra era el Estado. Junto a esta área estatal se crearían también un área mixta y otra de propiedad privada, esta última reducida a casi su mínima expresión.

Este control de la producción no se debe entender meramente como un tema económico, sino que era esencialmente un tema de poder. La izquierda entendía que los resortes del control social pasaban por el control económico, así podrían privar a sus enemigos burgueses de toda capacidad de acción e influencia. Sin que lo dijeran abiertamente, con el control estatal de la economía existiría también un control político sobre el proceso, que sería manejado por los partidos y personeros de la Unidad Popular.

Si bien Alessandri había comenzado con una ventaja en la intención de voto, esta pronto comenzó a disminuir. Al acercarse la fecha de los comicios, era evidente que ninguno de los tres candidatos obtendría la mayoría absoluta y habría de ser el

Congreso Nacional el que tendría que elegir al mandatario. Ello causó preocupación entre los partidarios de Alessandri, puesto que se temía que, aunque "don Jorge" obtuviera el primer lugar, Tomic y Allende podrían ponerse de acuerdo para elegir a la segunda mayoría como presidente (su sospecha no era infundada, puesto que efectivamente sus dos rivales habían hecho un pacto secreto al respecto). Por ello, se intentó instalar la noción de que, independiente de los equilibrios en el Congreso, este debía elegir a la primera mayoría relativa, como había sido hasta entonces la tradición histórica. El propio Alessandri, en una carta abierta al radical Julio Durán, se comprometió a "que se proclame al candidato que obtenga la primera mayoría en las urnas".

A comienzos de mayo, el comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, fue consultado por un periodista de *El Mercurio* sobre la actitud del Ejército en caso de que se rompiera la tradición y se eligiera a la segunda mayoría. El uniformado respondió: "Nuestra doctrina y misión es el respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión nuestra que sea respetado en su decisión". No había ninguna novedad en las declaraciones de Schneider, pero la frase fue interpretada como una intervención política del comandante en Jefe, particularmente por quienes pretendían evitar una victoria de Allende a toda costa.

La campaña presidencial se desarrolló con un alto nivel de polarización, con algunos toques de violencia callejera. No obstante el día de la elección, el 4 de septiembre, fue tranquilo y sin mayores incidentes. Los resultados se conocieron esa misma noche, con Allende a la cabeza, con 1.070.334 votos, que representaban el 36,2% de las preferencias, seguido por Alessandri con 1.031.159 (34,9%) y Tomic con 821.801 (27,8%). En la ocasión hubo 31.505 votos blancos o nulos, que representaron el 1,2%.

Hay que preguntarse por qué la gente votó por Allende, quien tuvo una campaña movilizadora, con gran presencia de artistas y música de campaña, que fue creciendo con el paso de las semanas. Si bien la UP y el propio candidato colocaron al programa

como centro de su acción política, es dudoso que la mayoría de los votantes lo haya leído o siquiera considerado. Más influyentes parecieron propuestas como las "40 medidas", acciones inmediatas, rápidas, que prometían una mejora en la calidad de vida de la población, especialmente en los sectores populares, que se identificaron e ilusionaron con esta nueva alternativa política. Y es probablemente en estos aspectos en donde se puede explicar mejor la victoria de Allende, quien le prometía a la población que usaría toda la potencia del aparato estatal para garantizarles una mejor calidad de vida. Ya habiendo probado las alternativas de derecha y democratacristiana en los gobiernos pasados, tenía sentido darle la oportunidad a otro proyecto. Con todo, resulta claro que el piso de votos de izquierda era en torno a un tercio del electorado, por lo cual el porcentaje obtenido por su candidato en modo alguno es sorprendente y fue incluso menor que el que había logrado en 1964.

Tras conocerse la noticia de la victoria, los partidarios de Allende estallaron en un júbilo desbordante, saliendo a las calles a celebrar. Incluso varios jóvenes democratacristianos se sumaron a los festejos, símbolo de la cercanía ideológica de ambos proyectos. Allende ocupó la ocasión para dirigirse a sus seguidores desde los balcones de la FECh:

> "Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo.
> Por eso, esta noche, que pertenece a la historia, en este momento de júbilo, yo expreso mi emocionante reconocimiento a los hombres y mujeres, a los militantes de los partidos populares e integrantes de las fuerzas sociales que hicieron posible esta victoria que tiene proyecciones más allá de las fronteras de la propia patria".

Esta alegría contrastaba con el temor y preocupación de los partidarios de Alessandri, que se quedaron sin dirección alguna, puesto que su candidato no se dirigió al público esa noche, a pesar

de que constitucionalmente todavía podía ser elegido. Parecía una aceptación tácita de la derrota por parte de Alessandri.

Pero quedaba todavía el problema de la elección del Congreso Pleno. En tal sentido, el que hacía la diferencia era la Democracia Cristiana, pues con sus votos podían elegir al próximo mandatario. El ambiente político los impulsaba a reconocer el mejor derecho de Allende a ser presidente, ya que había obtenido la primera mayoría relativa y su proyecto político parecía más cercano a lo que proponía Tomic. No obstante, varias voces dentro del partido alertaban sobre los peligros que podría representar un gobierno marxista para las libertades políticas. Por ello, se impulsó la idea de condicionar su votación en el Congreso Pleno a la aprobación de una serie de reformas constitucionales. Un grupo dentro del partido, liderado por Patricio Aylwin, consideraba que le correspondía a la DC presentar las reformas, sin negociación previa, pero terminó triunfando una propuesta de Rafael Moreno, representando al sector tercerista, por la cual las reformas serían negociadas en conjunto con la UP. Inicialmente, Allende dijo que esto era innecesario, ya que su propia trayectoria política era la mejor garantía posible. Pero en vista de las circunstancias, aceptó negociar. La Moneda bien valía una misa.

El resultado fue lo que se conoció como el "Estatuto de Garantías Democráticas". Este buscaba garantizar el funcionamiento de los partidos políticos, asegurando su libertad de organización interna y de acción; la libertad de expresión (con los medios de comunicación siendo expropiables únicamente mediante una ley); la libertad de reunión; la libertad de enseñanza (estableciéndose que la educación pública sería democrática, pluralista y sin orientación partidaria); la inviolabilidad de las comunicaciones epistolares y telefónicas; la libertad de trabajo y la existencia libre de sindicatos y federaciones; la libertad de movimiento; el derecho a la seguridad social; y el derecho de las personas y grupos a participar en la vida social, cultural, política y económica del país.

Varios de los aspectos de estas reformas constitucionales chocaban directamente con elementos centrales del programa de gobierno de la Unidad Popular, como en el caso de las libertades de

expresión y enseñanza. Una vez en el gobierno, Allende diría que el Estatuto no representó una verdadera negociación, puesto que la UP no había modificado "ni una coma del programa". Era una pretensión de reconciliar lo irreconciliable, que inevitablemente conduciría a la colisión frontal del gobierno con la Constitución. Pero ello todavía estaba lejano en el horizonte, en esos febriles días de octubre de 1970.

Los intentos para evitar la asunción de Allende: el "Gambito Frei" y el asesinato de Schneider

Paralelo a las negociaciones entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, hubo esfuerzos por parte de otros grupos, que buscaban impedir por todos los medios la llegada de Salvador Allende a La Moneda. Una de las primeras ideas que surgió fue la posibilidad de que el Congreso eligiera a Alessandri y que este luego renunciara inmediatamente a la presidencia, motivando una nueva elección presidencial, en la que podría presentarse Frei como candidato, quien vencería fácilmente a Allende con el apoyo de la DC y la derecha.

La idea originalmente había surgido de un grupo de alessandristas, logrando que su candidato hiciera una declaración con la que renunciaría al cargo en caso de ser elegido por el Congreso. Pronto la idea, que comenzó a ser denominada como el "Gambito Frei", encontró adherentes dentro del gobierno, si bien siempre de manera subrepticia. También hubo otro partidario de esta solución, el gobierno estadounidense de Richard Nixon.

Desde la elección de 1964, los norteamericanos habían comenzado a financiar encubiertamente a grupos políticos chilenos, particularmente la Democracia Cristiana, con el fin de evitar una posible victoria del candidato marxista. Deseaban que Chile se transformara en una alternativa democrática a la Revolución Cubana, mostrando que era posible hacer reformas profundas en democracia, como país estrella del programa de la Alianza para el Progreso. Por ello, la ayuda encubierta fue acompañada de

numerosos créditos para el desarrollo. El cambio de administración en Washington, del demócrata Lyndon Johnson al republicano Richard Nixon en 1969, hizo que Chile perdiera prioridad.

Para la elección de 1970, la Casa Blanca desatendió en gran parte la situación chilena y decidió no apoyar ni a Tomic ni a Alessandri, prefiriendo en cambio una subvención a una campaña publicitaria contraria a Allende (lo que en la izquierda se denominó como la "campaña del terror"). En ello influyeron mucho las opiniones del embajador estadounidense en Chile, Edward Korry, quien desconfiaba tanto de Tomic (porque amenazaba intereses norteamericanos) como de Alessandri (a quien consideraba que representaba a los grupos más reaccionarios, lo que podría provocar una reacción de la izquierda). En el fondo, se estimaba que esta ayuda implicaría un apoyo tácito a Alessandri, pues se pensaba que la ventaja con la que contaba sería suficiente. Cuando la campaña alessandrista comenzó a verse en problemas, Washington comenzó a aumentar los montos para la propaganda anti-Allende, hasta gastar 435 mil dólares. No obstante, esta campaña no tuvo la fuerza que su equivalente de 1964, pues el público se había acostumbrado a las acusaciones de que Allende convertiría a Chile en una nueva Cuba, perdiendo tanto en novedad como en credibilidad.

El resultado del 4 de septiembre fue recibido en la Casa Blanca con horror. Nixon creía que se le acusaría de haber "perdido a Chile", tal como él había acusado a los demócratas de perder a Cuba. Pidió que se hiciera algo, lo que fuera, para evitar que Allende resultara elegido. Autorizó que se gastaran hasta 10 millones de dólares, con el objetivo de "hacer chillar la economía" chilena. Pero las posibilidades reales eran muy limitadas. Kissinger reflexionaría que "Nixon en realidad no presentó ningún plan, solo un deseo apasionado, desenfocado y nacido de la frustración, de hacer 'algo'". Las medidas que pudo tomar la Casa Blanca fueron muy limitadas: se retrasaron algunos créditos, se rebajó la clasificación de Chile en el Eximbank, junto con discutir la situación con algunas compañías estadounidenses en Chile. Nada de ello podía modificar en lo más mínimo el ambiente político.

Por esto, Washington apoyó la postura del Gambito Frei. El embajador Korry se enteró de la idea por parte del ministro de Defensa de Frei, Sergio Ossa, que pedía que los EE.UU. dieran garantía a los involucrados para que, en caso de que el plan fallara, estos pudieran salir del país y evitar las represalias que pudiera desatar la izquierda.

Al poco tiempo el plan del Gambito Frei comenzó a adoptar ribetes más conspirativos. El propio presidente consideraba que la elección de Allende por el Congreso dependía del mantenimiento de un ambiente de tranquilidad en el país. Por ello, para evitar la elección se debía crear un clima de crisis política y económica a corto plazo, que justificara tomar medidas drásticas, incluyendo la participación de militares. Pero Frei nunca se decidió por completo, por temores sobre su viabilidad y por dudas morales.

Hubo un intento de crear un pánico económico, a través de un discurso del ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, en el cual advertía sobre la crítica situación económica del país como consecuencia de la elección. Pero si bien hubo un ambiente de crisis económica, esta no se transformó en una crisis política. Frei esperaba que la crisis motivara a los militares a actuar por su cuenta. Los uniformados, por su parte, habrían esperado una señal de Frei para intervenir. El 24 de septiembre, el presidente le dijo a Korry que había renunciado a la posibilidad de un gabinete militar, poniendo fin a la idea del "gambito". También Alessandri pidió a los parlamentarios que no votaran por él en el Congreso Pleno, para que Allende pudiera asumir en un clima de tranquilidad.

Pero los movimientos para evitar la asunción a Allende no se detuvieron, pues permaneció la idea de crear una situación de caos en el país y provocar una intervención militar. En ello tomaron un papel central los generales Roberto Viaux y Camilo Valenzuela. Estos desde el primer momento habían aunado esfuerzos con grupos nacionalistas, los que realizaron atentados explosivos para provocar una situación de incertidumbre. Viaux y Valenzuela se convencieron de que existía un obstáculo, el general René Schneider, quien impediría cualquier aventura política del Ejército. Por ello elaboraron un plan que les permitía deshacerse

del obstáculo y propiciar una crisis: secuestrar al comandante en Jefe por 48 horas, para causar una conmoción que propiciaría una intervención de los militares.

Viaux y Valenzuela le presentaron sus planes a la CIA. Si bien la agencia era renuente a relacionarse con el primero, decidió apoyar a Valenzuela y le entregó armas, municiones y dinero. Parecían no tener claro que ambos eran parte del mismo grupo, en el que también estaban involucrados otros altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El 22 de octubre, el automóvil del general René Schneider fue interceptado por un grupo de hombres armados que intentaron secuestrarlo. El general trató de resistirse, por lo que uno de los secuestradores le disparó, dejándolo gravemente herido. Fue conducido al Hospital Militar, pero no pudieron salvarle la vida. Falleció el 25 de octubre.

El atentado tuvo un efecto contraproducente para lo que esperaban los complotados, pues no hubo una situación de caos, sino indignación y condena por el crimen. La figura de Allende también se agrandaba, como asimismo sus credenciales democráticas, aun cuando solo fuera por contraste con los complotados, quienes fueron descubiertos y arrestados rápidamente. El 24 de octubre, Allende fue elegido por el Congreso Pleno por una amplia mayoría: 153 votos, contra solo 35 de Alessandri y 7 en blanco.

El atentado hizo que Schneider se transformara en un símbolo, particularmente para la izquierda, de lo que debía ser un militar constitucionalista. Se comenzó a denominar "doctrina Schneider" a la idea tradicional de que los militares no debían intervenir en la vida político-partidista, siendo su rol el del cumplimiento irrestricto de la Constitución.

EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

La euforia de los primeros meses

Allende asumió como presidente el 3 de noviembre de 1970. En su primer gabinete estuvieron representados todos los partidos de la Unidad Popular, entre los que destacaban las figuras de José Tohá (socialista) en Interior, Clodomiro Almeyda (socialista) en Relaciones Exteriores, Pedro Vuskovic (independiente de izquierda) en Economía y Jacques Chonchol (MAPU) en Agricultura.

Junto con el gabinete, existía en paralelo otro organismo, el Comité Político de la Unidad Popular, conformado por los líderes de los partidos que integraban la coalición de gobierno. Este tuvo su origen durante la redacción del programa de gobierno y su fin era evitar un gobierno personalista y garantizar el cumplimiento del programa, teniendo en la práctica un poder de veto por sobre las decisiones del presidente. A contrapelo del presidencialismo chileno, este comité se planteó muchas veces en contradicción con el gobernante, puesto que funcionaba por unanimidad, por lo que bastaba que tan solo un partido se opusiera a una decisión para que esta se paralizara.

Otra novedad que trajo el gobierno de Allende fue la creación del llamado Grupo de Amigos Personales (GAP), organismo paramilitar encargado de la seguridad del mandatario. Existía la idea, reforzada tras el atentado a Schneider, de que la vida del presidente solo podía confiársele a militantes leales a su persona y proyecto político. Implicaba una desconfianza de las instituciones uniformadas, especialmente Carabineros. La existencia de este grupo fue constantemente cuestionada, ya que se consideraba que se encontraba fuera de la ley o al menos no estaba autorizado

legalmente. A pesar de algunas promesas de que se regularizaría mediante un proyecto de ley, este nunca sería aprobado.

En sus primeras semanas en la presidencia, Allende aprovechó al máximo el periodo de "luna de miel" con la opinión pública que tiene todo presidente. Su herramienta predilecta eran sus dotes oratorias, buscando darle un sentido épico al proyecto político de la Unidad Popular, presentándola como la conclusión de todas las luchas históricas del pueblo de Chile. Dijo en el Estadio Nacional al poco de asumir:

> "Del pueblo sufrido, que soportó por siglo y medio, bajo el nombre de Independencia, la explotación de una clase dominante incapaz de asegurar el progreso, y de hecho, desentendida de él. La verdad, lo sabemos todos, es que el atraso, la ignorancia, el hambre de nuestro pueblo y de todos los pueblos del Tercer Mundo, existen y persisten porque resultan lucrativos para unos pocos privilegiados. Pero ha llegado por fin el día de decir basta. ¡Basta a la explotación económica! ¡Basta a la desigualdad social! ¡Basta a la opresión política!
> Hoy con la inspiración de los héroes de nuestra patria, nos reunimos aquí para conmemorar nuestra victoria, la victoria de Chile; y también para señalar el comienzo de la liberación. El pueblo, al fin hecho Gobierno, asume la dirección de los destinos nacionales".

El suyo era un discurso convencido pero polarizador, mostrándose como representante y campeón de la gran mayoría de los chilenos, el pueblo, al que contraponía una minoría egoísta, cuyo control sobre las riquezas del país él vendría a terminar. El problema es que tenía un error de juicio, por cuanto no contaba con la mayoría de la población, minoría gobiernista que también se expresaba en el Congreso Nacional, aunque Allende sostenía liderar la representación del pueblo. Esta autoidentificación también le causó uno de sus primeros errores importantes, al decir que él no era el presidente de todos los chilenos:

> "Yo no soy Presidente del Partido Socialista, soy Presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy el Presidente de todos los chilenos. No soy el hipócrita que dice eso, otra cosa muy distinta es que yo respete a todos los chilenos y que las leyes se apliquen para todos los

> chilenos. Pero yo sería un hipócrita si dijera que soy Presidente de todos los chilenos. Hay algunas gentes que quisieran que estuviera frito en aceite, y son chilenos; soy Presidente de la Unidad Popular, pero tengo sí la obligación de preocuparme de Chile, que no pertenece a la Unidad Popular, y preocuparme de beneficiar la vida no de la gente de la Unidad Popular, sino de todos los chilenos".

La frase es ambigua, en cuanto se puede entender que Allende no se concebía como el presidente de todos los chilenos por cuanto había opositores que no lo reconocían como tal, que le odiaban sin conmiseración alguna. Pero la cuña terminaría por implantarse en la conciencia colectiva, particularmente de la oposición, que la presentó como una prueba del sectarismo del presidente.

Sin embargo, pocos pensaban de esa forma en los primeros meses del gobierno de Allende. La explosión de gasto público que desató el gobierno se convirtió en un *boom* pasajero, con un aumento significativo del poder de compra, que había estado tan golpeado por la inflación de los años precedentes. En tales circunstancias, la izquierda se encontró en una posición envidiable para las elecciones municipales de abril de 1971. La oposición, dividida y desorientada, no logró crear una narrativa coherente o atractiva. En cambio, la UP lanzó un mensaje claro, apoyar a sus candidatos era apoyar al gobierno del presidente Allende. El resultado fue contundente, un 49,27% de los electores votaron por candidatos de la UP. Si a ello se le suman los votos de la Unión Socialista Popular, la izquierda alcanzaba una mayoría absoluta del 50,33%. A este triunfo se le sumaba la victoria en una elección complementaria de Senador por Chiloé, Aysén y Magallanes, en la que Adonis Sepúlveda venció ampliamente al democratacristiano Andrés Zaldívar y al radical democrático Jorge Ovalle.

Era un gran golpe psicológico, pues la Unidad Popular podía decir que contaba con el apoyo mayoritario de la población, aunque por ser una elección municipal, no representó cambios substanciales en la distribución del poder político.

Donde sí comenzaron a verse movimientos importantes a nivel político fue en la definición de los partidos frente al nuevo

escenario. En la izquierda comenzaron a surgir los primeros síntomas de distancia respecto a cómo proceder con los cambios estructurales, con dos posiciones que se han denominado "gradualistas" y "rupturistas", cuyos partidarios también eran sindicados como "reformistas" y "revolucionarios". El gradualismo era promovido principalmente por el Partido Comunista, que postulaba una disciplina estricta con respecto al cumplimiento del programa, en el sentido de que no podían saltarse etapas. Esto incidía directamente en la relación con los militantes y las bases sociales, que debían circunscribir su acción según el camino que definieran el gobierno y la coalición gobernante.

El Partido Comunista estaba dirigido desde 1958 por Luis Corvalán, liderazgo más bien gris y burocrático, en el que había poco espacio para las disidencias y se hacía de la disciplina ciega una virtud. Por lo mismo, el chileno fue quizás el Partido Comunista más leal a las directrices de Moscú, que para el caso nacional recetaba una transición al socialismo por vías institucionales en alianza con sectores burgueses progresistas.

En el Partido Socialista, tradicionalmente más heterodoxo e indisciplinado que el Comunista, las posiciones más rupturistas tuvieron un triunfo con la elección de Carlos Altamirano Orrego como Secretario General a comienzos de 1971. Proveniente de la aristocracia, Altamirano se unió al Partido Socialista en 1945, siendo cercano a Allende en esa colectividad. Parlamentario desde 1961, apoyó la vía armada durante el Congreso Socialista de Chillán de 1967, lo que tensó sus relaciones con Allende. Como muchos dentro del partido, sentía una pasión por el ejemplo de la revolución armada de Cuba. Manifestando el contraste, afirmaba en 1967:

> "Nosotros... aún continuamos hablando de alianzas políticas, de pactos electorales; en Cuba, nadie habla de alianzas políticas; ni de pactos electorales; ellos preguntan por los frentes guerrilleros. Aquí nosotros hablamos de partidos políticos, allá ellos hablan de ejércitos del pueblo.
> A la antigua lucha electoral y pacífica ellos contestan con un audaz llamado a la lucha armada, revolucionaria, en escala continental".

No obstante, Altamirano nunca fue completamente coherente respecto a la violencia. Ante los críticos, decía que los socialistas "predicamos una concepción profundamente humanista. Interpretamos las viejas esperanzas de los desposeídos de la tierra. Solo estamos defendiéndonos de la violencia bárbara, primaria y reaccionaria, que impide las grandes transformaciones y cambios". En contraste con su admiración por la violencia, Altamirano despreciaba abiertamente el sistema democrático, afirmando que el de la UP no sería un gobierno "que continúe la rotación partidista del ejercicio del poder dentro de las reglas burguesas de la democracia representativa".

Al ser elegido secretario general, el pleno del partido se sumó oficialmente a estas ideas: "Nuestro objetivo... debe ser el de afianzar la acción de las masas, aplastar la resistencia de los enemigos y convertir el proceso actual en una marcha irreversible hacia el socialismo". Se pretendía constituir al PS en la vanguardia de la acción revolucionaria, a superar la condición pluriclasista de la UP mediante la dinámica revolucionaria de las masas e incorporar a los trabajadores al pleno ejercicio del poder. Había un deseo de acelerarlo todo, de saltarse etapas, incluso ir más lejos que el programa.

La distinción entre gradualismo y rupturismo no debe hacer perder de vista que la meta era la misma, el establecimiento del socialismo en Chile. La diferencia era meramente táctica o de velocidad. Tampoco implicaba que los comunistas fueran menos sectarios e intolerantes. En declaraciones de sus dirigentes y sus medios de comunicación, constantemente favorecían la polarización, demonizando a los opositores (casi todos eran catalogados de "fascistas") y exigiendo lealtad total al programa.

En la oposición, la Democracia Cristiana se encontraba en una disyuntiva. Por su autodefinición de partido reformista –incluso revolucionario– y que, al menos según el programa de Tomic, buscaba superar el capitalismo, existía cierta simpatía por las reformas impulsadas por el gobierno. Por contraparte, había un sentimiento instintivo de desconfianza hacia el marxismo, ya que podía eventualmente conducir al país por un camino de

arbitrariedad y violencia. En estos primeros meses de euforia, predominó en la DC el primer sentimiento, de ser una "oposición progresista". Por sobre todo, se decidió no colaborar por ningún motivo con la derecha.

Para el Partido Nacional (PN) la definición fue más simple: fueron oposición decidida desde el primer momento. Su rechazo al marxismo era en todas sus formas, acusando que este pretendía socavar los derechos y libertades de los chilenos. Su líder, Sergio Onofre Jarpa, le había impreso un nuevo estilo, más decidido y confrontacional; a las tradicionales fuentes ideológicas conservadoras y liberales también se había sumado el nacionalismo. El PN hizo esfuerzos para convencer a la Democracia Cristiana de aunar esfuerzos contra el marxismo, pero esto cayó en oídos sordos, al menos en estos primeros meses.

Al dar su primera cuenta al Congreso Nacional el 21 de mayo de 1971, Allende planteó una hoja de ruta para continuar las reformas. Ya estaba en marcha la reforma agraria, mientras la nacionalización del cobre solo esperaba la aprobación del Congreso Pleno. Por ello, ahora llamaba a la transformación del sistema jurídico. Esto iba acompañado con una advertencia ambigua, de que si no se realizaba, podría haber un desborde violento:

> "Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, queremos evitar".

Decía que el Congreso, "que tan bien sirvió a las clases dominantes", era "incapaz de transfigurarse para llegar a ser el Parlamento del Pueblo chileno". El problema era cómo realizar esta transformación institucional. Una propuesta que circulaba era de convocar a un plebiscito, con el que se podría reemplazar el Congreso por una Asamblea del Pueblo. El plebiscito podría convocarse en caso

de enviarse una reforma constitucional y que esta fuera rechazada por el Congreso, como le manifestó el presidente Allende a Régis Debray. Pero se dejó escapar esa oportunidad. Al parecer ello se debió a las objeciones del ministro Vuskovic, quien afirmaba que un plebiscito haría peligrar el plan económico y aceleraría la formación de un frente común de la oposición.

El asesinato de Pérez Zujovic y sus consecuencias

El ambiente de optimismo generalizado se vio trágicamente interrumpido el 8 de junio de 1971. Ese día, el exministro del Interior de Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic (DC), fue asesinado en su auto mientras se dirigía a su trabajo. La muerte conmocionó al país, en el que era el segundo magnicidio en menos de dos años, y que se daba en circunstancias muy similares al anterior. El gobierno acusó que los asesinos pertenecían a la extrema derecha y buscaban desestabilizar a su administración. No obstante, la investigación dio pronto con los verdaderos culpables, miembros de un pequeño grupo de ultraizquierda conocido como la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). Esta era una agrupación marginal, de rechazados por la sociedad, a tal punto que algunos de sus miembros habían sido expulsados del MIR por extremistas. El grupo había cometido diversos crímenes, incluyendo el asesinato de un pequeño comerciante durante el gobierno de Frei. Al llegar a La Moneda, Allende los indultó junto con otros extremistas que se encontraban en prisión. Su argumento era que estos eran "jóvenes idealistas".

Pérez Zujovic fue elegido como blanco debido a la campaña de demonización que había desatado la izquierda en contra suya, acusándolo de ser el responsable de las muertes de la llamada "matanza de Puerto Montt". Acorralados por la persecución policial, los principales cabecillas del VOP murieron enfrentándose con policías de Investigaciones y Carabineros.

El asesinato tuvo profundas consecuencias políticas, dando un giro completo en la relación entre la DC y el gobierno. Si hasta entonces los democratacristianos habían sido una oposición más bien displicente con el gobierno, la muerte de uno de los suyos tocó una fibra sensible, no solo entre la dirigencia, sino también entre los militantes de base. En adelante, comenzaría un inexorable alejamiento frente al proyecto de la UP. A ello colaboró que la izquierda condenara el asesinato, pero no por el hecho mismo, sino por los efectos políticos que causaba al gobierno, y a que no asumiera responsabilidad alguna, ni siquiera por el indulto a los "jóvenes idealistas".

Signo de este nuevo ambiente fue que con motivo de una elección complementaria por Valparaíso, en julio de 1971, se presentaron solo dos candidatos, uno del gobierno y otro democratacristiano, con abstención de la derecha. El candidato de oposición, Óscar Marín, obtuvo un triunfo que, a pesar de ser estrecho (50,8%), no le quitó significación al suceso, puesto que se abría el camino para una actuación unitaria de la oposición, si bien todavía quedaban muchas desconfianzas por superar.

Una de las consecuencias de la elección complementaria fue que parte del grupo más izquierdista dentro de la DC, el llamado tercerismo y la juventud, decidieron romper con el partido, pues se negaban a participar de cualquier alianza con la derecha. La nueva agrupación tomó el nombre de Izquierda Cristiana, elaborando una declaración de principios en que defendían un "humanismo cristiano... plenamente compatible con el socialismo". Con seis diputados, la agrupación se uniría a la UP. Si bien en la DC sintieron el golpe, el partido terminó menos fraccionado y más claramente unido bajo las ideas y personalidad de Eduardo Frei Montalva, quien comenzaba a regresar a la vida pública. Incluso los sectores de izquierda que se quedaron dentro del partido adoptaron una postura más definida de oposición. Como dijo Bernardo Leighton: "Con la derecha no hemos pactado ni pactaremos. Pero si el día de mañana llegara una hecatombe constitucional a este país, nos iremos con la derecha y con el diablo para defender la democracia".

Otro ajuste se dio en el Partido Radical, que había sido el partido dominante de la política chilena a mediados de siglo, pero que se encontraba de capa caída. Su flexibilidad ideológica no calzaba bien con una época en que predominaban doctrinas claras y excluyentes. De su junta nacional de julio y agosto de 1971, surgió una declaración de principios en que se renunciaba a la tradición histórica del partido y se adoptaba acríticamente el lenguaje marxista. En respuesta, un grupo de 5 senadores y 7 diputados renunció a la agrupación y formó el Partido de Izquierda Radical, si bien este mantuvo su apoyo (al menos por el momento) a la Unidad Popular, a la que ingresó en propiedad en enero de 1972.

El plan económico

El manejo económico de la Unidad Popular se centraba en el control del Estado sobre la economía nacional, tanto en los aspectos de producción, como distribución, inversión y fijación de precios. Todo iba a ser determinado por el Estado. En tal sentido, la Unidad Popular, más que cambiar radicalmente el rumbo de la economía chilena, se dedicó a exacerbar varias tendencias que provenían de las décadas anteriores.

Desde la Gran Depresión –en realidad, incluso un poco antes– el Estado acrecentó su influencia en la economía. Importante fue el control de los precios, que comenzó con la formación del Comisariato General de Subsistencias y Precios, establecido por el Decreto Ley N° 520, del gobierno de facto de la República Socialista en 1932, pero usado con avidez por sus sucesores, para intentar poner freno a las alzas por vías legales, con la amenaza del uso de la ley. Ello provocó que los productores se acostumbraran a tener precios fijos, desincentivando la competencia y la innovación, ya que quien determinaba cuánto se pagaba por los productos no era el consumidor, sino que el gobierno, por lo que más valía preocuparse de complacer a este último. Esta falta de competencia, la distorsión de los precios y la corrupción

derivadas de la fijación hizo que esta política, que hacía gastar numerosos esfuerzos, fuera contraproducente y ayudara al proceso de alzas.

Esto particularmente se dio en el control de los precios de los alimentos, cuyo fin era garantizar que estuvieran al alcance de la población, especialmente la urbana, lo cual dañó profundamente al sector agrícola, que dejó de ser autosuficiente. También se paralizó la modernización de relaciones de trabajo mediante pagos en salarios y volvieron a predominar formas premodernas como el inquilinaje, en el que al trabajador se le compensaba principalmente con regalías, dando un pedazo de terreno, y a cambio tenía que cultivar en las tierras del patrón. Ello aceleró la migración del campo a las ciudades, que no estaban en condiciones de recibir tantas personas, muchas de las cuales cayeron en la marginalidad.

Estos años también se caracterizaron por una economía protegida frente a la competencia externa. Si bien los aranceles chilenos fueron altos desde las últimas décadas del siglo XIX, a partir de 1930 hubo una mayor desconexión con la economía internacional, con intentos de desarrollar un mercado local relativamente autosuficiente. Irónicamente, todo esto hizo que el país dependiera aún más del único producto que podía vender a precios competitivos, el cobre. Se perdió el acceso al crédito internacional y hubo constantes déficits en la balanza de pagos, que intentaron superarse con la fijación del dólar. Se terminó con una plétora de diferentes precios para esta moneda, dependiendo de los productos que se quisieran importar, creando un total caos y altos niveles de corrupción.

Desde los gobiernos radicales en adelante, hubo una política de crear empresas estatales mediante la acción de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Las más importantes y exitosas fueron ENDESA, ENAP y la Compañía de Acero del Pacífico, esta última en colaboración con capitales privados. La idea era crear empresas estratégicas que establecieran las bases para el desarrollo industrial del país. Pero si bien se había logrado establecer un control directo e indirecto sobre la economía, no llegó el esperado desarrollo, pues el crecimiento fue lento y

lleno de desequilibrios. El más importante entre estos fue una alta inflación –una enfermedad crónica de Chile– derivada de la alta emisión monetaria sin respaldo, cuyo fin era contener los permanentes déficits fiscales que implicaba el proceso de industrialización y la entrega de beneficios sociales.

Esta frustración hizo que se dieran diversos ensayos para dinamizar la economía. Con algunos intentos a medio camino de liberalizar bajo Ibáñez y Alessandri, el gobierno de Frei enfatizó el control estatal, si bien confiaba en la ayuda norteamericana y el precio del cobre como panaceas para salir de la pobreza. El retorno de la inflación durante la segunda mitad de su gobierno y las expectativas desmedidas creadas dentro de la población preparó el terreno para una nueva experimentación, exacerbando los aspectos de control político sobre la economía.

La política económica de la Unidad Popular afirmaba sin ambages que su objetivo era la transición hacia el socialismo. Este debía entenderse en su sentido más clásico, como el control del Estado sobre los medios de producción, lo cual implicaba la estatización de la banca, las grandes empresas, la nacionalización del cobre y la profundización de la reforma agraria. Un aspecto central en la estrategia era la definición de tres áreas de la economía: estatal, privada y mixta, si bien la primera tuvo primacía absoluta. Sin embargo, quedaba una ambigüedad: ¿quién controlaría efectivamente las empresas públicas? ¿El Estado o los trabajadores? Una disyuntiva que en cualquier caso dejaba claro que el proceso se decantaría por el control estatal de la economía.

En un primer momento la respuesta estaba clara, el área mixta estaría caracterizada por el control estatal. Esta estatización se llevó a cabo de diversas formas. En lo que respecta a la banca, se utilizó como estrategia la compra de acciones por parte de la CORFO, aprovechando que el mercado estaba deprimido y el organismo estatal era prácticamente el único comprador. La mayor parte de los bancos aceptaron vender sus acciones, pero hubo excepciones, como el Banco de Crédito e Inversiones. Frente a tal negativa, el gobierno ordenó la intervención del banco, acusando ciertos procedimientos indebidos.

Para obtener el control de las grandes empresas productoras, el gobierno, junto con repetir la táctica de la compra de acciones, sumó otra herramienta, el uso de los llamados "resquicios legales". En particular, se usaba el mencionado Decreto Ley 520. Este permitía que el presidente, a solicitud del Comisariato (luego renombrado como Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO), pudiera expropiar cualquier explotación industrial, comercial o agrícola que se encontrara en receso. El ideólogo detrás del uso de esta norma legal fue el abogado Eduardo Novoa Monreal, quien se encargó de encontrarle una ruta jurídica al plan económico. Novoa afirmaba que la transición al socialismo "no podía ser llevada a cabo mediante la utilización del bagaje jurídico habitual de los hombres de derecho". Por ello se debía hacer una radical interpretación del derecho, torciendo incluso sus intenciones, para que la legalidad existente pudiera abrir el camino al socialismo. Novoa explicó que la importancia de "algunas leyes tradicionales [era] que, aplicadas imaginativamente, permitían obtener resultados concordantes con los que se proponía Allende en el campo económico y social". En la práctica era saltarse las atribuciones de otro poder del Estado, el legislativo, actuando por medio de hechos consumados.

Como el articulado del Decreto Ley solo podía ser utilizado si la industria estaba en "receso", el plan gubernamental fue sabotear deliberadamente la producción en las empresas por medio de la acción de sus militantes, que iniciaban huelgas y hasta tomaban el control físico de las fábricas. Venía luego el gobierno que, constatando la paralización de la empresa, procedía a nombrar un interventor. La Contraloría puso objeciones a varias de estas intervenciones, acusando que existía una ilegalidad de por medio, pero el gobierno salvaba la objeción mediante decretos de insistencia, los que debían llevar la firma de todos los ministros. Cuando los dueños recurrieron a los tribunales, estos en su mayoría emitieron sentencias favorables al gobierno. No obstante, a medida que se comenzaba a apelar a instancias judiciales superiores, estos comenzarían a revertir las intervenciones. Estas nuevas sentencias no fueron cumplidas por el gobierno.

La Unidad Popular se arrogaba así el monopolio de la interpretación de la ley, al punto de que su punto de vista era considerado superior al de la Contraloría y los Tribunales de Justicia, por lo que podía ignorar sus resoluciones. Era la lógica de que si el gobierno lo hace, entonces no puede ser ilegal. En el fondo, los resquicios legales no eran una forma imaginativa de interpretar la ley, sino que eran una violación abierta contra la legalidad; pero cubierta de una apariencia institucional.

La aplicación del Decreto Ley 520 tendría otro efecto no deseado por el gobierno. Si bien se concebía que se aplicara para aquellas empresas incluidas en el programa de la UP, ¿qué pasaba si los trabajadores, por iniciativa propia, se tomaban una empresa para que esta pasara al área social? Esta ambigüedad incentivó una serie de tomas e intervenciones que no estaban en los planes del gobierno, aumentando las estatizaciones al nivel de la mediana y pequeña industria, al punto de asfixiar por completo la magra área privada que ellos mismos habían establecido.

Como resultado de estas políticas, de 79 empresas estatales que existían en 1970, se pasaron a 202 en 1972. A ello se le debían sumar 350 empresas intervenidas, que se encontraban en el limbo, pues no eran propiedad legal del Estado, pero este las controlaba como quería, al punto de provocar graves pérdidas.

Junto a las estatizaciones, el ministro de Economía, Pedro Vuskovic, también enfatizó la reactivación de la economía mediante el aumento explosivo del gasto fiscal. Se entregó un importante aumento de salarios, que en términos reales promedió el 22%. Para combatir la cesantía, el Estado empezó a realizar contrataciones, llegando incluso a una sobredotación laboral.

Todas estas acciones del gobierno implicaron un masivo aumento del dinero circulante, que inevitablemente conduciría a una mayor inflación. Pero Vuskovic rechazaba la teoría económica clásica y planteaba una visión heterodoxa sobre los aumentos de precios. En su visión, el problema de la economía chilena se encontraba en que existía una capacidad ociosa en las industrias, puesto que había capacidad para producir, pero escaso poder de compra. Como solución se propuso aumentar la demanda a través de los

aumentos de sueldos. ¿Y cómo evitar la inflación? Pues mediante la fijación de los precios por parte del Estado. Las advertencias de que esto conduciría a la formación de un mercado negro, en vista de que los precios fijados eran menores que los costos de producción, fueron desoídos por las autoridades.

Todas estas recetas parecieron dar buenos resultados. La mayor capacidad adquisitiva resultó en la formación de una verdadera "fiesta del consumo", beneficiando asimismo a los productores, que buscaron responder a esta mayor demanda. Ello se tradujo en un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 8% en 1971. El desempleo cayó del 5,7% al 3,8%. Lo más sorprendente de todo fue que la inflación descendió de un 36,1% de 1970 a un 22,1% en 1971. También era evidente una redistribución del ingreso, en vista de que los salarios de los sectores de menores ingresos fueron los que registraron las mayores alzas.

Todo ello aumentó el ambiente de optimismo que rodeaba a los primeros meses del gobierno de la UP. Sin embargo, estaban también las raíces del desastre. Si bien las empresas pudieron producir más, no se lograron aumentar los turnos en la forma prevista por las autoridades. Por ello, el gigantesco aumento de la demanda se tradujo pronto en un déficit en cuenta corriente y de pagos y en el agotamiento de las reservas en divisas (se esperaba que la nacionalización del cobre las cubriera, lo que no sucedió).

El ímpetu estatizador detuvo su avance arrollador con motivo del intento de intervención de la Compañía de Papeles y Cartones, conocida popularmente como La Papelera. El gobierno había intentado comprar las acciones, pero los dueños de estas se habían negado. El asunto tenía una relevancia más importante que lo meramente económico, ya que la Papelera era la principal proveedora de papel a los periódicos, por lo que si quedaba en manos del gobierno, este podría controlar el suministro a los diarios, amenazando la libertad de prensa. En noviembre de 1971 se inició una campaña para salvar a la Papelera, creándose poderes compradores paralelos para contrapesar las ofertas de la CORFO. Los propios trabajadores de la empresa la protegieron de intentos de tomas por parte de partidarios del gobierno. Como

no pudo intervenir la empresa, el gobierno intentó estrangularla económicamente, fijando el precio del papel a niveles irrisorios para provocar su quiebra.

La situación de la compañía, bajo el eslogan "La papelera No", se convirtió en una causa célebre para la oposición, con gran despliegue publicitario. Durante el Paro de Octubre de 1972, se forzó a que el gobierno reajustara los precios del papel, pero ello solo contuvo por un tiempo los esfuerzos gubernamentales por estatizarla.

La nacionalización del cobre

Tras la gran depresión, el cobre reemplazó al salitre como la principal exportación de Chile. Las variaciones en su precio internacional podían acabar determinando si la economía chilena pasaba por un buen o mal año. Por lo mismo, no es de extrañar que el cobre fuera constante objeto de discusión, al verse como uno de los pilares del desarrollo chileno.

El cobre era explotado por grandes compañías mineras estadounidenses, que habían realizado inversiones principalmente a comienzos del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial se abrió un debate por la injerencia norteamericana en el cobre, particularmente por el establecimiento de un precio fijo para el metal. El entonces senador Salvador Allende jugó un rol central, al acusar que EE.UU. había fijado unilateralmente el precio, forzadamente bajo, haciendo perder al país unos 600 millones de dólares. Esto era falso, porque la fijación fue objeto de una larga negociación con el gobierno chileno e implicó un alza en los impuestos que debían pagar las empresas. Pero no importaba, pues el mito de que los norteamericanos explotaban el cobre chileno sin dejar nada a cambio se repitió hasta convertirse en dogma.

Durante el segundo gobierno de Ibáñez se aprobó la ley del nuevo trato, en la que se racionalizaban los tributos y se creaba el Departamento del Cobre, que tenía una labor fiscalizadora y de influir en el precio internacional del metal. De allí en adelante hubo

un permanente ímpetu por la nacionalización de esta industria, impulsada principalmente por la izquierda. Con la llegada de Frei a la presidencia, este intentó una vía mixta, que no ahuyentara a las inversiones extranjeras pero que permitiera un control del estado de la industria del cobre. Se ideó así la "chilenización", por la cual el Estado chileno compraría el 51% de las acciones de las minas y dejaría el 49% restante en manos de las compañías norteamericanas. Además, se creaban una serie de estímulos para nuevas inversiones.

Debido a que el cobre tuvo un alto precio, el que se haya dejado fuera a Chuquicamata y que las empresas del cobre continuaran dominando la gestión provocó que gran parte de la clase política chilena, incluyendo muchos democratacristianos, considerara que la "chilenización" había entregado demasiados beneficios a las empresas mineras. En reacción, el gobierno de Frei presentó un nuevo plan, la "nacionalización pactada", por la cual se compraba el 51% de Chuquicamata, mientras el 49% restante de esta mina y de El Salvador serían comprados en los años siguientes. Ello no calmó el malestar de la izquierda, que ya no solo pedía una nacionalización a secas, sino también que esta no tuviera indemnización, acusando que las compañías habían saqueado al país.

Al llegar a la presidencia, Allende puso al cobre como uno de los centros de su plan de transición al socialismo. La nacionalización fue presentada no solo como un acto económico, que permitiría superar el subdesarrollo, sino además como una reivindicación del orgullo nacional, un ajuste de cuentas con las compañías imperialistas que tanto habían sacado del país y tan poco habían dejado. Incluso se le llegó a calificar como "la independencia económica de la patria".

La nacionalización del cobre se realizó por medio de una reforma constitucional, que fue discutida en el Congreso Nacional durante el primer semestre de 1971, siendo aprobada por unanimidad. El ímpetu nacionalizador era demasiado fuerte dentro de la opinión pública para que algún sector pudiera resistir. Era una nacionalización a secas, en donde el Estado se quedaba con

la totalidad de la propiedad de las explotaciones de cobre. Pero también tenía un punto controversial: establecer que se debía descontar de la indemnización a las empresas las "rentabilidades excesivas" que estas habían tenido en las últimas décadas, que fue fijada en forma retroactiva. De tal forma, las empresas mineras no solo se quedaban sin indemnización, sino que debían pagarle al Estado chileno 360 millones de dólares por las utilidades excesivas.

Ello llevó a que el gobierno chileno entrara en curso de colisión directa con el gobierno norteamericano. En realidad, Washington aprovechó la ocasión para poder justificar una política económica restrictiva frente al gobierno chileno, terminando con los prestamos del Eximbank y votando en contra de Chile en los organismos financieros internacionales. Las propias compañías del cobre recurrieron a los tribunales, consiguiendo en algunas contadas ocasiones que se embargaran envíos de cobre. Frente a ello, la izquierda levantó la acusación de que Estados Unidos ejercía un "bloqueo invisible" contra Chile, siendo este el culpable de los problemas económicos, lo que les permitía desconocer los efectos negativos de sus propias políticas.

El gobierno chileno intentó buscar una resolución diplomática de la controversia, haciendo gestiones con los norteamericanos. Así, propuso recurrir a un tratado bilateral de 1914, nunca utilizado hasta entonces, para resolver la controversia mediante el recurso de arbitraje. El embajador chileno en Washington, Orlando Letelier, creía que el gobierno chileno no podría sobrevivir sin la ayuda económica norteamericana, por lo que recomendaba recurrir a un arbitraje internacional y buscar una forma creativa de indemnizar a las empresas. Pero estas propuestas encontraron una sonora negativa del Partido Socialista. Washington tampoco tenía interés en recurrir a un arbitraje según el tratado, en vista de que este era voluntario y no garantizaba el pago de indemnización.

Respecto al manejo del cobre por el gobierno chileno, este logró tener un desempeño aceptable, a pesar de que subió un 30% los costos de producción, debido a la sobredotación de trabajadores

y a las huelgas. Si a ello se le suma un descenso del precio en 1971 y 1972, el resultado fue que la nacionalización no logró cumplir con las desmedidas expectativas de la UP, que contaba con las utilidades del cobre para mantener los altos gastos en divisas. Se aprendía de golpe que no existía esa desproporcionada riqueza que supuestamente se llevaban las empresas norteamericanas, ni tampoco bastaba esta "recuperación de las riquezas" para sacar al país del subdesarrollo.

La reforma agraria

El gobierno de la Unidad Popular marcó la última etapa de un proceso de reforma agraria comenzado una década atrás por los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei, aunque en un contexto de mayor polarización, violencia política y extremismo revolucionario. Durante el siglo XX, la realización de una reforma agraria había sido una aspiración de distintos sectores políticos del país, tanto en la izquierda como en el centro. Durante los años 60, en medio de la "era de las revoluciones", la realización de una reforma agraria pasó a ser vista como una política indispensable –aun a costa del debilitamiento del derecho de propiedad– para superar el atraso y requisito mínimo para la realización de cambios estructurales. En esos años, Chile experimentó formalmente dos reformas agrarias distintas, formuladas en gobiernos diferentes y con propósitos disímiles.

Paradójicamente, la primera reforma agraria fue realizada en 1962 durante el gobierno de Jorge Alessandri –un independiente de derecha–, cuya aplicación estuvo fuertemente condicionada por la presión de Estados Unidos en el marco de la Alianza para el Progreso. Ante la perspectiva de evitar la expansión de revoluciones de corte marxista en América Latina, el gobierno norteamericano había impulsado programas de "modernización social" por todo el continente. En paralelo, la Iglesia Católica en Chile había hecho suyo el diagnóstico según el cual la construcción de una sociedad más justa pasaba por la aplicación de una reforma agraria,

implementándola primero en las tierras de la propia Iglesia. La reforma agraria de Alessandri estaba basada en criterios técnicos y tenía como objetivo fomentar la productividad del campo y, con esto, contribuir con el progreso social. Durante este gobierno se creó el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación de Reforma Agraria (CORA), encargados de llevar adelante el proceso. En lugar de expropiaciones masivas –que caracterizaron a las reformas agrarias de Frei y Allende–, el gobierno de Alessandri disponía la compra de predios, que serían adquiridos pagando un 10% del precio de compra al contado y el saldo restante en cuotas anuales en un plazo de quince años. En paralelo, establecía que era responsabilidad del Estado "crear y mantener adecuadas condiciones de mercado para los productos del agro, otorgar asistencia técnica y promover las facilidades de crédito, comercialización y transporte y las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente ley". Si bien quienes apostaban por una reforma agraria maximalista estimaron que la de Alessandri era una "reforma de macetero", fue durante su gobierno que se crearon las instituciones y los mecanismos que posibilitarían la aplicación de la reforma agraria.

En 1967, el gobierno de Eduardo Frei Montalva promulgó una nueva ley de reforma agraria (Ley N° 16.640), que iba mucho más lejos que la anterior. Según Jacques Chonchol, uno de los ideólogos de la Democracia Cristiana, se trataba de una reforma agraria "rápida, drástica y masiva". A diferencia de la anterior, junto con esgrimir argumentos técnicos de productividad, había un explícito propósito político de eliminar el latifundio y, con esto, liquidar una centenaria forma de vida asociada al campo tradicional chileno. Se trataba de una reforma agraria profunda que declaraba de utilidad pública –es decir, expropiables– los predios abandonados, mal explotados o mayores a ochenta hectáreas de riego básico. Muchos la consideraron un despojo, especialmente por las condiciones de la expropiación. Una parte del terreno expropiado –entre el 1% y el 10% del valor, dependiendo del caso– sería pagado al contado, mientras el resto se liquidaría

mediante bonos en un plazo máximo de treinta años. Además, una modificación a la ley de reforma agraria aprobada en enero de 1970, conocida como la "Ley Aylwin", por su autor, el entonces senador Patricio Aylwin, buscaba acelerar la expropiación de terrenos, estableciendo que la toma de posesión de los predios por parte de la CORA podía realizarse antes de concluir el proceso de evaluación y procedimientos indicados en la ley original. Si bien la Democracia Cristiana había promovido la reforma agraria con el eslogan "la tierra para el que la trabaja", comprometiéndose a hacer cien mil nuevos propietarios, lo cierto es que los predios explotados quedaron en manos de la CORA.

La idea de realizar una reforma agraria había estado presente por años en la izquierda chilena. El Partido Socialista la había incluido en su declaración de principios y fue un elemento programático presente en todas las candidaturas de Salvador Allende, desde 1952. Tal había sido la profundidad de la reforma agraria de Frei, que el gobierno de la Unidad Popular no necesitó una nueva ley para promover la colectivización del campo. Con lo establecido por el gobierno de Frei parecía ser suficiente, definiendo la UP que su principal objetivo político sería utilizar esa legislación para promover la extensión, aceleración y profundización de la reforma agraria.

El Programa de Gobierno de la Unidad Popular dio a conocer que la reforma agraria era parte esencial de las transformaciones revolucionarias que el país requería. Su realización era "inseparable del resto de la política general". El programa comprometía, en primer lugar, una "aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida... sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir reserva". Tal expropiación "podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas, animales, etc.)". El programa de gobierno, además, señalaba tres formas distintas que adquirirían los terrenos expropiados. Por una parte, la fórmula principal eran las "cooperativas de propiedad", bajo cuya fórmula se organizarían *preferentemente* las tierras expropiadas, añadiendo que "los campesinos tendrán *títulos*

de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa". El programa añadía que "en casos calificados *se asignarán tierras* a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario". Además, el programa establecía que "cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de cooperación mutua". Finalmente, el programa declaraba que "también se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna".

La Unidad Popular estimaba que la reforma agraria –y la consiguiente eliminación definitiva del latifundio– era de sus objetivos más importantes y una de las cuatro grandes transformaciones que proponía, junto a la nacionalización del cobre, la estatización de empresas –tanto de la industria como del comercio– y la expropiación de los bancos. Así lo señaló Allende en su discurso de la Victoria: "Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo".

La reforma agraria de Allende ¿era distinta de la de Frei? En términos formales, era una continuación de la anterior. Esta idea se vio reforzada tras el nombramiento de Jacques Chonchol como ministro de Agricultura. Chonchol había sido uno de los ideólogos de la reforma agraria democratacristiana y vicepresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario entre 1964 y 1969, desde donde dirigió su aplicación. Como ministro, señaló que la reforma buscaba terminar con el latifundio y establecer un nuevo modelo de agricultura cooperativa administrada por sindicatos campesinos. Sin embargo, en un nuevo contexto de revolución socialista, la reforma agraria de Frei iba a ser superada tanto por

su profundización como por el ejercicio indiscriminado de la toma de predios y la violencia en el campo.

La iniciativa de profundizar la reforma agraria tuvo una repercusión inmediata, cuyos efectos eran visibles ya antes del primer año de gobierno. En los primeros seis meses, la UP había expropiado tierras equivalentes a todo lo expropiado en casi una década por los gobiernos de Alessandri y Frei. En los años siguientes, entre 1971 y 1973, las expropiaciones casi triplicaron el número de predios expropiados durante el gobierno de Frei. Para realizar una reforma agraria más profunda, el gobierno de Allende terminó por expropiar predios cada vez más pequeños.

Predios y Hectáreas expropiadas 1965-1973

Año	N° de Predios	Hectáreas
1965	99	539.723
1966	265	525.171
1967	217	284.889
1968	223	655.867
1969	314	868.848
1970	297	1.218.349
1971	1.374	2.028.599
1972	2.189	3.009.246
1973	831	835.208

Fuente: Enrique Brahm, *Propiedad sin libertad: Chile 1925-1973*, p. 248. También en Alejandro San Francisco (Dirección General), *Historia de Chile 1960-2010*, Tomo 5, p. 396.

Entre 1970 y 1973, la reforma agraria se implementó en un nuevo contexto de radicalización revolucionaria, en el que la ley sería superada por las vías de hecho. Tal desbordamiento fue empujado por grupos de extrema izquierda como el MIR, cuyo brazo campesino, el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), jugó un rol central en fomentar la agitación en el campo y las tomas de

terreno como mecanismo para acelerar tanto la reforma agraria como la transición al socialismo.

Ya desde los primeros días de gobierno quedó definida una dinámica política que no se detendría sino tres años más tarde, tras el derrocamiento de Allende. Las altas expectativas generadas por la "vía chilena" repercutieron en una oleada de tomas de terreno y viviendas prácticamente desde la llegada de Allende a La Moneda. Si bien el gobierno insistió en que la Unidad Popular respetaría la legislación vigente, la situación rápidamente estaba fuera de control. Se trataba de una situación paradójica. Mientras por años la izquierda había alentado las tomas de terreno, ahora desde el gobierno les correspondía en teoría hacer cumplir la ley.

Aunque en el gobierno anterior habían existido episodios de violencia –como la "batalla de San Miguel" en 1968 o la resistencia en el fundo Santa María de Longotoma–, durante el gobierno de Allende la violencia y la agitación campesina se desataron a lo largo del país. Hubo toma de predios, fundos y casas patronales en todas las provincias agrícolas entre Aconcagua y Llanquihue. Tan solo en un año, entre 1970 y 1971, las tomas pasaron de 456 a 1.278. Una disminución de las tomas en 1972 –entonces fueron 307– se explica porque los predios mayores a ochenta hectáreas de riego básico ya habían sido expropiados o tomados. ¿Quiénes se tomaban los terrenos? Distintos testimonios coinciden en que la agitación campesina muchas veces era causada en su mayoría por agentes externos a los predios en cuestión. Bernardino Piñera, obispo de Temuco en ese entonces, recuerda en el libro *Un obispo en tiempos de cambio*:

> "Reconozco que había un clima de terrorismo... Todas las noches algún grupo de miristas, treinta, cuarenta, se iban a un fundo cualquiera a las dos de la mañana. Despertaban a los dueños de casa, les daban veinte minutos para vestirse, sacar su auto e irse a Santiago y se tomaban el fundo, y esta pobre gente tenía que irse donde unos parientes o a un hotel a las tres de la mañana y al día siguiente iban a los tribunales a poner su demanda".

Los partidos y movimientos políticos de la Unidad Popular y más a la izquierda de la UP también jugaron un rol en la agudización de la reforma agraria. El rol más notorio lo jugó el MIR y el MCR, que promovían directamente el ejercicio de la vía armada a través del "poder campesino". La aceleración de la reforma agraria era entendida por los líderes de esos movimientos como un mecanismo para la aceleración del proceso revolucionario que vivía el país. En un discurso en Temuco en noviembre de 1971, Miguel Enríquez exhortaba a "expropiar toda la gran propiedad agraria sin indemnización" y a "instaurar un gobierno revolucionario de obreros y campesinos". Uno de los centros de operaciones del MCR era el Campamento Lautaro, que operaba en el que había sido el Fundo Tres Hijuelas. En una de sus entradas, un letrero que daba la bienvenida señalaba: "Campamento Lautaro. Tierra o Muerte Venceremos. Movimiento Campesino Revolucionario", seguido de un "Los pobres bienvenidos, los ricos a la mierda MCR".

La conformación de un "polo revolucionario" en que confluía el MIR, el PS y la IC dio cuenta del extremismo revolucionario al interior de la izquierda. Además de la cuestión de la violencia, hubo un debate al interior de la Unidad Popular respecto a la agudización de la reforma agraria, yendo más allá de la normativa aprobada por Frei: si este había fijado como límite legal de los predios expropiados un tamaño de ochenta hectáreas de riego básico, el ala dura de la UP planteó la idea de ir más allá, expropiando los predios mayores a cuarenta hectáreas de riego básico. La "Declaración de Linares", apoyada por esos partidos, estimó también que las expropiaciones debían realizarse sin reservas y sin indemnizar a los dueños de los predios, ya que "los años de explotación al que han sido sometido los campesinos han pagado de más el valor de la tierra". Era el mismo argumento usado para la nacionalización del cobre.

El Partido Comunista, por su parte, estimaba que había suficiente espacio para profundizar la reforma agraria en el marco de la normativa legal vigente. Luis Corvalán, secretario general del PC, explicaba en el diario *El Siglo* que la reforma agraria "no

puede llevarse a cabo en forma anárquica", sino acorde a los planteamientos del gobierno. "Las tomas indiscriminadas de fundos son, precisamente, una forma anárquica de trabajo que no corresponde ni a los planes ni a la orientación del Gobierno Popular, que no obedecen a una aplicación seria y responsable y en las que, en realidad, no tienen una auténtica participación las masas campesinas".

Al interior del gobierno tampoco había consenso sobre qué hacer con las tierras expropiadas. Si bien se requería una agricultura socialista que reemplazara el sistema de asentamientos establecidos en el gobierno anterior, no había claridad sobre la organización de los predios expropiados. El Partido Socialista sostenía la tesis de la colectivización de los predios, mientras que el Partido Comunista se inclinaba a la conformación de cooperativas en cuyo marco los campesinos pudieran acceder a poseer parcelas individuales.

Ante la marea expropiatoria y violenta, y la gran cantidad de propietarios afectados, hubo agricultores que intentaron esquivar los efectos más nocivos de la reforma agraria. Uno de estos casos es el de la familia García-Huidobro Correa, que para evitar la expropiación formaron una cooperativa para repartir ellos mismos la tierra entre sus trabajadores. En medio de un proceso expropiatorio caracterizado por la superación de la legalidad, los excesos, el abuso y la arbitrariedad, optaron por partir al exilio a Argentina.

Estrellato mundial

El gobierno de Salvador Allende hizo que Chile atrajera, como nunca antes, la atención de la opinión pública internacional. Se le asoció el mote de la "experiencia chilena", que connotaba la curiosidad internacional por un proyecto inédito: la conjugación de democracia con el socialismo. Ello le entregó a la UP una fama de la que supo sacar provecho, obteniendo importantes apoyos internacionales, si bien quedaron cortos de sus desmedidas esperanzas.

Característico de este fenómeno es que muchos políticos e intelectuales extranjeros visitaron Chile para enterarse de primera mano de las vicisitudes de la "vía chilena". Naturalmente, atraía en especial a los grupos de izquierda, pero también sectores del centro liberal miraban a Allende con simpatía y esperanza.

Este entusiasmo se transmitió incluso a algunos gobiernos de países desarrollados, como fue el caso de Suecia, que apoyó con programas de ayuda al desarrollo. Los otros países europeos prestaron una generosa colaboración en materia de préstamos, la España de Franco inclusive, que ideológicamente estaba en las antípodas de la experiencia chilena. No obstante, toda esta colaboración no logró compensar la pérdida del financiamiento norteamericano.

Si bien en general la política exterior de la UP mantendría un equilibrio entre lo ideológico y lo pragmático, en las relaciones con Estados Unidos predominó el elemento doctrinario. Durante su carrera política, Allende había hecho de la denuncia contra el imperialismo estadounidense uno de los ejes centrales de su discurso internacional. En su perspectiva, los capitales norteamericanos extraían las riquezas de Chile y el resto de América Latina, dejando poco o nada para el desarrollo de estos países. En el fondo, era la idea de que la riqueza de los países desarrollados era la causa de la pobreza de los países subdesarrollados. Por su parte Washington actuaba como el guardián de los intereses imperialistas y oligárquicos, siendo por lo tanto enemigo de los gobiernos que quisieran hacer reformas profundas.

Al llegar a La Moneda, el gobierno chileno intentó utilizar su muñeca política para convencer a los norteamericanos de que no pusieran obstáculos (quizás hasta le ayudaran) a cumplir su programa. Allende envió a los norteamericanos el mensaje de que deseaba mantener relaciones amistosas con Estados Unidos y que estaba dispuesto a darles prioridad, pero que si no encontraba respuesta, buscaría la amistad de otras naciones, incluyendo a los países socialistas. Incluso intentó, sin éxito, conseguir una entrevista con el presidente Nixon, para convencerlo en persona. No era una idea descabellada, en cuanto Nixon había demostrado una

extrema flexibilidad en política exterior, manifiesto en su visita a China y con su política de *détente.*

En la Casa Blanca la animadversión a Allende era evidente, pues se estimaba que sacaría al país de la órbita norteamericana y la pondría en la soviética, convirtiendo a Chile en una segunda Cuba. La nacionalización sin indemnización de las compañías del cobre también representaba una amenaza a nivel global a sus intereses, pues podría ser imitada por otros países del tercer mundo. Pero Estados Unidos no podía ejercer una política abiertamente agresiva contra Allende, puesto que se entendía que resultaría contraproducente, despertando un sentimiento nacionalista en Chile y una simpatía en la opinión pública mundial y quizás hasta en la norteamericana.

Por ello, Nixon y Kissinger siguieron lo que se denominó una "política correcta pero fría", terminando con la ayuda económica, salvo la de tipo militar, y votando en contra de Chile en los organismos financieros internacionales. Fuera de la vista del público, la administración norteamericana realizaría operaciones encubiertas. A diferencia de 1970, los estadounidenses habían aprendido su lección, de que no podían crear un golpe de Estado a voluntad. Todavía se tenía como meta el fin anticipado del gobierno de Allende, pero para lograrlo se consideró más factible un financiamiento a la oposición política, para que esta diera la batalla. En total, se gastaron 6,5 millones de dólares, en su mayor parte otorgados a la Democracia Cristiana y al diario *El Mercurio*, mientras los otros partidos de oposición recibieron montos inferiores. También se le entregaron sumas menores a la oposición radical frente a la UP, como lo era Patria y Libertad y los gremios camioneros. Este apoyo fue motivo de debate dentro de la administración, puesto que muchos consideraban que estos actores no tenían autocontrol y podrían realizar una acción precipitada con resultados contraproducentes, reforzando al gobierno de Allende.

Parte de la intervención estadounidense se daría a conocer al público, al menos indirectamente. Esto se dio por la revelación en los Estados Unidos de documentación de la empresa International Telephone & Telegraph (ITT), que había entregado fondos a

la campaña de Alessandri y le había propuesto a la embajada norteamericana coordinar sus esfuerzos para evitar que Allende asumiera la presidencia, si bien el embajador Korry rechazó su ayuda. Ello causó un gran escándalo y reforzó las sospechas de la izquierda, de que los partidos de la oposición estaban al servicio de las potencias imperialistas. Particular saña expresaron contra el expresidente Frei, al que incluso se le trataba de traidor.

Allende tuvo particular cuidado en sus relaciones con América Latina, en vista del predominio de gobiernos de signo anticomunista, incluyendo a los dos grandes de Suramérica, Brasil y Argentina. Allende debía evitar los resquemores de que Chile fuera usado como base para "exportar" la revolución en la región. Con Argentina, Allende alcanzó un acuerdo para llevar a arbitraje la controversia del canal de Beagle, lo que incluyó visitas recíprocas con el presidente de Argentina, general Alejandro Lanusse. Pero este pragmatismo tendría sus límites, pues Allende privilegió lo ideológico en el caso de unos guerrilleros argentinos que habían escapado de un penal en su país y habían pedido asilo en Chile. Allende decidió no extraditarlos y los envió a Cuba, enfriando seriamente las relaciones con el gobierno trasandino. Los brasileños, por su parte, manifestarían una hostilidad más clara frente al gobierno chileno, al que consideraban una amenaza a nivel continental, particularmente por sus relaciones con Cuba. Esta oposición no se dio solo a nivel estatal, pues también hubo un apoyo de los empresarios brasileños a sus congéneres chilenos, recomendándoles seguir el tipo de acciones que ellos ocuparon en el pasado contra el presidente de izquierda João Goulart.

El gobierno de Allende mantuvo cercanas relaciones con los países de la órbita socialista, tanto por razones de identidad ideológica como por la necesidad de ayuda económica. Durante su trayectoria política, Allende había tenido una relación ambigua con la URSS. Había criticado la limitación de las libertades políticas y la existencia de un partido único, pero junto a este lenguaje, se compaginaba otro que mostraba a la URSS como el futuro de la humanidad, el ejemplo a seguir para lograr el socialismo. Glorificaba también a sus líderes, Lenin y Stalin, como ejemplos

de figuras que supieron derrotar al capitalismo y dar certeza a sus pueblos.

La Unión Soviética, aunque veía con simpatía al gobierno de la UP, puesto que mostraba la viabilidad de la "vía gradualista" que ellos propiciaban, no lo consideraba un país socialista, sino que uno que experimenta un "proceso revolucionario". Por lo tanto, no tendría el mismo tipo de ayuda que recibía Cuba. No obstante, hubo un esfuerzo de ayuda económica, entregando 102 millones de dólares, si bien de créditos "atados" que solo podían ser usados para adquirir productos soviéticos, lo que dejó insatisfechos a los chilenos. Otro aspecto importante de colaboración fue un convenio pesquero, por los cuales barcos soviéticos realizarían actividades de pesca en la costa chilena, a cambio del arriendo de barcos científicos e industriales.

Durante su gira internacional de 1972, Allende aprovechó para visitar la Unión Soviética, a la que se refirió como "nuestro hermano mayor", por la solidaridad y la ayuda que le prestaba a Chile. Pero en realidad Allende quedó decepcionado del viaje, pues solo obtuvo un nuevo crédito de 45 millones, que no era ni el 10% de lo que esperaba sacar. En el fondo, Allende pretendía reemplazar la dependencia chilena de los créditos norteamericanos por la dependencia de los créditos soviéticos. No comprendía las limitaciones de los regímenes socialistas en materia de divisas ni el escaso desarrollo de su sector financiero, que no le permitía competir ni de cerca con EE.UU.

Una crítica a esta dependencia de Chile respecto de la URSS se encuentra en otro país socialista con el que Allende abrió relaciones, la República Popular China. En un intercambio epistolar, el primer ministro chino, Zhou Enlai, le advirtió a Allende:

> "Lo fundamental para los países en desarrollo es apoyarse en sus propias fuerzas, vale decir, tomar el autosostenimiento como medio principal y la ayuda externa como medio complementario. Es muy peligroso apoyarse demasiado en la ayuda externa, particularmente en los créditos de las grandes potencias, en lugar de basar la economía en los propios esfuerzos del país. A este respecto, algunos países han tenido sus dolorosas experiencias y lecciones.

> Para desarrollar con autodecisión nuestra economía nacional independiente, los países del Tercer Mundo tenemos que trabajar duro durante largo tiempo, pagar cierto precio y hacer ciertos sacrificios".

En contraste, la estrategia de Allende –y aquí se encuentra uno de sus principales talones de Aquiles– era de una transición al socialismo sin los sacrificios que habían pasado otros pueblos y, al contrario, mejorando rápidamente el nivel de vida de la población. La realidad se encargaría de desmentir sus esperanzas.

A nivel internacional, la Unidad Popular establecería sus lazos más profundos con la dictadura de Fidel Castro, en Cuba, existiendo una identificación de los procesos políticos y una subrepticia ayuda militar a la izquierda. A su vez, la controversia por la presencia cubana terminaría siendo uno de los blancos preferidos de la oposición. El momento más destacado y controvertido de esta relación ocurrió con la larga visita de Fidel Castro a Chile a fines de 1971.

La visita de Fidel Castro

Durante su trayectoria política, Salvador Allende fue uno de los grandes defensores de la Revolución Cubana, habiendo visitado muchas veces la isla y entablado una relación de amistad con el propio Fidel Castro. Además de la relación personal, la revolución ayudó a la radicalización del pensamiento de Allende, que comenzó a ver a la isla como paradigma a seguir, un adelanto del futuro. Remarcaba que los separaba el método, pero la meta era la misma. Así lo expresó en un discurso durante la campaña de 1964:

> "En Cuba, el socialismo se instaló después de un movimiento insurreccional; aquí en Chile pensamos llegar al mismo resultado por la vía electoral. Si tenemos éxito, y creo que lo tendremos, Cuba y Chile serán los dos ejemplos válidos aunque sean distintos en la fase inicial. Por lo demás, no existen diferencias, nosotros haremos el socialismo como los cubanos".

La revolución le había dejado al entonces senador Allende dos grandes lecciones. La primera era la importancia del rol de los campesinos en el proceso revolucionario, pues solo una reforma agraria podría acabar con el régimen feudal, que sostenía a la oligarquía y al imperialismo. La segunda lección, según expresó en un discurso en el Senado en 1965, es que era posible desafiar al imperialismo estadounidense, pues este debió enfrentarse "a la más dura e infranqueable barrera: la de un pueblo organizado, movido por un profundo y patriótico sentimiento nacional, contra el cual se han estrellado todas las maniobras, desde el cerco económico, el sabotaje, el bombardeo y el crimen hasta la preparación y apoyo de la invasión".

Una de las primeras medidas que estableció Allende fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, que en general se encontraba aislado en la región latinoamericana. Pero lo verdaderamente importante de la relación sería la conexión ideológica entre ambos gobernantes, en donde Cuba actuaba como paradigma y como consejero del proceso chileno. La mayor manifestación de esto se dio con la visita de Fidel Castro, que se extendió del 10 noviembre al 4 de diciembre de 1971. Castro dejó en claro que lo suyo no era una clásica visita de Estado: "Hemos visitado a Chile no como turistas. Hemos visitado a Chile como revolucionarios, como amigos, como solidarios de este proceso y de este país".

Su llegada fue interpretada por la izquierda como el reconocimiento de que Chile verdaderamente estaba realizando un proceso revolucionario, como si hubiera recibido un sello de aprobación. Durante su larga, muy larga visita, Castro demostró una enorme energía y recorrió gran parte del país, realizando numerosas concentraciones y reuniéndose con un amplio abanico de personalidades políticas y sociales. Si bien en un primer momento dijo que había venido a aprender de la experiencia chilena y no a dar lecciones, no pudo resistirse y empezó a dar consejos sobre la situación interna. Especial atención puso a qué hacer con respecto a la oposición, alertando a la izquierda de que habría que prepararse para un choque en todos los frentes:

> "La reacción, la oligarquía está mucho más preparada de lo que estaba la de Cuba, mucho más organizada y mucho más equipada para resistir los cambios, desde el punto de vista ideológico. Han creado todos los instrumentos para librar una batalla en todos los terrenos frente al avance del proceso. Una batalla en el campo ideológico, una batalla en el campo político, una batalla en el campo de masas –fíjense bien– ¡una batalla en el campo de masas contra el proceso!
> Ahora bien: esa es la diferencia fundamental".

Inicialmente, la visita de Castro parecía un triunfo para el gobierno. Su figura todavía mantenía parte de la magia de la revolución y era naturalmente atrayente para la población, se estuviera o no de acuerdo con sus principios. Era un personaje "más grande que la vida misma". Pero a medida que pasaba el tiempo y la visita se alargaba, sin final a la vista, las criticas comenzaron a ser más fuertes y a tener un eco en la opinión pública. La existencia misma de una prensa libre, a la que Castro había aplastado sin misericordia en su país, le molestaba sobremanera. Algunos titulares del diario de derecha *Tribuna* jugaban al límite con el doble sentido: "Fidel es un hijo de Punta Arenas. Ayer atracaron Castro y Chicho"; "Panorama cordillerano fascinó a Fidel Castro. Admiró contrafuertes, ventisqueros y picos"; "Allende y Fidel están de luna de miel". Ello sacó de quicio a Castro, que acusó que los "reaccionarios no tienen ningún argumento. Por eso acuden a las mentiras más ruines y más bajas y más cobardes… No tienen ningún código moral, porque no siguen ninguna ética".

En su última intervención pública, en el Estadio Nacional, Castro remarcó a los chilenos que "el éxito o el fracaso de este insólito proceso dependerá de la batalla ideológica y de la lucha de masas; y dependerá de la habilidad, del arte y de la ciencia de los revolucionarios para sumar, para crecer y para ganarse las capas medias de la población". Al despedirse, señaló entre aplausos: "¡Y es que regresaré a Cuba más revolucionario de lo que vine! ¡Regresaré a Cuba más radical de lo que vine! ¡Regresaré a Cuba más extremista de lo que vine!".

Castro, con su expresa identificación con el proceso chileno, había ayudado a polarizar el ambiente político en una forma no

deseada por el gobierno de Allende. Mal que mal, la mayoría de los chilenos no veía a Cuba como un ejemplo a seguir. La oposición explotaría esta imagen, enfatizando los aspectos represivos del régimen cubano, particularmente en la vida cotidiana, con las colas, el desabastecimiento y las tarjetas de racionamiento que predominaban en la isla.

El viaje de Castro también tuvo otro propósito, el de armar a la izquierda chilena. Desde el comienzo del gobierno de Allende, los cubanos habían prestado ayuda en forma de entrenamiento, particularmente al GAP, convirtiendo la casa presidencial de El Cañaveral en un verdadero centro de entrenamiento paramilitar. Durante el viaje, la guardia personal de Castro dejó en el país gran parte del armamento que había traído, bajo la excusa de brindarle protección a su jefe. Luego, los envíos de armas continuarían a través de la valija diplomática. La oposición se enteró de una entrega de 30 cajas, que pasaron sin ser revisadas por la aduana y bajo presión personal del director de Policía de Investigaciones, Eduardo Paredes. El gobierno no logró dar una respuesta convincente, afirmando que eran regalos para el mandatario, que incluía desde cuadros, libros, licores y hasta helados de mango. La sospecha generalizada era que se trataban de armas, por lo que el asunto fue una de las causas para la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Hernán del Canto.

Las críticas a la presencia cubana por parte de la oposición se acrecentarían a medida que avanzaba el gobierno. Se acusaba que los cubanos estaban ingresando a miles de guerrilleros y armas para preparar la guerra civil. Al final, el estrechamiento de lazos entre las dos revoluciones fue contraproducente para la UP. La oposición enfatizaba que Chile se encaminaba a ser una segunda Cuba, especialmente por el racionamiento de alimentos y el intento de control de la educación.

EL INICIO DE LA CRISIS Y EL CAMBIO EN LA CORRELACIÓN DE FUERZAS

La oposición a la ofensiva

Hacia fines de 1971, los efectos negativos de la política económica del gobierno comenzaron a ser manifiestos. El aumento de la inflación hizo que se aplicaran mayores controles, lo que derivó inevitablemente en un desabastecimiento y la creación de un mercado negro. A ello se debía sumar el ambiente de polarización ideológica, agudizada por la visita de Castro. La acusación de que Chile iba a convertirse en una segunda Cuba, que había perdido fuerza por haber sido tantas veces repetida, ahora comenzaba a aparecer como una posibilidad real.

En este contexto surgió la primera movilización importante de la oposición, la marcha de las cacerolas vacías, efectuada el 1 de diciembre de 1971, coincidiendo con los últimos días de la visita de Fidel Castro. Esta había sido convocada por un grupo de mujeres del PN y la DC que tomaron el desabastecimiento como enemigo común. La manifestación congregó a un número importante de manifestantes, que gritaba consignas como: "Allende, escucha, las mujeres somos muchas", "En la olla no hay un hueso y el gobierno se hace el leso", "Aquí está el pueblo en mayoría exigiendo garantías", "La izquierda unida, nos tiene sin comida", "Chile es y será un país en libertad". A los eslóganes les acompañó un ruido de cacerolas chocando entre sí, naciendo una de las formas de protesta más famosas en Chile, los "cacerolazos".

La protesta fue considerada como una provocación por parte de la izquierda. Para este sector, que había mantenido hasta entonces casi un monopolio de las movilizaciones callejeras, el que la oposición se atreviera a movilizarse era inaceptable. Por

lo mismo, las mujeres que marchaban fueron atacadas por las brigadas Ramona Parra y Elmo Catalán. Como el gobierno deliberadamente había restado protección policial, la defensa de las manifestantes la habían asumido militantes de Patria y Libertad. El choque entre ambas fuerzas desató una violenta batahola. El gobierno incluso declaró estado de emergencia al día siguiente, prohibiendo cualquier manifestación que alterara el orden público.

La controversia siguió en los días siguientes. En la UP la definición era clara: una movilización de la oposición no podía entenderse sino como fascismo, como sedición. Les negaban a sus contrarios los mismos derechos que ellos tanto habían usado y de los que habían abusado. Se despreciaba a las manifestantes, acusando que todas las mujeres procedían de los barrios acomodados y que jamás habían usado una olla en su vida.

La oposición vio en la actitud del gobierno frente a la marcha un acto de arbitrariedad. Por ello, un grupo de diputados de la Democracia Cristiana realizó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tohá, por haber violado las garantías constitucionales. Previamente, el Partido Nacional había presentado tres acusaciones constitucionales contra diferentes ministros, pero estas siempre habían fallado. Ahora que la oposición entera estaba detrás, el horizonte parecía diferente.

El oficialismo catalogó la acusación como una maniobra política, que carecía totalmente de fundamento legal. El 7 de enero de 1972, cuando la acusación fue aprobada en la Cámara, Allende nombró a Tohá como ministro de Defensa y a Alejandro Ríos como suplente en Interior. Días después, el Senado aprobó la acusación y destituyó a Tohá en Interior, aunque el mandatario lo mantuvo en su nuevo cargo.

Esta práctica, que fue conocida como "enroque ministerial", fue entendida como una provocación por parte de la oposición. Se trataba de otro resquicio legal, aunque teóricamente nada impedía que un ministro destituido asumiera otro cargo. Pero era una clara burla al espíritu de la Constitución, pues en la práctica anulaba las atribuciones del Congreso. Para la DC, el acto había sido derechamente una violación de la Constitución. Allende debía

saber que esta maniobra enardecería a los opositores, por lo que vale bien preguntarse por qué adoptó tal decisión. Una posible respuesta se encuentra en el deseo de no querer verse pauteado por el Congreso. Debido a la minoría de la Unidad Popular, una oposición unida podría intentar paralizar la acción gubernativa a través de acusaciones constitucionales. Sería forzarle la mano, tal como se había hecho con los presidentes del periodo parlamentario. Lo cierto es que la izquierda también se entusiasmó con la táctica del enroque, pues hacía impotentes los esfuerzos fiscalizadores de la oposición. Allende usaría la misma estrategia al aprobarse acusaciones contra Hernán del Canto y Orlando Millas. Se llegó al absurdo de que este último tuvo que ser destituido dos veces.

Todo ello impulsaba a la Democracia Cristiana a colocarse en una postura cada vez más opositora al gobierno. En diciembre de 1971, el partido realizó un acto de masas en el Estadio Nacional, en donde el presidente de la colectividad, Renán Fuentealba, acusó que el gobierno tenía "el manifiesto propósito de instaurar rápidamente, a espaldas de la ley y de la voluntad de los chilenos, un régimen estatista en que comienza a surgir como un monstruo... el Estado totalitario que todo lo absorbe". Era un manifiesto y representaba un duro cambio de lenguaje, especialmente relevante porque Fuentealba procedía de la izquierda del partido. En esta definición opositora de la DC influyeron también las elecciones complementarias que tendrían lugar en enero de 1972. En esta ocasión la alianza entre los partidos opositores fue más explícita, no solamente por omisión. La oposición presentó como candidatos al democratacristiano Rafael Moreno al Senado y al nacional Sergio Diez a la Cámara. A pesar de la animadversión de la derecha por Moreno, que había sido uno de los impulsores de la reforma agraria, votaron disciplinadamente por él, así como los democratacristianos por Diez, resultando ambos victoriosos. Era claro que el esquema político de los tres tercios quedaba atrás y se formaba una bipolaridad, en la cual la izquierda se encontraba en minoría.

El hecho que golpearía más al gobierno en el largo plazo fue la aprobación en el Congreso de una reforma constitucional presentada por los senadores democratacristianos Juan Hamilton

y Renán Fuentealba. En ella se establecía que sería la ley la que establecería qué sectores de la economía pertenecerían al área social y mixta, quedando los restantes para la propiedad privada. Curiosamente, esto elevaba a nivel constitucional uno de los principios de la UP, la creación de tres áreas de la economía. Pero para la izquierda, el que se le pusieran límites a la acción estatizadora, que se les demandara actuar mediante leyes, era inaceptable. Esta misma oposición de la izquierda hizo que la derecha, que en circunstancias normales se habría opuesto a la reforma, la apoyara sin quejas.

El 19 de febrero de 1972 la reforma fue aprobada por el Congreso Pleno. Vendría luego un purgatorio legal, pues el presidente Allende presentó un veto, afirmando que el Congreso necesitaba dos tercios para insistir en el proyecto. Por su parte, la oposición postuló que la reforma constitucional de 1970 había eliminado la necesidad de los dos tercios, por lo que solo se requería mayoría simple para insistir. Si el Presidente de la República quería evitar su promulgación, la Constitución establecía la posibilidad de recurrir a un plebiscito.

Allende no quería recurrir a este mecanismo y anunció que, de ser necesario, recurriría al Tribunal Constitucional. No obstante, en una concentración el 1 de mayo, se mostró abierto a realizar el plebiscito, pero con una condición, que tenía mucho de amenaza: "Yo puedo hacer un llamado al pueblo, a través de un plebiscito, un referéndum. Y si el pueblo aprueba el referéndum, el Congreso será disuelto. Convocaré a elecciones para un nuevo Congreso y seguramente, si vencimos en el plebiscito, tendremos mayoría en el nuevo Congreso. Entonces este Congreso aprobará las leyes que el gobierno popular quiera aprobar". En la DC le retrucaron con otro desafío: si Allende perdía el plebiscito, este debía renunciar al gobierno. Era el todo o nada.

Naturalmente, el gobierno tenía la opción de negociar con la Democracia Cristiana. Allende intentó este camino, designando al ministro de Justicia Manuel Sanhueza como interlocutor frente a la DC. Se alcanzaron algunos acuerdos, como derogar las facultades del Ejecutivo para intervenir empresas y la devolución de algunas

de estas a sus dueños. Pero estos acercamientos encontraron la negativa del Comité Político de la UP, que exigió cambios en el equipo negociador. El condicionamiento del éxito de las gestiones a que las aprobara el Comité Político, que recordemos debía funcionar por unanimidad, molestó a la DC, que rompió las negociaciones. De ello también derivó que el Partido de Izquierda Radical, al que pertenecía Sanhueza, abandonara la UP, al sentirse desautorizado y aislado.

Nuevas negociaciones se realizaron en junio, ahora con la venia del Comité Político, que veía el diálogo con la DC como una oportunidad de consolidar las transformaciones. Hubo diversos acuerdos, incluyendo el número de empresas que pasarían al área estatal, que las estatizaciones debían ser por ley, la regulación de la participación de los trabajadores en las empresas y la creación de empresas autogestionadas. En esto último, la DC había aprovechado de introducir elementos de su siempre mal definido comunitarismo, cobrándole la cuenta a la UP sobre su propuesta de empresas de trabajadores, aunque esperando naturalmente que gran parte de estas empresas estuvieran controladas por la oposición. Pero al final no hubo acuerdo, ya que la UP no quiso ceder en sus propósitos de estatizar la Papelera, la facultad de adquirir empresas comprando acciones, ni entregar a los trabajadores la gestión de los bancos estatizados.

La convergencia opositora se consolidó con una declaración del 4 de agosto, firmada por todos los partidos de ese sector, en que se advertía que Chile iba en dirección hacia una dictadura totalitaria, al atacarse a los poderes legislativo y judicial. Ese mismo mes se reactivaron las protestas contra el gobierno. Los gremios del comercio llamaron a un paro de 24 horas, en reclamo por la creciente inflación y la escasez de alimentos. Los paros habían sido una táctica recurrente de la izquierda, pero nuevamente se recibió con indignación que la oposición usara sus mismas armas. El gobierno decretó zona de emergencia para Magallanes y Santiago, descerrajando numerosos comercios, como forma de venganza. Los partidos de la UP anunciaron sus propias movilizaciones. Altamirano señaló que los reaccionarios querían la guerra civil

y "por eso nos han pedido que contengamos a los obreros, a los campesinos, a los jóvenes. No podemos seguir conteniéndonos y si ellos mañana sacan 100 a la calle, nosotros sacaremos 1.000". Como la oposición empezó también a ocupar las tomas como táctica política, la izquierda recurrió a las contratomas, desatándose cada vez más violencia en las calles. Todo era el preámbulo de una confrontación aún mayor, el Paro de Octubre.

Las nuevas definiciones de la izquierda

Al detenerse el impulso político que benefició a la izquierda durante 1971, debido al deterioro de la situación económica y a la resistencia de la oposición, la UP buscó redefinir su línea de acción. A fines de enero y comienzos de febrero de 1972 se desarrolló el llamado cónclave del Arrayán, en que la dirigencia de la UP discutió los caminos hacia el futuro. Estas discusiones terminaron revelando una división profunda entre las tácticas gradualista y rupturista. No había acuerdo en la velocidad de las expropiaciones, tampoco respecto a la negociación con la DC. A lo más se logró redactar un documento en que se llamaba a profundizar la lucha ideológica y fortalecer la incorporación de las masas al gobierno popular.

Un nuevo cónclave se realizó en Lo Curro, en junio de 1972. El tema central fue la economía, con el sector rupturista –es decir el PS, la IC y el MAPU– queriendo acelerar la expansión del área social de la economía, especialmente en materias de distribución y el comercio extranjero. Los sectores gradualistas, encabezados por el PC y con el apoyo del PR, API y el propio Allende, buscaban poner una pausa a las estatizaciones, para consolidar lo alcanzado, especialmente por las fallas de dirección que mostraban las empresas bajo control estatal. En esta ocasión, la posición gradualista claramente salió vencedora. Signo de ello fue la salida del ministro Vuskovic de Economía, pasando el control económico al Ministerio de Hacienda, con el comunista Orlando Millas a la cabeza. Era signo de un giro a posiciones más restrictivas y menos

populistas. El énfasis estaría no tanto en la redistribución rápida, sino que en la mejora de la producción.

Pero la perspectiva rupturista no limitaba su acción solo a la UP. El grupo más radical de izquierda, el MIR, abiertamente defendía la revolución violenta y la dictadura del proletariado. Había contenido su acción durante el primer año de la UP, pero las aparentes limitaciones en el proceso revolucionario lo llevaron nuevamente a impulsar la acción directa. El 12 de mayo, con motivo de una marcha de la oposición en Concepción, el MIR y los sectores radicales de la UP decidieron detenerla por la fuerza, provocándose disturbios que terminaron con un muerto y 40 heridos. El PC criticó la acción de la "ultraderecha y de la ultraizquierda", acusando que el MIR quería romper la institucionalidad y propiciar un enfrentamiento civil. Pero para los sectores radicalizados, los sucesos del 12 de mayo significaron algo diferente, concibiéndolos como un accionar espontáneo del pueblo, de iniciativa propia, que no necesitaba esperar órdenes desde las cúpulas. Su principal crítica al proceso de cambios es que este todavía se realizaba por medio de intermediarios de la clase, por los partidos o el gobierno. Lo que había que hacer, para lograr una verdadera revolución, era sublevar a las masas.

De allí surgió la idea de organizar una Asamblea del Pueblo, que debía canalizar la acción política de las bases. La reunión se realizó el 27 de julio, en la cual hablaron varios oradores improvisados ante una audiencia de unas 5 mil personas. Los participantes terminaron compitiendo entre sí para demostrar quién era más radical, dándose propuestas como destruir el Congreso y crear milicias populares. Para Allende, la Asamblea del Pueblo era un abierto ataque a su definición política. La calificó como "un proceso deformado que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria", puesto que la idea de crear un "doble poder" era "cara ignorancia e irresponsabilidad".

El problema central era cómo integrar a las masas a la revolución y cuánta independencia debían tener estas del gobierno. Para Allende la respuesta era obvia: no había contradicción de intereses entre las masas y el gobierno, por lo tanto, debían actuar en forma

unida. Los sectores rupturistas, por su parte, pretendían que la revolución surgiera desde abajo, desde las bases, que el proceso fuera más espontáneo y más rápido. En el fondo, que fuera como las grandes revoluciones, incluyendo la violencia.

En el esquema de la Unidad Popular, se esperaba que la participación de las masas, que se denominó como el "Poder Popular" y que debía reemplazar al viejo poder oligárquico, se expresara a través de los Comités de la Unidad Popular, que debían establecerse dentro de cada empresa. No obstante, esta táctica no logró entusiasmar y falleció de muerte natural. Entonces se buscaron nuevas formas de integrar a las bases. Entre ellas se encontraron las JAP y los Comandos Populares. Pero quizás la forma más vanguardista fueron los cordones industriales. Estos eran organizaciones de base compuestas por sindicatos y organizaciones de trabajadores de las empresas intervenidas de un área determinada, que se coordinaban con el fin de movilizarse para defender a la revolución, especialmente en lo que se denominó como la batalla de la producción. Comenzaron a aparecer a mediados de 1972 y uno de sus propósitos era "mostrarle al Presidente Allende que los trabajadores somos quienes debemos tomar los acuerdos... Fue una forma de decir que estábamos descontentos con lo que está haciendo la UP por arriba". En la práctica, los cordones se verían fuertemente influidos por las agrupaciones de izquierda y nunca fueron la democracia directa que pretendieron ser. Pero serían una muestra clara del desborde del proceso revolucionario y que la izquierda no iba necesariamente a respetar la legalidad burguesa, como proclamaba Allende. No obstante, para mediados de 1972 el poder popular todavía se encontraba en un estado embrionario. Necesitaba de un catalizador para desarrollarse y lo encontró en el Paro de Octubre.

El Paro de Octubre

El "Paro de Octubre" de 1972 fue una de las movilizaciones sociales más espectaculares contra la Unidad Popular. Si bien desde el año anterior el gobierno comenzó a sufrir marchas en su contra,

que disputaban la presencia de la izquierda en las calles, el Paro de Octubre terminó por cristalizar un sólido y masivo movimiento social contra la UP, que se mantendría activo prácticamente hasta septiembre de 1973. La movilización a nivel nacional –primero de camioneros y rápidamente extendida a otros gremios– confirmó que a esas alturas el conflicto político había desbordado con creces los canales institucionales, incluyendo a nuevos actores y escenarios en la disputa. Por su magnitud y por la amplitud de los actores involucrados, el Paro de Octubre marcó un antes y un después para el gobierno, que debió cambiar por completo su táctica política.

El Paro de Octubre se inició como un paro de camioneros, cuya chispa se encendió en Aysén, ante el anuncio por parte del gobierno de la creación de una empresa estatal de camiones en esa provincia. Lo que se inició como una manifestación de la Federación del Transporte Terrestre de Aysén consiguió rápidamente la solidaridad de gremios camioneros en otras regiones, primero en la zona centro sur y rápidamente en distintas zonas a lo largo del territorio nacional, a partir del 9 de octubre. El avance estatizador del gobierno causaba rechazo en camioneros y dueños de camiones, quienes temían que una medida como esta afectara negativamente su fuente laboral. Al reclamo original se añadían otros factores, como la escasez de neumáticos y repuestos, así como las crecientes fijaciones de precios definidas por el gobierno. De este modo, lo que aparecía como una demanda gremial limitada al gremio camionero tuvo desde el principio el potencial de expandirse a otros rubros. No solo había un legítimo reclamo contra los efectos nocivos de las políticas de la Unidad Popular, sino que además el Paro fue entendido como una necesaria defensa de la actividad privada y la libre iniciativa, que se veían amenazadas.

El método de protesta de los camioneros causó gran impacto. El masivo bloqueo de puntos clave de las principales carreteras del país afectaba no solo el tránsito de personas sino también de alimentos, productos básicos y mercancías, acentuando el desabastecimiento en medio de una economía alicaída. El gobierno reaccionó de

inmediato tras la primera jornada de bloqueos. Invocando la Ley de Seguridad Interior, arrestó a los líderes de la protesta. La medida tuvo un efecto contraproducente para el oficialismo. Por un lado, permitió que la población comenzara a identificar a los líderes del movimiento, especialmente a León Vilarín, que se transformaría en ícono del descontento gremial y de las clases medias contra el gobierno. Por otro lado, tuvo el efecto de radicalizar las posturas de los gremios camioneros –que se movilizaron desde entonces por todo el país, bloqueando carreteras– y de generar adhesión en trabajadores de otros rubros, tras un llamado camionero a la solidaridad gremial. Sería un paso decisivo, pues desde entonces diversos gremios se sumarían progresivamente al movimiento, tanto para solidarizar con las organizaciones del transporte como para levantar sus propias demandas. En un comienzo se sumaron grupos como la Confederación del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria, la Federación de Sindicatos de Choferes de Taxis, la Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado, además de la Confederación de la Producción y del Comercio. Si bien la izquierda calificó las protestas como "Paro Patronal", incluso insurreccional, lo que había en el fondo era un profundo descontento gremial y de las clases medias con la vía chilena al socialismo. Progresivamente se fueron sumando agrupaciones de actividades diversas, mostrando la estrategia de conformar un movimiento de "solidaridad gremial". Rápidamente se sumaron nuevas organizaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES), así como asociaciones profesionales como el Colegio Médico y el Colegio de Abogados. Era una bola de nieve, difícil de detener, que hacía más patente la magnitud de la disidencia a la Unidad Popular.

La emergencia de los líderes gremiales terminó marcando un fuerte revés para el gobierno. León Vilarín y Rafael Cumsille pasaron a ser verdaderos íconos de la resistencia gremial contra el socialismo. Se trataba de liderazgos distintos a los tradicionales, pues no correspondían al típico perfil de dirigentes provenientes de partidos políticos de oposición o de cabezas de gremios

empresariales. Su extracción social de clase media y los gremios a los que representaban –Vilarín era representante de los camioneros y Cumsille del comercio detallista– ampliaban el alcance de la convocatoria, causando una mayor identificación en diversos grupos sociales. A esto se sumó que, aunque Vilarín había sido socialista, recibió fuertes denostaciones por parte del oficialismo, que lo calificó como "enemigo de la clase trabajadora" y "enemigo del gobierno", en una clara lectura de los hechos basada en la lucha de clases. Cumsille, por su parte, había sido regidor de Requínoa en los años 50, como representante del Partido Conservador. Dadas sus convicciones como dirigente y su conocimiento del comercio detallista, se manifestó contrario al establecimiento de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios. Reclamaba ser representante de un genuino gremialismo: "Las organizaciones gremiales no deben ni pueden estar al servicio de los partidos políticos", declaró en una ocasión.

El gobierno reaccionó primero a través de la represión del movimiento, decretando el Estado de Emergencia en las trece provincias más afectadas por las protestas. En cadena nacional, el presidente Allende acusó a la Confederación de Dueños de Camiones de motivaciones políticas y antigremiales, justificando el encarcelamiento de los dirigentes gremiales y el estado de emergencia: "Este país no lo paraliza la reacción derechista, el filofascismo o el fascismo", sentenció el mandatario. El diario comunista *El Siglo* manifestó que se trataba de un paro ilegal y, más todavía, sedicioso, "con finalidades golpistas y antidemocráticas". En esa línea, el senador del PC, Volodia Teitelboim, expresaba en el mismo medio que el paro era parte de una "estrategia golpista, inescrupulosa y despiadada".

Además, el gobierno movilizó a la CUT en su denuncia contra el paro, la que intentó liderar una suerte de resistencia contra la huelga manteniendo las actividades: dio instrucciones para evitar que el "paro patronal" afectara la economía del país, "impidiendo el cierre de empresas, y tomando el control de estos cuando el empresario persista en su actitud". Para la organización sindical se hacía necesario "impulsar el trabajo voluntario, especialmente

en empresas que producen bienes de consumo popular", según recogía el diario *Clarín*. La capacidad de la CUT estaba muy lejos de contrarrestar los efectos del paro. En ese contexto, los grupos radicalizados del gobierno organizaron los llamados "cordones industriales", concebidos en este contexto para tomarse las empresas que adherían al paro, que con esto pasaban a la denominada "área social" de la economía, tras la intervención del gobierno. Por eso, el principal riesgo que veían los transportistas era que el requisamiento de camiones fuera seguido por la administración de los vehículos por parte del Estado, dando paso con esto a la estatización del transporte.

A pesar de las dificultades y temores, la bola de nieve no se detenía y los adherentes al movimiento camionero se multiplicaban. Lo que se había iniciado como un paro de adhesión a camioneros en Aysén superaba con mucho la exclusiva esfera de los gremios del transporte. A mediados de octubre, más de 50 organizaciones se habían sumado al movimiento. Rápidamente el paro camionero se transformó en un paro nacional multigremial, con cese de actividades en el comercio, bancos, escuelas, hospitales y otras áreas sensibles para la sociedad. Junto con el toque de queda en Santiago, el gobierno respondió cancelando la personalidad jurídica de la SOFOFA, de la Federación de Dueños de Camiones y de la Confederación del Comercio y de la Producción, dando cuenta de que las posiciones se encontraban lejos de llegar a una solución del conflicto.

El 20 de octubre de 1972, las distintas organizaciones movilizadas –que incluían camioneros, comerciantes, agricultores, colegios profesionales, estudiantes, taxistas y profesores– formaron el Comando Nacional de Defensa Gremial, que dos días más tardes firmaría "El Pliego de Chile". Este documento contenía las demandas de las organizaciones, pero iban mucho más allá de las demandas gremiales puntuales que cada organización pudiera levantar. En ese sentido, se trataba de una expresión de la "solidaridad gremial" que reclamaba la garantía de condiciones políticas y sociales mínimas para el funcionamiento libre de gremios y organizaciones. Las peticiones, que se organizaban en

siete puntos, incluían la exigencia de un "respeto a las libertades y derechos gremiales", reclamando la devolución a sus legítimos propietarios de los bienes requisados por el gobierno y poner fin a la coacción de órganos estatales sobre empresas. También se levantaron otras demandas propias de la huelga, como dejar en libertad a los líderes del movimiento o la reposición en sus funciones de aquellos trabajadores que hubieran sido despedidos con motivo del Paro Nacional. Asimismo, se pedía al gobierno retractarse de la cancelación de la personalidad jurídica que sufrían algunas entidades gremiales. El Pliego de Chile incluía también la exigencia del respeto de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que incluía reclamos contra el cierre de la Radio Agricultura de Los Ángeles, así como "poner fin a la paulatina asfixia de la Papelera". Otras demandas se referían a la necesidad de hacer cambios respetando la legalidad, así como generar espacios de participación gremial en la definición de la política económica y social del Estado. En materia de seguridad, el petitorio incluía el desarme y aplicación de la ley de seguridad a grupos violentistas, la publicación de la ley de control de armas y la expulsión de extranjeros extremistas. En definitiva, se trataba de una serie de demandas que exhortaba al gobierno a rectificar su acción. De este modo, lejos de las acusaciones oficialistas –recordemos que se trataba, según ellos, de un paro político y no gremial, que buscaba derrocar al gobierno– el Pliego de Chile manifestó la necesidad de garantizar la función de los trabajadores en un marco de libertad, seguridad y pluralismo, llamando al gobierno a impulsar los cambios respetando la legalidad.

Como respuesta al Pliego de Chile, grupos de ultraizquierda redactaron el "Pliego del Pueblo", que exhortaba al gobierno a radicalizar el proceso revolucionario, acentuando las expropiaciones de empresas y en el campo, estableciendo sistemas únicos de educación y salud, y castigando a los participantes del paro con la no devolución de las industrias y compañías que habían tomado parte en el paro.

El dramatismo de la situación en un contexto de alta polarización política quedó expuesto en el papel que asumieron distintos

líderes políticos sobre el conflicto. En el programa "Hablan los expresidentes", de Canal 13, Eduardo Frei Montalva recalcó que la "razón profunda que origina este movimiento... es la desesperación y la angustia de un pueblo que ve comprometidas las bases sobre las cuales sustenta su vida presente y su futuro". Renán Fuentealba recalcó que "quienes ahora están en el Gobierno hicieron de la huelga, el paro nacional y de la agitación, un arma cotidiana en la vida nacional del país y siempre defendieron este tipo de reivindicaciones como un principio legítimo dentro de la democracia", según recogió *El Mercurio.* Claudio Orrego Vicuña, en su libro *El Paro Nacional,* subrayó que la movilización era "un hito decisivo en la lucha del pueblo chileno contra los esfuerzos totalitarios de la Unidad Popular para imponer su conducción hegemónica en el país". Frei, Fuentealba y Orrego eran democratacristianos.

Hacia fines de octubre la situación era insostenible. La creciente cantidad de trabajadores en paro, la violencia en las calles y una crispación social y política generalizada amenazaban con desestabilizar a un gobierno desprestigiado y cada vez más acorralado por las circunstancias. Incluso muchos comenzaron a pensar en el riesgo inminente de una guerra civil.

El gabinete con integración militar

Finalmente, la solución al conflicto se encontró en la conformación de un nuevo gabinete, el que integraron algunos uniformados: el general Carlos Prats, comandante en Jefe del Ejército, asumió como ministro del Interior; el vicealmirante Ismael Huerta, en la cartera de Obras Públicas; el general de Aviación Claudio Sepúlveda, en Minería. En esa oportunidad también fueron designados dos dirigentes de la Central Única de Trabajadores: el presidente Luis Figueroa, quien asumió como ministro del Trabajo, y el secretario general Rolando Calderón, en la cartera de Agricultura.

El nuevo gabinete conseguía el propósito general de darle mayor estabilidad al gobierno, especialmente ante el cumplimiento

de la expectativa de que la intervención de Carlos Prats en política consiguiera destrabar el Paro de Octubre. Las negociaciones con los líderes gremiales fueron rápidas y ellos terminaron deponiendo el paro el 5 de noviembre de 1972 "por el interés supremo de Chile", según anunció León Vilarín. A pesar de que Carlos Prats consideró en sus *Memorias* que la participación de uniformados en el gabinete "no implica un compromiso político para las FF.AA.", la intervención militar fue fundamental en la continuidad del gobierno de Allende. Así y todo, el gabinete cívico-militar no logró resolver cuestiones de fondo, como la crisis económica, la debilidad de la estrategia política de la UP o la generalización de la violencia en las calles de las principales ciudades del país.

La conformación de un gabinete con presencia de uniformados no había sido prevista por la Unidad Popular y tampoco fue fácil su aceptación para los diferentes partidos. Sin embargo, encontró su primera explicación en la necesidad de evitar la guerra civil, es decir, aparecía como una fórmula extrema para evitar que la crisis escalara hacia un problema mayor. Adicionalmente, la fórmula adquirió otro valor: las Fuerzas Armadas constituían una garantía de ecuanimidad para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. El general Prats, según señalamos, aseguró que la presencia militar no significaba un compromiso político de parte de las instituciones, sino que solo actuaban ante la situación de emergencia que vivía Chile y con el objetivo de restablecer la normalidad.

El escenario nacional era complejo y confuso, no solo por el significado del reciente Paro de Octubre, sino también por el ambiente general del país, que para entonces vivía una situación de escasez, inflación y mercado negro. Muchas veces la Unidad Popular denunciaba esos problemas como parte de la estrategia de desestabilización de la oposición, pero más bien era el resultado de la deficitaria política económica del gobierno y de la realidad nacional. Como una forma de paliar esta crisis, el Ejecutivo creó las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), pero estas se fueron convirtiendo en un organismo de control, especialmente polémico y repudiado por la oposición. A comienzos de 1973 también un

uniformado pasó a liderar la Secretaría Nacional de Distribución: era el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet.

En el caso del gabinete, es evidente que también resultaba excéntrico y entrañaba un peligro visible: la politización de las Fuerzas Armadas. Desde entonces hasta el 11 de septiembre de 1973, de manera continua y a través de diferentes actores –especialmente el general Carlos Prats– los uniformados estuvieron presentes en la actividad política y gubernativa. Esto implicaba vulnerar el principio de obediencia y no deliberación, establecido en la Constitución y en la doctrina de las Fuerzas Armadas. Como era previsible, todo esto condujo a otro problema: los líderes militares comenzaron a ser evaluados por sus supuestas o reales adhesiones políticas más que por sus compromisos institucionales, despertando las críticas de la oposición y un apoyo, a veces excesivo y laudatorio, de parte de las autoridades oficialistas.

1973: EL AÑO DECISIVO

La elección parlamentaria de marzo de 1973

Bajo la Constitución de 1925, las elecciones parlamentarias debían realizarse cada cuatro años. Ello implicaba un problema político, pues hacía que la elección del presidente y del Congreso no coincidieran, por lo cual muchas veces los mandatarios no pudieron aprovechar el ambiente político que los llevó a La Moneda para consolidar una mayoría parlamentaria. Frei Montalva tuvo suerte, pues la elección parlamentaria se realizó a solo meses de la presidencial, lo que aprovechó para obtener una amplia mayoría. Allende no tuvo la misma oportunidad y hasta marzo de 1973 debió gobernar con el Congreso elegido en 1969. En estos últimos comicios, el sistema de partidos era relativamente claro y estable, conformando un Congreso de alrededor de cinco partidos: Democracia Cristiana (55 diputados y 22 senadores), Nacional (34 diputados y 5 senadores), Radical (24 diputados y 9 senadores), Comunista (22 diputados y 6 senadores) y Socialista (15 diputados y 5 senadores). Una alianza de centro, democratacristianos y radicales, habría tenido mayorías en las dos cámaras y una posición excelente para ganar la presidencial. Pero la dinámica política lo hizo imposible. La unión del radicalismo a la alianza socialista-comunista provocó una seguidilla de rupturas políticas, en donde el PR y la DC serían los más afectados.

Por ello, para marzo de 1973 había doce partidos inscritos, si bien ya plenamente definidos como de gobierno u oposición. Ello causaba dificultad porque la ley electoral de 1959 prohibía expresamente la conformación de alianzas electorales. Como los comicios serían bajo un sistema de reparto, en donde había varios

escaños por cada circunscripción, la multiplicidad de partidos hacía peligrar que muchos votos se "perdieran", al no poder sumarse los sufragios de los partidos de un mismo bando.

Como solución, se propuso la creación de "partidos federados", los cuales estarían integrados por partidos individuales. Era una coalición electoral en toda regla, pero fue visada por el Tribunal Calificador de Elecciones y luego por la Corte Suprema. La DC fue la que se mostraba más contraria a esta clase de alianzas, puesto que mantenía la idea del camino propio, siendo altamente reticente a realizar alianzas con la derecha. Pero la polarización del país se impuso, pues el gobierno podría tener mayoría si la oposición iba dividida. Se formaron entonces dos grandes partidos federados: la Confederación de la Democracia, establecida a comienzos de septiembre de 1972 y conformada por la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, la Democracia Radical, el Partido de Izquierda Radical (que había abandonado la UP) y el Partido Democrático Nacional. En el oficialismo, en julio de 1972 se conformó el Partido Federado de la Unidad Popular, integrado por el Partido Socialista, Comunista, Radical, MAPU, Izquierda Cristiana y Acción Popular Independiente. El pequeño partido USOPO se mantuvo al margen de las alianzas.

Inicialmente, la Unidad Popular se había puesto como meta obtener una mayoría que le facilitara la aprobación de las leyes para la transición al socialismo. El propio Allende remarcó esta idea a mediados de 1972:

> "Para superar de raíz las bases de ese conflicto político, señalé como objetivo ganar las elecciones generales de parlamentarios de 1973. Una mayoría popular en el Congreso permitirá impulsar los cambios institucionales y legales indispensables para sacar al país del subdesarrollo, y acabará con el poder obstaculizador de una oposición revanchista que ampare los intereses de la reacción y llegue a favorecer los planes del imperialismo".

En otra ocasión el gobernante afirmó que "Chile necesita cambiar la estructura del Estado burgués, incapaz de ordenar nuestra vida colectiva y de permitir las grandes soluciones a los problemas

de hoy". Allende también renovó su amenaza de usar la violencia revolucionaria si la oposición se salía de los marcos legales:

> "¡Usaremos la ley! ¡Usaremos la fuerza que la Constitución pone como guardiana de nuestra vida institucional y garantía ciudadana! Pero usaremos –si el caso llega y tratan de desbordar estos marcos jurídicos– la gran marea, la incontenible marea del pueblo organizado, disciplinado, consciente, dispuesto a defender su revolución, a defender a Chile y el porvenir de los chilenos".

El mandatario actuaba como verdadero generalísimo de la campaña. Con el paso del tiempo, y ante la imposibilidad de lograr el apoyo popular mayoritario, las expectativas cambiaron. Por lo mismo, en la recta final, comenzó a rebajar las predicciones, diciendo ahora que obtener cerca del 40% de los votos sería un buen resultado, en vista de las condiciones presentes, con una batalla contra el desabastecimiento.

La oposición postuló la elección como un plebiscito, en que básicamente se aprobaba o rechazaba al gobierno y a su programa. La meta a la que se postulaba inicialmente era superar a la UP en número de votos. Eduardo Frei, que se convirtió en la principal figura de la campaña opositora, lo expresó de la siguiente manera: "En toda democracia, la mayoría la constituye la mitad más uno del pueblo. Eso en todas partes del mundo da derecho a gobernar. El 4 de marzo una mayoría superior a la mitad más uno dirá dónde está la opinión mayoritaria del pueblo". Pero en otros sectores, particularmente en los nacionales, había deseos más ambiciosos. Uno de sus eslóganes fue "No basta elegir un nuevo Congreso; Chile necesita un gobierno nuevo", lo que implicaba la idea de poner fin anticipado al gobierno mediante una acusación constitucional. Para ello se necesitaba a dos tercios del Senado y si bien no fue una postura oficial de la oposición, algunas declaraciones de Jarpa y de otros candidatos en tal sentido hicieron que, en la conciencia del público, la meta opositora fueran los dos tercios y no el plebiscito que planteaba la DC. La propia izquierda avivó la idea de los dos tercios, diciendo que si la oposición no la alcanzaba, ello significaría una victoria para la UP. Como el Senado se

renovaba por mitades, la UP solo necesitaba obtener a 8 senadores para evitar la acusación constitucional contra el Presidente de la República.

La campaña tuvo un nivel de violencia nunca antes visto. Varios candidatos fueron atacados con pedradas y hasta balazos. Más desatados aún serían los ataques contra propagandistas y sedes de los partidos. A modo de ejemplo, el ministerio del Interior anotaba que entre el 6 de enero y el 24 de febrero hubo 978 detenidos por realizar propaganda electoral sin permiso, 43 por porte de armas de fuego, 84 por atentados contra sedes o personeros políticos; 6 muertos; 23 lesionados graves, 33 menos graves y 112 leves. El general Prats tuvo que rogar a los partidos para que controlaran a sus bases, que aparecían completamente desatadas.

A pesar de la tensa campaña, el día de la elección, el 4 de marzo, se vivió con normalidad, obteniéndose los resultados en los días siguientes. En diputados, la CODE obtuvo el 55,4% de los votos (29% DC, 21% PN y 4% de las agrupaciones menores) y obtuvo 87 diputados, mientras que la Unidad Popular obtuvo el 44,2% de los sufragios (18% PS, 16% PC, 3,6% PR, 2,5% MAPU, 1,1% Izquierda Cristiana y 0,8% API) y 63 escaños. En senadores, la oposición tuvo una victoria algo más amplia, con 57,25% de los votos y 14 senadores contra el 42,75 de la UP, que consiguió 11 escaños. Si bien se había presentado una gran cantidad de partidos, los votos se centraron en cuatro, siendo la DC la más votada y el PN, PS y PC relativamente equilibrados en sus apoyos. El Partido Radical, otrora partido central de la política chilena, quedó completamente diezmado, dividido en tres agrupaciones que apenas sumaban un 7%.

Los resultados fueron sorpresivos. A pesar de las dificultades económicas, ello no parecía haber hecho mella en el apoyo al gobierno. Una clave se puede encontrar en el cartel que portaba un obrero durante una concentración oficialista: "Este es un Gobierno de mierda... pero es mi Gobierno. ¡Viva el Gobierno!". El presidente Allende y la Unidad Popular en general siguieron teniendo un gran apoyo hasta el final, si bien existía una mayoría opositora, como se comprobó en las elecciones de marzo.

La aparente contradicción se explica porque se había distorsionado toda la dinámica política tradicional. Si bien siempre hay gente que vota por doctrina, lo normal era que gran parte de la ciudadanía sufragara por la opción que creía le entregaría una mejor calidad de vida. Para 1973, eso ya estaba fuera de juego. Ahora lo que importaba era votar por el candidato del bando al que uno pertenecía, independiente de si lo hacían bien o mal. Y es porque el contrario ya no era visto solo como un rival, sino como un enemigo, en una dinámica creciente de odio político. Para la oposición, la UP representaba un camino sin salida hacia una sociedad totalitaria, una nueva Cuba, con el control absoluto y sectario del Estado sobre todos los aspectos de la vida. Para la izquierda, la oposición había pasado a ser sediciosa, servidora del imperialismo, traidora. La palabra que usaba para describirla era "fascista". Por ello, no se podía retroceder, puesto que si ganaba la oposición, no se volvería a un gobierno de tipo Frei, sino que a uno contrarrevolucionario y fascista, que no dudaría en usar la violencia para destruir las conquistas revolucionarias. En tales circunstancias, no había espacio para medias tintas o posiciones conciliadoras.

La UP celebró la elección parlamentaria como un gran triunfo. Un expresivo titular de *Puro Chile* decía: "¡Chúpense esta! UP 43,39%, Momios 54,70%". Oscar Guillermo Garretón explicaba este ánimo de la siguiente manera: "Aunque les parezca raro a los matemáticos, no les debe parecer raro a los políticos... Estas elecciones son una derrota para la derecha, porque nosotros podemos hacer mucho con el 44 por ciento; ella no puede hacer nada con su 54 por ciento, dentro de los marcos legales". En la oposición, se reivindicó el haber obtenido la mayoría absoluta de los votos. Era claro que eran la mayoría del país. Pero quedaba un sabor amargo, se esperaba más. Tampoco quedaba claro el camino a seguir en adelante, puesto que las elecciones mantenían el empate político. Ni siquiera había seguridad si la oposición debía mantenerse unida. Lo cierto que la CODE se disolvió en mayo, puesto que solo había tenido un sentido instrumental. Había ganado las elecciones de marzo, pero se trató de una victoria inútil.

El ánimo exultante que reinaba en la UP fue interrumpido súbitamente con una nueva crisis interna: la división del MAPU. El gobierno estaba molesto por las tendencias radicales de la organización, por lo que se le pidió al sector gradualista, liderado por Jaime Gazmuri y Fernando Flores, que expulsaran a los más radicales, dirigidos por Óscar Guillermo Garretón. Ambos grupos se expulsaron mutuamente del partido, luchando físicamente en las calles por el control de las sedes. Se dio una división irreversible, formándose dos partidos. El Tribunal Calificador de Elecciones favoreció al grupo de Garretón, que pudo conservar el nombre de MAPU, por lo que los seguidores de Gazmuri pasaron a convertirse en el MAPU Obrero y Campesino. Paradójicamente este tenía muy pocos obreros y campesinos en sus filas, pues era un partido de élite.

En otro plano, el general Carlos Prats planteó al Presidente de la República la necesidad de terminar con la presencia de los uniformados en el gabinete, lo cual se verificó el 27 de marzo, con una fórmula dirigida por Gerardo Espinoza como ministro de Interior. En esa ocasión, el discurso presidencial mostró claramente la nueva disposición del gobierno: "Este gabinete que asume hoy, encara una nueva situación y tiene una nueva responsabilidad: fundamentalmente, vencer las serias dificultades económicas. Y no ocultamos las horas difíciles que tendremos que vivir. Factores internos y externos hacen que en este instante Chile tenga una inflación elevada y que el alza del costo de la vida haya alcanzado niveles altos. Ello nos obliga a una política económica muy drástica, muy clara, que llevaremos sin vacilaciones en su aplicación". En un mensaje dirigido a los sectores más ultras, pidió a los líderes de los partidos de la UP imponer "una disciplina vertical" y eliminar "el espontaneísmo", idea que ciertamente chocaba con las divisiones reales existentes al interior del conglomerado y con las posiciones más extremas presentes en el propio partido del gobernante, el Socialista.

El gabinete militar había cumplido su objetivo central, de garantizar un ambiente tranquilo para las elecciones parlamentarias. Pero no parecía haber salida al empate político por la vía

electoral. De ahí en adelante, la calle sería el principal escenario de la disputa política, con las protestas contra la ENU como una de sus protagonistas.

La Escuela Nacional Unificada

La Escuela Nacional Unificada (ENU) fue la gran apuesta del gobierno de la Unidad Popular en su empeño por producir una transformación estructural del sistema de enseñanza chileno según los preceptos del socialismo. Se trataba de un modelo de educación única, fuertemente controlado por el Estado y radicalmente distinto al sistema mixto que había caracterizado al Chile republicano. No solo significaba la imposición de un nuevo currículum y una reestructuración del ciclo escolar, sino que además perseguía modificar la administración de los establecimientos educacionales, según lo que se denominó "democratización de la enseñanza". Si bien muchos de los cambios propuestos por la UP se enmarcaron en la evolución del sistema escolar chileno y atendía a desafíos como la falta de infraestructura, la escolarización y el analfabetismo, la ENU significaba una nueva orientación ideológica de la enseñanza: la educación debía ser útil a la transición a la "nueva sociedad" socialista que vivía el país, formando el "hombre nuevo" que el proceso requería. De este modo, la aspiración por producir un acceso igualitario a la educación implicaba la subordinación de principios esenciales de un sistema educacional libre, al reemplazar por el control estatal la libertad de enseñanza y la prioridad de los padres en la elección de la educación de los hijos.

El Programa de Gobierno dio a conocer que el objetivo de la Unidad Popular en materia educacional consistía en "hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática". Este plan implicaba tanto la construcción de nuevos establecimientos como el paso masivo de colegios privados al monopolio estatal. Era manifiesto el deseo de controlar la educación desde el Estado:

> "Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de la educación privada".

En la práctica "las profundas transformaciones" requerían un pueblo "educado para ejercer y defender su poder político, apto científicamente y técnicamente para desarrollar la economía de transición al socialismo". Por tanto, la educación era entendida como un medio para servir los intereses políticos de la UP.

La idea de una Escuela Nacional Unificada chocaba directamente con el "Estatuto de Garantías Democráticas" aprobado en 1970 y que había permitido la elección de Allende por el Congreso Pleno. Mientras la Constitución de 1925 señalaba que "la educación pública es una atención preferente del Estado", el texto reformado señalaba, en cambio, que "la educación es una función primordial del Estado que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su ejecución". Con esto, la DC buscaba proteger de manera explícita la naturaleza mixta y plural del sistema educacional chileno, evitando cualquier tipo de monopolio estatal. La reforma constitucional también reforzó la autonomía de los colegios privados, al incluir que la organización administrativa y la designación del personal de estos establecimientos serían "determinados por los particulares que los establezcan con sujeción a las normas legales". Finalmente, la reforma abogaba por una despolitización de los planteles de enseñanza: se aclaraba que la educación impartida por el sistema de enseñanza chileno "será democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial". Agregaba, además, que cualquier modificación al sistema "se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes de composición pluralista".

La implementación de la ENU se diseñó en tres etapas: la realización de un Congreso Nacional de Educación en diciembre de 1971, la firma del Decreto de Democratización de la Enseñanza en octubre de 1972 y, finalmente, la implementación gradual de la ENU desde junio de 1973. Las tres etapas generaron una creciente oposición de distintos sectores de la sociedad chilena.

Tras realizar una serie de congresos educacionales en distintas ciudades del país, el gobierno organizó el Congreso Nacional de Educación en diciembre de 1971. A través de él, la UP buscaba generar una propuesta educacional que hiciera aparecer a la ENU como una iniciativa que nacía de las bases sociales y no como un programa impuesto desde arriba.

Aunque participaron diversas asociaciones de la sociedad civil, como juntas de vecinos, centros de padres, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, profesores y centros de madres, la asamblea y las comisiones en la práctica estaban manejadas por el oficialismo, por lo que el resultado no podía ser nada lejano –o al menos crítico– del programa ya impulsado por el gobierno. En su funcionamiento, la Central Única de Trabajadores y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación contaban con la mayor cantidad de representantes, por lo que resultaba relativamente fácil orientar el debate y sus resultados. Así, el Congreso concluyó, por ejemplo, la conveniencia de eliminar la división entre educación parvularia, básica y media, como también la diferencia entre enseñanza científico-humanista y técnico profesional.

La promulgación del Decreto de Democratización de la Enseñanza, firmado por el presidente Allende en octubre de 1972, fue el segundo paso diseñado por el gobierno para la implementación de la ENU. A través de este instrumento, la UP esperaba cambiar radicalmente la administración de los establecimientos educacionales. En concreto, la nueva disposición presidencial creaba una nueva estructura de consejos de educación regionales, provinciales y locales, mientras que en paralelo funcionarían, en cada establecimiento, un Consejo de Comunidad Escolar y un Consejo de Trabajadores de la Educación, conformando un Comité Directivo, que pasaría a ser el máximo órgano de democracia

escolar. En la práctica, se trataba de la aplicación de la teoría del "poder popular" a los establecimientos de enseñanza.

La iniciativa presidencial, sin embargo, sufrió un duro revés, cuando el contralor Héctor Humeres Magnan devolvió el decreto sin tramitarlo. La razón del rechazo era bastante sencilla: de acuerdo con las disposiciones vigentes, el contralor entendió que una modificación legal como esta requería una tramitación legislativa a través del Congreso. De lo contrario, se trataría de una norma ilegal, pues no era posible promulgar una norma como esta saltándose la discusión parlamentaria.

La respuesta del ejecutivo no se hizo esperar: el presidente insistió con la "democratización de la enseñanza", a través de un nuevo decreto cuya legalidad logró ser reconocida por el contralor. Si bien el nuevo decreto creaba los mencionados Consejos de Educación, estos tenían atribuciones más limitadas que en la disposición rechazada. Como veremos más adelante, estos consejos de educación fueron entendidos por la oposición como un mecanismo para crear un poder paralelo que, en los hechos, presionaba sobre las instituciones de enseñanza a lo largo de todo el país.

El año 1973 fue decisivo para la suerte que correría la ENU. Junto con la polémica promulgación del Decreto de Democratización de la Enseñanza en marzo de 1973, el gobierno había planificado que el siguiente paso sería el inicio de la implementación del nuevo sistema, que tendría lugar desde el 1 de junio de ese año. Para ello, en febrero de 1973, el gobierno dio a conocer a la prensa y a los establecimientos escolares el "Informe sobre la Escuela Nacional Unificada", que explicaba el sentido de los cambios y detallaba un cronograma para la aplicación de la ENU.

En concreto, el informe profundizaba en cuestiones ya planteadas en el Programa de Gobierno, además de detallar el plan para implementar el nuevo sistema. En cuanto al contenido, el documento apuntaba que la "perspectiva estratégica que ilumina la nueva política educacional presupone la construcción de una sociedad socialista humanista", agregando que el nuevo sistema de enseñanza iba a ser "cuantitativa y cualitativamente diferente del

actual". Además, aclaraba que la ENU eliminaría la diferenciación entre educación científica-humanista y la técnico-profesional, asegurando que todos los estudiantes recibieran el mismo tipo de formación. El documento agregaba que la ENU estaba basada en el modelo denominado "educación permanente", que incorporaría a la totalidad de la población chilena, "desde el nacimiento hasta la ancianidad", al proceso de educación. Especificaba el informe que se trataba de una "educación de masas, por las masas y para las masas".

En cuanto a los colegios privados, el informe confirmaba los temores existentes respecto a la amenaza de un desmedido control estatal de la educación. Se señalaba que, para obtener reconocimiento del Estado, los establecimientos privados debían "adoptar los contenidos y la estructura curricular de la ENU". Sobre esto había una amplia resistencia en la comunidad educativa, pues se estimaba que atentaba contra la libertad de enseñanza.

El informe despertó inmediatamente las alarmas, primero en las comunidades escolares y luego en organizaciones estudiantiles, partidos políticos e instituciones como la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. El documento había conseguido confirmar las sospechas sobre la ENU, dándole argumentos suficientes a la oposición e instituciones de enseñanza para rechazar de plano el proyecto. La crítica se concentraba en dos cuestiones. Por un lado, se acusaba que el proceso de formulación de la ENU no había sido participativo ni había incluido una pluralidad de actores, como el gobierno había prometido. Sin ir más lejos, el propio informe invitaba a la comunidad escolar y a la ciudadanía a abrir un debate sobre la aplicación de la ENU, a pesar de que su inicio estaba ya programado para el 1 de junio de 1973. Además de los reparos sobre el proceso y la precipitada implementación, se levantaron críticas transversales, respecto al contenido de la ENU. Coincidían –no sin razón– que la propuesta se basaba en premisas ideológicas y políticas, cuyo objetivo era la concientización socialista de niños y jóvenes en todo el país. No solo el programa de la UP, el informe y las declaraciones del gobierno daban cuenta de ese peligro, sino que también estaba la experiencia comparada: en los países

socialistas era tal la intervención del Estado en la educación que llegaba a desaparecer la libertad de enseñanza.

El anuncio de la ENU sirvió como un nuevo aglutinador de la oposición política y social a la Unidad Popular, que acumulaba una nueva causa a su favor. Si antes la oposición social ya se había manifestado a través del movimiento de mujeres, camioneros y comerciantes, la ENU tuvo la capacidad de expandir la movilización callejera contra el gobierno. De este modo, la ENU significó un fuerte revés para el gobierno en lo social, en lo político y en lo institucional.

En el plano social, largas jornadas de movilizaciones repletaron de manifestantes las principales calles de Santiago y otras ciudades. Organizaciones de estudiantes convocaron a marchas, desde entonces y prácticamente hasta el final del gobierno de Allende. Entre los secundarios –quienes eran los más directamente afectados por la ENU–, el liderazgo lo asumió la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES), junto a otras organizaciones como la Federación Única de Estudiantes Particulares (FUEP) y la Confederación Nacional de Estudiantes de Colegios Particulares (CODEPART). La Unidad Popular había perdido la conducción de la FESES en 1971 –evidenciando la pérdida de apoyo del gobierno en la base estudiantil–, cuando la Democracia Cristiana asumió el mando con el nuevo presidente Guillermo Yunge. En 1972 había asumido el también democratacristiano Miguel Salazar, quien encabezó las protestas contra el gobierno desde entonces. Ante el anuncio de la ENU, Salazar declaró al diario *La Prensa* que la propuesta del gobierno "se presta para una concientización y un control marxista de la educación chilena". Algunos líderes secundarios declararon a otros medios: "No podemos aceptar que no se tome en cuenta la opinión del estudiantado... especialmente cuando se advierte un intento de avasallar la educación particular y la finalidad de suprimir una garantía de pluralismo y democracia como lo es la educación particular en Chile". A los reclamos contra la ENU se sumaba otro tipo de demandas estudiantiles, relativas a las dificultades materiales y de recursos que afectaban a los estudiantes, especialmente en un momento de dura crisis

económica. Entre ellas se cuentan el desabastecimiento de útiles escolares y de uniformes, a lo que se añadía la falta de locomoción colectiva –que dificultaba la asistencia a clases– y la falta de matrículas disponibles.

A nivel universitario, las federaciones de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso –ambas en manos del gremialismo– asumieron el liderazgo. Para los dirigentes universitarios, el informe confundía educación con adoctrinamiento, atentaba contra el derecho de los padres de educar libremente a sus hijos, por lo que concluían se trataba de una propuesta totalitaria. En último término, era un "intento por uniformar a la fuerza todas las conciencias". Una declaración de la FEUC, liderada por Javier Leturia, apuntaba que la ENU era "el más grave intento por implantar el totalitarismo en Chile". Por otro lado, hubo un especial interés por el desarrollo de ideas más allá de las protestas. Por eso, como respuesta al documento del gobierno, la FEUC publicó en abril de 1973 el informe *ENU. El control de las conciencias*, que ofrecía razones jurídicas, pedagógicas y doctrinarias para rechazar la ENU. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso (FEUC-V), Juan Carlos Bull, llamó a organizar un Frente de Defensa de la Libertad Educacional en Valparaíso, al tiempo que expresaba su "rechazo más terminante a la creación de la ENU, porque su objetivo final es concientizar y moldear la conciencia de las nuevas generaciones de chilenos".

Los partidos políticos de oposición también se pronunciaron contra la ENU. La posición de la DC fue lapidaria. Para Patricio Aylwin, entonces presidente del partido, el informe de la ENU era "precipitado, incompleto y manifiestamente destinado a servir de instrumento al objetivo político-partidista de concientizar a los niños y jóvenes chilenos dentro del ideario marxista-leninista que inspira a los partidos gobernantes". El partido denunciaría que los contenidos y el procedimiento de la ENU eran "inconsultos, contradictorios, incompletos, sectarios, precipitados e inconstitucionales". El Partido Nacional, en su informe, también denunció la inconstitucionalidad de la ENU, particularmente

por la eliminación del rol de los padres en la educación de los niños, que ahora quedaban en manos del gobierno y sujetos a la concientización ideológica. Cuestionaron los Consejos de Educación de la "democratización de la enseñanza" por operar, en la práctica, como poderes paralelos, arrogándose facultades fuera de sus competencias. En la derecha, además, emergió un nuevo líder estudiantil. Un joven Andrés Allamand, entonces jefe de la Juventud Nacional, consideraba la ENU como "un golpe mortal para la libertad de enseñanza", denunciando que "la educación pasa a ser el instrumento para implantar en Chile un sistema de vida rechazado en la última elección parlamentaria y todas las elecciones anteriores".

La publicación del Informe sobre la Escuela Nacional Unificada tensionó, como ningún otro episodio, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica. El propio cardenal Silva Henríquez reconocería más tarde en sus *Memorias* que la ENU fue "el peor problema que la UP enfrentara con la Iglesia" y que "había tocado una de las fibras más sensibles de la Iglesia", toda vez que no era capaz de garantizar una educación pluralista. Incluso las divisiones al interior de la conferencia episcopal pasaron a un segundo plano. Según el testimonio de Bernardino Piñera recogido en *Un Obispo en tiempos de cambio*, "la polémica por la Escuela Nacional Unificada unió mucho a los obispos, todos estaban en contra de la ENU". La propia conferencia episcopal manifestó en su Declaración de la Asamblea Plenaria del Episcopado, de abril de 1973, que el proyecto "no respeta valores humanos ni cristianos fundamentales".

En conversaciones directas entre el cardenal Silva Henríquez y Allende, el prelado le manifestó al presidente la necesidad de aplicar reformas en la educación para favorecer la igualdad de oportunidades. Sin embargo, lo conminó a cumplir su promesa, en el sentido de que esos cambios debían realizarse a través de un debate pluralista de toda la sociedad. Allende responsabilizó al ministro Jorge Tapia, por haberse precipitado en la aplicación de la ENU, comprometiéndose a postergarla. De este modo, las gestiones del cardenal Silva Henríquez ante el presidente Allende

contribuyeron a que la ENU fuera aplazada, "para permitir un amplio debate nacional", según había solicitado previamente el Episcopado.

Finalmente, la ENU fue un factor de gran tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Se trataba de un tema extremadamente sensible porque, además de que comprendieron que la ENU era un intento de "concientización" de la juventud en favor del marxismo, en el ejército reconocieron que la ENU significaba un problema especial, toda vez que afectaba directamente a los futuros postulantes a las instituciones castrenses. Su conclusión era simple: la ENU era una amenaza tanto para la seguridad nacional como para la jerarquía de las Fuerzas Armadas. El episodio de mayor tensión tuvo lugar el 11 de abril de 1973, cuando el ministro de educación Jorge Tapia fue invitado a explicar la ENU en una reunión con oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Tras su exposición, el almirante Ismael Huerta manifestó las inquietudes de los militares sobre la puesta en marcha de la ENU y las críticas por querer concientizar a la juventud. Prats recuerda en sus *Memorias* que tras su intervención hubo "estruendosos e inusitados aplausos de la concurrencia", calificados por el propio Prats como "la primera bomba de advertencia". En definitiva, en el mundo militar había altos grados de desconfianza respecto de la ENU. Como admitiría más tarde el propio Huerta en *Volvería a ser marino*, "por primera vez había habido un rechazo expreso y mayoritario de las Fuerzas Armadas al marxismo".

La ENU sería clave en los últimos meses del gobierno de Allende, durante su crisis final. No solo se transformó en una iniciativa que confirmó la minoría social y política que respaldaba al gobierno y, con esto, la imposibilidad de realizar cambios revolucionarios en educación. Lo más grave se produjo el 22 de agosto de 1973, con el Acuerdo de la Cámara de Diputados que acusó al gobierno de Allende por haber "atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través de llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista".

La huelga de los mineros de El Teniente

La huelga de los mineros de El Teniente iniciada en abril de 1973 –tan solo 5 meses después del Paro de Octubre– fue otro de los hitos que desafiaron la relación entre los trabajadores y la Unidad Popular. Sergio Bitar, ministro de Minería en esos meses, reconoce en su libro *La caída de Allende y la huelga de El Teniente* que este "fue el conflicto laboral de mayor envergadura que enfrentó el gobierno". Sin embargo, no se trataba de un mero problema laboral, sino que además abarcaba dimensiones políticas, económicas y sociales de gran envergadura, en un contexto de crisis y descomposición del gobierno. En lo político, cuestionaba una de las tesis principales de Allende, que calificaba a su mandato como "el gobierno de los trabajadores". Esto adquiría especial relevancia en el entendido de que, tras la nacionalización del cobre, la totalidad de la propiedad de El Teniente había pasado a manos del Estado. Junto a esto, las huelgas se habían transformado en un verdadero *boomerang* para el gobierno. La izquierda no solo había promovido la paralización de los trabajadores y la movilización social por décadas, especialmente durante los años sesenta, sino que además había usado este mecanismo para extender el Área de Propiedad Social durante el mismo gobierno de la Unidad Popular.

La huelga tuvo su origen ante una diferencia entre el oficialismo y los mineros respecto al reajuste de remuneraciones, que entonces se calculaba según lo establecido en la Ley N° 17.713, de acuerdo con el incremento del costo de la vida. Se trataba de un tema especialmente sensible pues, con una inflación acelerada y pocas veces vista en la historia de Chile, los trabajadores observaban con angustia la amenaza de la disminución de sus salarios reales mes tras mes. La discordia se originó con la interpretación de la mencionada ley realizada por la empresa estatal. Los mineros acusaban que el ajuste de remuneraciones calculado por las autoridades era incompleto, pues no incluía los beneficios conseguidos en virtud de la escala móvil de salarios. La empresa

estatal y el gobierno estimaban, en cambio, que la fórmula reclamada por los trabajadores implicaba un doble beneficio. Al incluir el mecanismo de la escala móvil en el cálculo del reajuste según la inflación habría una doble compensación por la misma inflación. Esta fue la chispa que encendió la mecha y el origen de una huelga de consecuencias hasta entonces insospechadas para la Unidad Popular.

Los primeros esfuerzos del gobierno por controlar el movimiento huelguístico fueron estériles. En una primera instancia intentó llegar a un acuerdo con los trabajadores que adherían a la Unidad Popular, con el fin de mostrar una aparente normalidad en el funcionamiento de la mina. Esto agudizó el encono de los trabajadores movilizados y estuvo lejos de acercar las posiciones entre las dos partes. Como en otras ocasiones, el gobierno decretó el Estado de Emergencia, esta vez en la provincia de O'Higgins, nombrando interventores en la empresa para reanudar las actividades. Estos esfuerzos iniciales sirvieron de poco. No atacaron la raíz del problema, que era el mantenimiento de un sindicalismo independiente del gobierno, y la huelga siguió su marcha cada día más fortalecida, tanto por la cantidad de trabajadores que adherían a la movilización como por los gremios que expresaron su solidaridad.

Como había ocurrido en el Paro de Octubre con los camioneros, la huelga de los mineros de El Teniente inició una nueva ola de solidaridad gremial de trabajadores y estudiantes a lo largo del país. La incapacidad del gobierno para resolver el conflicto no hacía otra cosa que engrosar la oposición social a la Unidad Popular, integrando a nuevos actores y demandas en la movilización.

Inicialmente, el gobierno manifestó una posición crítica sobre los trabajadores movilizados, aduciendo que sus demandas estaban más allá de todo reclamo legítimo, que estaban movidas por un economicismo nocivo y que no actuaban con la suficiente conciencia de clase. En lo que parecía ser parte de un guion repetido, el gobierno nuevamente argumentó que se trataba de un paro político y no gremial, calificado incluso como sedicioso, porque tenía como objetivo oculto la desestabilización del gobierno, el

fomento de la guerra civil o abrir el camino a un golpe de Estado. El mismo Allende acusó a los trabajadores en huelga de ser funcionales a los intereses de la derecha sediciosa. En el fondo, se aplicaban las categorías de la lucha de clases a un conflicto que parecía ser total.

El momento más decisivo y simbólico de la huelga fue la decisión de los trabajadores de marchar desde Rancagua a Santiago, durante las primeras semanas de junio. Con esto no solo se situaba el corazón del conflicto en la capital, haciéndose todavía más visibles las demandas de los mineros, sino que además daba la oportunidad a los huelguistas de canalizar un apoyo todavía más amplio por parte de la ciudadanía. Tras llegar a Santiago, cientos de trabajadores y sus familias fueron acogidos en la Casa Central de la Universidad Católica. Bajo los lemas de "solidaridad gremialista" y "Universidad Católica, asilo contra la opresión", la universidad acogió a los mineros desde entonces hasta la resolución del conflicto.

La estadía de los mineros y sus familias en la Casa Central de la UC, por casi dos semanas, ilustró muy bien el estado social del país. Por una parte, la UC fue testigo de un amplio apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil, que llegaron masivamente a la casa de estudios para donar alimentos, ropa y medicamentos a los mineros. Por otra parte, sin embargo, las hostilidades no se hicieron esperar y la Universidad Católica sufrió el asedio de distintos grupos que atacaban desde el exterior con piedras, palos, rodamientos y balazos.

Junto con la marcha a Santiago y la estadía en la Universidad Católica, un tercer hito que caracterizó el desarrollo del movimiento fue el gran acto de masas del 19 de junio, que repletó de manifestantes la avenida Bulnes desde calle Cóndor hasta la Alameda. Para entonces, ya estaba cristalizada la unidad entre trabajadores y estudiantes, plasmada en consignas como "Estudiantes y trabajadores unidos jamás serán vencidos" y "Obreros y estudiantes, unidos adelante". Federaciones de estudiantes y centros de alumnos de todo el país se habían sumado a las manifestaciones. Los partidos políticos de oposición también se plegaron al acto. Patricio Aylwin

señaló la necesidad de defender el régimen constitucional, las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores. Como apuntaba el principal líder del movimiento, Guillermo Medina, la huelga no solo representaba la lucha por una reivindicación económica, sino que, además, lo que verdaderamente estaba en juego, era el futuro de un sindicalismo libre de la injerencia arbitraria e injusta del Estado.

La Unidad Popular pasaba por momentos de división interna, tanto respecto a las vías al socialismo como también sobre los métodos de resolución del conflicto con los mineros. La decisión de Allende de reunirse con los líderes de la huelga para dar solución al problema fue criticada por el Partido Socialista y el Partido Comunista, que cuestionaban la representatividad de los líderes gremiales y estimaban que la reunión era inconveniente. De este modo, el presidente Allende estaba entre "dos fuegos": se enfrentaba simultáneamente a una oposición social resuelta y masiva, y a la incomprensión al interior de su propio gobierno. Allende hacía un llamado a estar abiertos al diálogo, arguyendo la necesidad de "guerra al fascismo, discusión y diálogo con los trabajadores de la oposición", que ilustraba bien cómo Allende entendía la forma de proceder.

A lo largo del conflicto, se ensayaron distintas opciones para acercar las posiciones entre el gobierno y los trabajadores. Las negociaciones habían incluido fórmulas diversas, que consideraban el pago de bonos, la promesa de que no habría represalias contra los trabajadores en huelga, gratificaciones e indemnizaciones por años de servicio. Durante los dos meses que duró el conflicto no se llegó a acuerdo. La salida tuvo lugar, finalmente, el 29 de junio de 1973, tras el Tanquetazo. Como salida a las diferencias por la interpretación de la Ley N° 17.713 se acordó el pago de un bono de 39 mil escudos y un incremento en las remuneraciones de al menos 3 mil escudos mensuales.

La huelga de El Teniente tuvo efectos políticos, económicos y sociales, empujando la acelerada descomposición del gobierno. En lo político, a la acusación constitucional contra los ministros de Trabajo y Minería, se sumó que el presidente Allende realizó

un nuevo cambio de gabinete, que incluyó reemplazos en las carteras de Interior, Economía, Educación, Agricultura, así como en las mencionadas de Minería y Trabajo. En lo económico, se estimó que cada día de huelga había significado una pérdida de un millón de dólares para el país. En lo social, el paro de El Teniente confirmaba el fortalecimiento de una oposición social contra el gobierno, reafirmando, a la vez, la profunda división de amplios sectores sociales a favor y en contra del gobierno de la Unidad Popular. Si bien en el discurso el Ejecutivo se presentaba como el "gobierno de los trabajadores", los hechos demostraban que había una cada vez más transversal solidaridad de trabajadores contra las medidas de la Unidad Popular. A pesar de que la huelga de El Teniente fue levantada, la movilización de trabajadores y estudiantes contra el gobierno no se detendría hasta las vísperas del 11 de septiembre.

El debate por la libertad de expresión

En 1970 existía un gran número de periódicos en Chile, gran parte de los cuales estaban asociados a una tendencia o partido político. *La Nación* era el diario de gobierno, por lo que cambiaba de posición según la administración de turno. En la izquierda destacaban *El Siglo*, *Las Noticias de Última Hora* y *Clarín*, este último caracterizándose por su estilo populachero y de ataques insidiosos a sus enemigos. En la derecha, el predominio lo tenía la red de periódicos propiedad de Agustín Edwards, con *El Mercurio*, *La Segunda* y *Las Últimas Noticias*. *La Tercera* ocupaba una posición relativamente de centro. La llegada de Allende a La Moneda propició la aparición de nuevos medios, *La Prensa*, asociado a la Democracia Cristiana, y *Tribuna*, fundado por miembros del Partido Nacional. Esta multiplicidad de medios daría voz a la polarización, adoptándose posturas cada vez más enconadas, con un lenguaje agresivo y hasta vulgar, que ayudaba a exacerbar las pasiones en el público.

En el campo de la libertad de expresión, el récord de Allende fue pobre. En el programa de la UP se decía que los medios "son

fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo" (es decir, eran medios de propaganda política). Había que "liberarlos de su carácter comercial", particularmente por la "presencia nefasta de los monopolios", lo que quería decir que había que terminar con la prensa comercial y por ende aquella de oposición. El control de los medios quedaría bajo las "organizaciones sociales" (léase como organizaciones de izquierda). El Estatuto de Garantías Constitucionales le puso graves obstáculos al cumplimiento del programa en este ámbito, pero este ideal –del control de la izquierda de los medios de prensa– no fue desechado, sino que se intentó realizar por medios más subrepticios.

Hemos visto los constantes esfuerzos del gobierno por asfixiar a la Papelera, con el evidente objetivo de controlar la distribución del papel. A pesar de que el Paro de Octubre obtuvo un reajuste para los precios del papel que permitió un breve respiro a la compañía, la ofensiva del gobierno se reinició en 1973, nuevamente negando reajustes de precios, a pesar de la desatada inflación.

Hubo numerosos intentos por parte del gobierno de usar al Poder Judicial en contra de la prensa opositora, mediante la presentación de querellas. Estas tenían el efecto de suspender la publicación por algunos días, si bien en general terminaban desestimadas por la justicia. De entre los casos más conocidos está una resolución de la Corte de Apelaciones, el 21 de junio de 1973, que suspendió por 6 días al diario *El Mercurio*, con motivo de una querella presentada por el gobierno, debido a una inserción del PN considerada sediciosa. La resolución, que había causado consternación en la oposición, fue revertida por la justicia al día siguiente. Poco después, por el Tanquetazo, un grupo de la policía civil procedió a allanar sus oficinas, desalojando a sus funcionarios. El 13 de julio fue suspendido el diario *La Tercera*, por publicar una inserción de Patria y Libertad. Estos eran básicamente métodos de intimidación, para evitar que dieran tribuna a grupos o declaraciones consideradas subversivas. Está de más decir que esto no se aplicaba a los medios de izquierda, a pesar de que allí también proliferaban llamados a romper la institucionalidad.

La UP también esperaba que los propios trabajadores se tomaran las empresas y que los medios representaran los valores de los periodistas y a los dueños. Hubo intentos por controlar *El Mercurio* mediante la formación de comités de la UP entre sus trabajadores, pero estos fueron desvinculados de la empresa. Más grave fue la situación de los diarios *El Sur* y *Crónica*, ambos de Concepción, y *La Mañana* de Talca, los cuales fueron usurpados por huelguistas y militantes de la UP, quienes les impusieron una línea editorial de izquierda. La justicia ordenó devolver los diarios a sus dueños, pero el gobierno se resistió a cumplir las órdenes. Ello fue una de las demandas del Paro de Octubre, en que se logró finalmente el desalojo de *La Mañana* y *El Sur*.

La dura resistencia de los medios opositores llevó a que el gobierno recurriera a la asfixia económica y al acoso policial, especialmente en radios y televisión, donde creía tener mayores facultades legales para hacerlo. Con respecto a las radioemisoras, también hubo un intento de hacer quebrar a las estaciones opositoras. Entre más poder económico acumulaba el Estado, iba desapareciendo su publicidad en las radios no oficialistas. El Congreso aprobó una ley de financiamiento para las radios, pero fue vetado por el ejecutivo. Durante 1972, el gobierno inició una ofensiva contra las radios opositoras, al caducar la onda a la Radio Minería de Viña del Mar y luego suspender las transmisiones de Radio Agricultura de Los Ángeles. La situación de estas radios sería otra de las banderas de lucha de la oposición durante el Paro de Octubre. Durante el mismo, el gobierno impuso una cadena radial obligatoria, en la que solo se divulgaban las informaciones aprobadas por la UP. La oposición pidió hacer uso de la cadena, pero la petición le fue denegada por el gobierno. La Contraloría declaró ilegal la cadena nacional, pero el gobierno lo ignoró. De hecho, castigaba a las radios opositoras que rompían la cadena, si bien permitía que las oficialistas hicieran lo mismo. El gobierno terminó la cadena recién tras una resolución de la Corte de Apelación en contra de la misma. A lo largo de 1973 el gobierno continuaría su práctica ilegal de establecer cadenas obligatorias, que le permitía suspender, aunque fuera por algunos días, las radios

opositoras. El gobierno justificaba tales medidas, diciendo que no era un atentado contra la libertad de expresión, sino sanciones contra medios que habían mentido y causado alarma pública.

El gobierno tenía un control aún mayor sobre la televisión. En el canal estatal, el único espacio pluralista era el programa de debate "A tres bandas", donde representantes de las tres grandes corrientes de opinión discutían semanalmente la situación del país. A mediados de 1972, por iniciativa del Partido Comunista, el programa fue suspendido. El diario oficialista *La Nación* celebró el fin de este programa de debate, catalogado como "un verdadero respiro moral y físico por la purificación cultural del ambiente y el saneamiento higiénico de la pantalla nacional".

El medio de la Universidad Católica, Canal 13, también sufrió la arbitrariedad gubernamental. El Congreso aprobó la expansión de sus señales a provincias, pero el gobierno vetó la decisión. A partir de 1972, el canal adoptó una postura claramente opositora. En Concepción se estableció una filial de su estación emitido a través del Canal 5. El gobierno ordenó el inmediato cese de sus operaciones. Como estas continuaron, el gobierno instaló unos equipos electrónicos para interrumpir la señal. Cuando estos fueron destruidos por miembros de Patria y Libertad, con un muerto de por medio (y la participación de Michael Townley, futuro asesino de Orlando Letelier), el director de Canal 5 fue arrestado y, según el testimonio del mismo, torturado. La izquierda inició una campaña para desligar al sacerdote Raúl Hasbún de su cargo como director de Canal 13. Tras fracasar, se intentó la fórmula de estrangulación económica, colocándole trabas para importar seriales y removiéndole permisos de transmisión para las eliminatorias del mundial de fútbol.

La Universidad de Chile también contaba con un medio, Canal 9, cuya área de prensa se había caracterizado por una tendencia hacia la izquierda. En un plebiscito interno, la casa de estudios se pronunció por realizar cambios en el área periodística del canal, llamando a concurso para llenar todos los cargos del departamento de prensa. Ello fue rechazado por los trabajadores favorables a la UP, que se tomaron el canal. En vista de ello, la universidad

inició transmisiones en Canal 6, pero sus instalaciones fueron allanadas por funcionarios de investigaciones, que detuvieron a sus trabajadores y destruyeron los equipos técnicos. Los tribunales y el Consejo Nacional de Televisión le dieron la razón a la universidad, declarando legal el funcionamiento de Canal 6. Al tratar de reanudar sus transmisiones, el gobierno les cortó la luz, arguyendo que no contaban con autorización de la Dirección de Servicios Eléctricos. Esta nueva táctica, abiertamente arbitraria e ilegal, también fue usada para castigar a las radios Agricultura y Minería. La Corte de Apelaciones dictó una encargatoria de reo al Superintendente de Servicios Eléctricos. Por su parte, el ministro del Interior, Gerardo Espinoza, sería destituido de su cargo mediante una acusación constitucional. Con respecto a la situación de Canal 9, tomado por elementos de izquierda, los tribunales decretaron su ilegalidad y que debía ser desalojado. Pero el gobierno se rehusó a otorgar la fuerza pública para cumplir la orden legal.

Hubo una permanente molestia de la izquierda por las continuas decisiones judiciales en favor de los medios de oposición, con la UP realizando llamados "a resistir la arbitrariedad judicial". En una editorial del 23 de agosto de 1973, *La Nación* expresó que la conclusión era obvia: o cambian de actitud los magistrados o el pueblo tomará en sus manos la aplicación estricta de la ley.

Ante las acusaciones de que se acabaría la libertad de expresión en Chile, la izquierda retrucaba recalcando que no solo había libertad, sino también libertinaje, apuntando a los numerosos ataques e insultos que los medios dirigían contra el gobierno. Esto era cierto, pero obviaban decir, por supuesto, que en los medios de izquierda también se atacaba e insultaba a la oposición en forma constante.

Para el gobierno, los resultados de esta ofensiva fueron absolutamente contraproducentes, por ver envalentonada a la oposición, dándoles una bandera de lucha que los unificaba. ¿Por qué entonces Allende permitió (o incentivó) el acoso a los medios opositores? En el fondo, la prensa independiente no era vista como una forma de postular miradas divergentes sobre la sociedad, sino que una

careta para defender intereses de clase. En la UP se entendía que no habría espacios para la prensa de oposición en una sociedad socialista, por lo que ocuparon una política de no ceder espacios, de limitar lo más posible, con medios ilegales inclusive. Era claro que, para la izquierda, el "pluralismo" de la vía chilena tenía como límite la defensa de intereses contrarios a la clase obrera, lo que claramente no debía estar permitido.

Allende y la democracia

Salvador Allende tuvo una relación muy compleja e incluso ambigua con la democracia. Él se consideraba un revolucionario, quería construir el socialismo, pero procuraba hacerlo por los medios institucionales, había ocupado la Presidencia del Senado y había participado en numerosas elecciones dentro del sistema. En la década de 1960 las posturas se habían radicalizado, lo cual le permitía ser miembro de un partido, el Socialista, que proclamaba que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima" para llegar al poder, así como era parte de la OLAS, para difundir la revolución armada en toda América Latina.

A lo largo de su trayectoria parlamentaria, Allende se refirió muchas veces al sistema democrático representativo, predominando en él una visión crítica, de que esta no era una verdadera democracia. Al igual que el resto de la izquierda, Allende gustaba de aplicar a la democracia chilena apelativos como "burguesa" o "formal". Una de sus declaraciones más duras la dijo en 1956, cuando afirmó que la chilena era una "democracia burguesa, caduca, apolillada y putrefacta en muchos aspectos", si bien inmediatamente añadía que valía más que una dictadura. El defecto principal de la democracia representativa es que existía para garantizar el dominio de una clase, la burguesía, por lo que impedía el avance creador del pueblo. ¿Por qué se le aceptaba entonces? Porque se concebía como una etapa de la evolución política del país, pero etapa que habría de ser superada. Su valoración era meramente instrumental, puesto que la meta era transformar a Chile en una auténtica democracia revolucionaria.

No obstante, Allende rechazaba la idea de aplicar la dictadura del proletariado. En ello fue consistente a lo largo de su carrera política y no dudó en mostrarse heterodoxo. Así lo expresó el 21 de mayo de 1971: "Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada... Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista".

Allende tuvo un comportamiento equívoco en las elecciones presidenciales en que fue derrotado. Respecto a los comicios de 1958, Allende decía: "Tengo la impresión de que nos robaron la elección antes y en el día del acto eleccionario, porque se emplearon métodos que vulneran las disposiciones legales, los preceptos jurídicos". Para Allende, el hecho de que podría haber llamado a paralizar el país, pero decidió no hacerlo, era la más evidente demostración del respeto a la democracia burguesa, "en la cual no creemos", como él mismo remarcaba. Básicamente, el mérito de Allende era no salirse de la legalidad. En su gobierno repetiría más de una vez esta lógica.

Frente a Frei, Allende reconoció la victoria de su rival, pero con el tiempo comenzó a cuestionar su legitimidad, catalogándola como una victoria "sucia", por la campaña desatada contra el FRAP. En el fondo, estaba la idea de que uno de los defectos de la democracia representativa era que el pueblo podía ser engañado mediante la publicidad. Una democracia auténtica, para Allende, no tendría ese problema, pues habrían acabado con los monopolios y su influencia sobre la política. No habría, entonces, falsa conciencia. Los trabajadores no serían engañados para votar por partidos que no representaban sus intereses.

Al llegar a la presidencia, Allende tuvo la oportunidad de poner en práctica su visión sobre la democracia. ¿Como debía ser una democracia autentica? Allende la describía de la siguiente forma en su mensaje al Congreso Pleno de 1972:

> "Durante decenios hemos luchado contra una práctica y entendimiento de la democracia puramente formales, en que el sufragio,

símbolo externo de la manifestación del poder, ocultaba una realidad enajenante de la voluntad popular. La auténtica democracia exige la permanente presencia y participación del ciudadano en los asuntos comunes, la vivencia directa e inmediata de la problemática social de la que es sujeto, que no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia significa imponer las libertades sociales. Hemos combatido siempre la concepción individualista de la democracia, vinculada al egoísmo propio de una organización capitalista, en que la concentración de los recursos económicos fundamentales en una minoría dominante permitía a esta usufructuar de los mecanismos políticos representativos. Los grandes cambios efectuados en los últimos meses para imponer la democracia económica nos proporcionan el instrumento indispensable para alcanzar la democracia social".

Básicamente, para Allende una democracia real era una en que el pueblo participara activamente, distinta de la democracia representativa chilena. La pregunta esencial aquí es ¿quién era el pueblo? Para Allende la respuesta era obvia, los trabajadores, los pobres, los explotados. No todos los chilenos eran parte del pueblo. Muestra de ello era una propuesta constitucional sobre la cual se estaba trabajando, pero que no fue dada a conocer al público sino muchos años después de la muerte de Allende, por su asesor Joan Garcés. En esta propuesta había un cambio en las estructuras del Estado: se mantenía la Cámara de Diputados elegida por sufragio universal, pero el Senado era reemplazado por una Cámara de Trabajadores. Esta última era la más poderosa de ambas cámaras, pues todo procedimiento legislativo debía comenzar en ella. Solo podían votar y ser elegidos los trabajadores, que eran definidos como los productores "de bienes o servicios mediante su acción personal y directa sobre los medios de producción", dejando explícitamente excluidos a aquellos que emplearan asalariados, se beneficiaran con la plusvalía o desarrollaran actividades de tipo especulativo. ¿Qué sería de las dueñas de casa, que no participaban de la producción? ¿Los comerciantes desarrollaban actividades de tipo especulativo o productivo? Había una clara posibilidad de excluir a los sectores que votaban por grupos desde el Partido

Nacional hasta sectores de la Democracia Cristiana, de distorsionar deliberadamente el universo de votantes.

Un aspecto central que se le ha rescatado a Allende, especialmente en contraste con el periodo que siguió, fue su respeto a la acción de los partidos opositores. Mal que mal, ningún dirigente opositor fue apresado. Sin embargo, para Allende solo parte de la oposición era legítima, básicamente la Democracia Cristiana. La derecha fue excluida deliberadamente, sin establecer siquiera intentos de diálogo con este importante sector de la sociedad, aunque también jugó en esto algo de autoexclusión. En tal sentido, para la izquierda un régimen pluralista ideal se acercaba a lo que sucedía en Alemania Oriental, en donde junto al Partido Socialista Unificado, que reunía a socialistas y comunistas, existía también un representante de la pequeña burguesía, incluyendo un partido democratacristiano, uno liberal socialista, otro para los sectores agrarios e incluso uno para exnazis. Naturalmente, todo esto era una farsa, pues sus representantes eran nombrados por el partido dominante, pero era una farsa que tenía atractivo para la izquierda chilena, un nuevo paradigma, que se sumaba a la URSS y Cuba. En algún momento hasta intentaron convencer a los democratacristianos chilenos para que establecieran relaciones con sus pares germano-orientales.

Un rasgo de intolerancia se veía en palabras pronunciadas por Allende a fines de junio de 1973 sobre cierto sector de la oposición, que consideraba subversivo:

> "Hablan de democracia y de Constitución. Usan la palabra democracia para ocultarse y protegerse, pero actúan violando la Constitución y son antidemocracia y pro fascistas. Ya el pueblo los conoce y los seguiremos denunciando... haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa ni significará tolerancia con los anti demócratas, tolerancia con los subversivos y tolerancia con los fascistas".

¿A quién se refería con fascistas? ¿Solo a Patria y Libertad, que era el más sindicado con ese apelativo? ¿o también al resto de la oposición? Hay que recordar que en el lenguaje de la UP y sus

medios de comunicación, el Partido Nacional y la facción freista de la Democracia Cristiana también eran fascistas. El propio Allende anunció, en una concentración de masas: "Presentaremos una querella en contra de la directiva del Partido Nacional; si hay justicia en este país debe ir a la cárcel". El pluralismo se mantuvo en Chile mucho más por el Estatuto de Garantías que por la voluntad del Presidente. A este respecto, la oposición, y especialmente la DC, tenían un recelo y desconfianza hacia el espíritu democrático del gobernante, ya que él había señalado que solo había firmado el mencionado Estatuto como una necesidad táctica para llegar al gobierno y no por el contenido de fondo ni menos por su objetivo: preservar el régimen democrático, como se había entendido hasta entonces en Chile.

En el caso de Allende, vemos que la valoración de la democracia se da principalmente en el sentido de cumplir la voluntad del pueblo. Las instituciones, si bien se respetaban, eran secundarias y si había conflicto con la voluntad popular, prevalecía esta última. Ello explica por qué Allende se rehusó permanentemente a cumplir los requerimientos de los tribunales y la Contraloría que lesionaban el cumplimiento del programa. Mal que mal, el programa, que había sido votado por el pueblo –aunque fuera una minoría del total de la ciudadanía–, era para Allende la expresión más pura de la voluntad popular.

Al igual que otros regímenes híbridos, la UP se vanagloriaba de respetar la institucionalidad, tal como lo hizo Allende en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. En realidad, la institucionalidad en su sentido más profundo, de equilibrio de poderes, de respeto y defensa del Estado de derecho, solo era respetado en sus elementos formales, mientras se socavaba en la práctica. Los enroques ministeriales, los resquicios legales, no otorgar fuerza de Carabineros a sentencias que no gustaran y la displicencia respecto al uso de la violencia por grupos de extrema izquierda eran muestra de esta dualidad. Uno de los ministros de Justicia de Allende había advertido: "La revolución se mantendrá dentro del Derecho mientras el Derecho no pretenda frenar la revolución". En el fondo, el equilibrio de poderes era un principio

del liberalismo político y esto para la UP no era más que una careta de dominación de clase.

A esto se le añadía que cuando no era el gobierno el que actuaba, eran los militantes los que hacían el trabajo sucio, los que impedían que la oposición pudiera expresarse en las calles, los que se tomaban las fábricas y los campos, los que anunciaban que se estaban preparando para ganar la guerra civil.

La existencia del multipartidismo y de una relativa libertad de expresión evitó que el Chile de la UP pueda ser considerado como un régimen autoritario. Sin embargo, estaban los gérmenes de un enfrentamiento. Ambos aspectos eran, en el fondo, incompatibles con el programa de la UP, así como este no podía coexistir con el Estatuto de Garantías Constitucionales exigido por la Democracia Cristiana en 1970.

La crisis económica

El excesivo gasto público, las estatizaciones, las distorsiones en los precios y otros problemas comenzaron a cobrar la cuenta en 1972. Las empresas disminuían su productividad, comenzaba a existir desabastecimiento de productos y el dinero cada vez valía menos. El ministro Vuskovic comenzó a reconocer las dificultades, si bien en un comienzo las achacó al corte de créditos estadounidenses y a la caída del precio del cobre. Como solución, pedía a los trabajadores de las empresas intervenidas que ahorraran dólares y que intentaran aumentar la producción. Esta forma de voluntarismo no ayudó en nada, al contrario, la situación se deterioraba cada vez más y más.

Por ello, la estrategia del gobierno se esforzó por tener un mayor control sobre los precios, con la creación de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP). Fueron presentadas por el gobierno como un arma del pueblo en contra del sabotaje, la especulación y el desabastecimiento. Para la oposición, este era un paso en el control del poder total que pretendía el gobierno, controlando la distribución de artículos esenciales.

Las JAP se constituían por trabajadores de un vecindario y tenían atribuciones tanto para denunciar a intermediarios inescrupulosos como para exigir el cumplimiento de los precios oficiales. Eran básicamente soplones, cuyo poder se encontraba en su relación con la Dirinco, para que esta aplicara sanciones. Las JAP actuaban de forma extremadamente sectaria y marcada por un sentido de clase. Lentamente, comenzaron a aplicar tarjetas de racionamiento, lo que estaba completamente fuera de sus atribuciones legales. Por lo mismo, esto aceleró el proceso de polarización, pues los sectores medios se vieron directamente amenazados por las JAP, que por lo demás solo ayudaron a empeorar la situación.

La mala situación económica hizo que Vuskovic saliera del gabinete en junio de 1972. En adelante, la política económica del gobierno perdió cualquier viso de coherencia. Con la ofensiva de la oposición y el Paro de Octubre, la improvisación comenzó a aumentar. En enero de 1973, el ministro de Hacienda, Fernando Flores, presentó un plan en el que se anunciaban enérgicas medidas contra el mercado negro y la especulación, anunciando que ciertos productos solo podrían ser vendidos al Estado y no directamente al público, dándole un monopolio casi completo de la distribución y el racionamiento. El llamado "Plan Flores" encontró la oposición de los ministros uniformados, provocando incluso la renuncia de Ismael Huerta a la cartera de Obras Públicas. En paralelo, el ministro de Economía, Orlando Millas, presentó un plan que buscaba reducir los costos al devolver 123 empresas intervenidas, consideradas no monopólicas, mientras que otras 54 pasarían al área social. Esta vez, la oposición al "Plan Millas" se encontró en la UP, que consideraba inaceptable devolver las empresas a los antiguos patrones.

Allende trató de jugar con el lenguaje, diciendo que el gobierno no pretendía hacer ningún racionamiento, sino que una repartición verdaderamente equitativa y humana de los artículos esenciales. Este remedo de neolengua orwelliana, que trataba de convencer a la población de que el racionamiento no era racionamiento, no tuvo mayor éxito, por lo que el mandatario ensayó otra fórmula para explicar lo que a todas luces se veía como una

catástrofe económica: que el país todavía estaba sufriendo los males del capitalismo y aún no arribaban las bondades del socialismo. Así lo expresó en su mensaje de 1973:

> "Padecemos las limitaciones de la capacidad productiva, lastre del pasado, y el aumento de la demanda derivado de la política redistributiva del presente. Las primeras son consecuencias del pasado que pesan sobre el presente; el segundo es la anticipación de un futuro por conquistar y que choca con la débil capacidad actual de producción. Pasado y presente se contradicen profundamente cuando este último no es una simple prolongación del ayer, sino una revolución".

Por lo tanto existía solo una vía de escape, hacia adelante, profundizando los procesos revolucionarios. Pero existía todavía el dilema, si este avance era el cumplimiento y consolidación de lo establecido en el programa, o era saltarse etapas y destruir las estructuras capitalistas lo más rápido posible. Esa contradicción nunca fue resuelta, habiendo tendencia a favor y en contra de cada alternativa en los militantes y partidos de izquierda. Para los más radicales de la UP había que "avanzar para consolidar", siendo necesario dar el paso adelante, mientras que los gradualistas llamaban a "consolidar para avanzar".

El deterioro iniciado en 1972 se agravó en forma exponencial en 1973. Las cifras eran claras: un crecimiento negativo del PIB del 7,2%, un déficit de cuenta corriente de 293 millones de dólares (a pesar de que Allende contó con el salvataje de dos prestamos del Fondo Monetario Internacional) y un déficit fiscal del -7,3% del PIB. De todas las cifras, la más desorbitada era la inflación. El país había vivido antes períodos de alta inflación y se había acostumbrado a que esta tuviera al menos dos dígitos, pero nada pudo preparar al país para lo que vino con el gobierno de Allende. La inflación de 1972 fue de un 260% y en 1973 alcanzó su récord histórico, 605%. Ello hizo que los salarios reales disminuyeran en aproximadamente un 40%, si se le compara con 1970. A pesar de que Allende tenía verdaderas intenciones de mejorar la calidad de vida de los chilenos, en la práctica se produjo un deterioro importante que afectó a una gran mayoría de la población.

En el debate político, cada bando, gobierno y oposición, se acusaban mutuamente de ser los responsables de la crisis, cada vez con tonos más conspirativos. En el oficialismo se acusaba que la causa central de la crisis eran los paros y los comerciantes inescrupulosos, todos los cuales eran financiados por la CIA. Por lo mismo, la oposición ya no era meramente obstruccionista, sino también sediciosa y traidora. De la contraparte opositora se acusaba que la crisis económica era no solo producto de la incompetencia del gobierno, sino que también tenía un aspecto deliberado, de hacer colapsar el sistema para establecer su control total sobre el Estado. Por algo los trabajadores de izquierda seguían paralizando industrias y las JAP intentaban aplicar tarjetas de alimentos. En tal sentido, el racionamiento era visto como el control de las conciencias vía el control de los estómagos.

A mediados de agosto, la situación de desabastecimiento había llegado a un punto crítico. La única respuesta del gobierno fue intentar aplicar más controles. Ello creó una burocracia desmedida, que perdía el tiempo haciendo las fijaciones de precios más inútiles posibles. Como la inflación aumentaba tan rápido, los burócratas no tenían tiempo para ajustarla a la velocidad necesaria. Por ello se producían situaciones ridículas, de artículos relacionados cuyo precio fue fijado en tiempos diferentes: "El saco de harina vacío resultaba más caro que el saco de harina lleno. El precio del huevo ascendía a E ° 20 por unidad, mientras que el precio oficial de la gallina era de E ° 60. De esta manera, una gallina valía 3 huevos". En gran número de ocasiones, los precios fijados no cubrían siquiera los gastos de producción.

El control de precios tuvo resultados catastróficos para la producción de alimentos. Ejemplo de ello fue la producción de pan. En julio, se nombró un interventor para esta industria. En agosto, buena parte de las panaderías dejó de funcionar, por falta de trigo. El gobierno decía que había una mayor demanda y que la escasez se debía al paro de los transportistas. En realidad, el paro era producto de la escasez, de la desesperación que esta causaba. El 6 de septiembre, Allende admitió que "no tenemos el más mínimo stock de harina. A lo sumo para tres o cuatro días".

Pero no eran solo los alimentos, también los medicamentos, el combustible. Todo comenzaba a escasear, multiplicándose las "colas" para adquirir productos de consumo básico. Quedaba, por sobre todo, la conciencia de que cada día que pasaba la situación era peor, no parecía haber luz al final del túnel. No al menos con el gobierno de Allende, que insistía en profundizar las reformas, en exacerbar las tensiones.

La crisis social

En las narrativas históricas sobre el colapso de la Unidad Popular, los actores políticos tradicionales, particularmente el gobierno y las cúpulas partidarias, han ocupado la atención central. Sin embargo, esta perspectiva no permite dimensionar los niveles de polarización a los que se llegó y como ello condujo a una hipermovilización de la sociedad en su conjunto. Se empezaba a crear un círculo infernal: a cada movimiento de la izquierda o de la oposición, su contraparte respondía con posturas cada vez más duras e intransigentes. No cabía posibilidad de ser neutral o no participar, puesto que cada actividad de la vida cotidiana, la propia asistencia al trabajo, a las escuelas, a las iglesias, la propia compra de mercadería, todo, absolutamente todo se encontraba politizado. En tal sentido, la crisis de 1973 fue mayor incluso que la de 1891, pues a pesar de que esta implicó a un mayor número de fallecidos, no movilizó a la mayoría de la población, lo que sí ocurrió con los meses finales de la UP.

El aspecto más cotidiano que fue invadido por la politización fue el abastecimiento de alimentos. Con la crisis económica en marcha, hubo un masificado desabastecimiento, tema en el que cada sector, oficialismo y oposición, responsabilizaba al otro. Las JAP, que habían sido creadas con el objetivo de controlar la inflación, no hicieron más que empeorar la situación, pues los precios estaban tan distorsionados que a los vendedores no les quedaba otra opción que recurrir al mercado negro. Pero las JAP también se podían concebir como una oportunidad, ya que

la izquierda pensó en empadronar a toda la población y acelerar la creación de un nuevo estado en base al poder popular. Todo ello hacía presente la idea de que Chile verdaderamente se estaba transformando en una segunda Cuba.

Las JAP no se esforzaron mucho en cubrir su sectarismo. Compuestas de partidarios de la UP, frecuentemente daban más raciones o de mejor calidad a aquellos que simpatizaban con el gobierno. Para los militantes de izquierda, el control de los alimentos era también un momento de cobrar revancha, bajo la consigna "racionamiento para los ricos, abastecimiento para los pobres". Algunos se tomaban el combate al mercado negro en sus propias manos, procediendo a la descerrajadura de negocios sospechosos, que normalmente desembocaba en simple saqueo. El 4 de abril, durante un intento de saqueos a unas bodegas propiedad de pequeños y medianos comerciantes y artesanos, Carabineros intentó intervenir, siendo claramente sobrepasado. Una foto pasó a la historia, con un carabinero tratando de defenderse, agazapándose frente a los lumazos que le propiciaba un brigadista de izquierda que iba con casco y cara cubierta. Para muchos, esa foto fue el símbolo de la anarquía, la inversión completa del orden legal.

La tensión en el ambiente que se respiraba a mediados de 1973 se veía influenciada por un discurso que alertaba que el país estaba en camino, al borde incluso, de una guerra civil. En teoría esto era presentado como advertencia, como incentivo para evitar el conflicto, realizando una campaña bajo el título de "no a la guerra civil". Esta campaña no hacía nada por rebajar las tensiones, al contrario, llamaba a los sectores favorables al gobierno a organizarse, pues estos "deben jugar un rol fundamental en la detención de la subversión y en el aplastamiento de la contrarrevolución". Había llamados constantes a resistir, a organizarse, porque el enfrentamiento era inevitable. Por ello, para la oposición, el "no a la guerra civil" no era más que una velada amenaza de que la violencia era una posibilidad y que la izquierda estaba preparada para ganar. La careta se cayó tras el Tanquetazo, cuando el slogan fue reemplazado por el "A ganar la guerra

civil". Personalidades como Carlos Altamirano repetían continuamente estos llamados, puesto que el enfrentamiento era considerado inevitable:

> "El partido ha planteado en diversas oportunidades que 'el enfrentamiento es inevitable', entendiéndose como tal un enfrentamiento violento entre derecha e izquierda, entre la revolución y la contrarrevolución, en la lucha por el poder. Ese enfrentamiento no se deriva de la mala o buena voluntad de los hombres, sino en el resultado de las contradicciones de clases de la sociedad chilena".

Pero ello no solo se limitaba a los socialistas. Los comunistas, a los que se les ha presentado normalmente como más sensatos, también hacían llamados a movilizarse, al combate de masas y al acrecentamiento de la conciencia revolucionaria.

Si bien eran los dirigentes quienes mantenían un relativo predominio del discurso público, en la acción eran los organismos de base, los militantes, quienes controlaban cada vez más los hechos, al punto de lograr una casi autonomía de las dirigencias. En la izquierda, este fenómeno se concentró particularmente en el llamado Poder Popular, sustentado en los trabajadores y no en las instituciones estatales o los partidos. Teorizados en el programa de la UP, el Poder Popular no alcanzó a tener una forma definida hasta la constitución de los cordones industriales. Estos eran conformados por grupos de trabajadores de izquierda dentro de las empresas intervenidas, que se organizaban para defender la revolución frente a los intentos de revertir las reformas (como lo era devolver las empresas a sus dueños). Esto implicaba dar la "lucha por la producción", en la que se coordinaban para combatir sabotajes y se promovían nuevas tomas y estatizaciones de industrias. Su creación se aceleró tras el Paro de Octubre, que les dio una razón de ser.

Los cordones industriales tendrían una relación ambigua con los partidos, pues estos trataron de controlarlos, pero los militantes de base actuaban cada vez más con mayor autonomía, si bien nunca llegó a convertirse en la democracia directa que pretendía

ser y más bien representaba el predominio de los dirigentes sindicales. Símbolo del desborde, los cordones querían tener un mayor control sobre aspectos que fueran más allá de los meramente defensivos, como lo eran alzas salariales y su participación en las peleas callejeras. Los cordones industriales defenderían al gobierno, cierto, pero siempre y cuando este no retrocediera en las conquistas revolucionarias. Si estas se veían amenazadas, no se podía predecir su actuación. El riesgo de desborde estaba presente y se impulsaba a las dirigencias a no ceder y a profundizar la revolución.

Los partidos de izquierda, por su parte, tenían movilizada a su militancia más joven, a través de las brigadas. Bajo el lema de combatir al fascismo, se peleaban constantemente con toda manifestación opositora que pudieran, con el fin de lograr el control del espacio, de ganarse la calle. Era inconcebible que la oposición intentara mover a las masas, pues no se les reconocía derecho alguno a imitar sus propias tácticas.

En la oposición, la situación tenía ribetes diferentes. A diferencia de la izquierda, en la derecha la movilización en las calles era ajena a su tradición y sus simpatizantes eran, por temperamento, menos inclinados a tal clase de prácticas. Si bien en la Democracia Cristiana la acción de masas tenía algo más de atractivo, no era parte esencial de su modo de ser, como sí lo era en la UP. Por ello, la oposición tardó mucho tiempo en salir a las calles, casi a regañadientes. Solo la perspectiva de dirigirse hacia un abismo los motivaba. En tal sentido, fue una acción mucho más reactiva.

Un fenómeno interesante en la oposición fue el rol central que jugaron las mujeres, pues fueron sus movilizaciones las que provocaron el mayor impacto público. Desde la marcha de las cacerolas vacías hasta la protesta de esposas de generales, que motivó la salida de Prats, pasando por la defensa de la Papelera y el apoyo a la huelga de los mineros de El Teniente, la movilización femenina jugó un papel clave. En ello influyó la identificación de las mujeres con el discurso de la oposición, de defensa de la familia, del lugar de la mujer como madre, en contra del adoctrinamiento de sus hijos, por el tener que perder su tiempo haciendo filas para

comprar alimentos. La izquierda también desatendió al electorado femenino y no ejerció un discurso más específico para ellas, por lo que su movilización se caracterizaba por un predominio de los hombres, particularmente en su rol de trabajador manual. Existía la pregunta de cuál iba a ser el rol de las dueñas de casa, de las madres, en la nueva república de los trabajadores que iba a construir la UP.

Cuando la oposición comenzó a salir a las calles, la reacción de la izquierda fue de copar los espacios y no permitirles acción alguna. Por ello, se terminaron creando varios grupos de choque, comenzando con las militancias de los partidos y grupos más radicales como Patria y Libertad, pero también con actores políticos más ocasionales, como lo fueron los estudiantes secundarios y los camioneros, que terminaban desafiando a la autoridad con sus tomas de escuelas o caminos, respectivamente. Entre varios sectores medios, hubo también organizaciones que se identificaban como de autodefensa, ya sea para proteger sus terrenos o sus negocios, puesto que ya no podían contar con la protección de carabineros. Vinculados a los partidos de derecha, estas agrupaciones, no obstante, eran integradas por miembros que jamás se habían movilizado políticamente.

De entre todos los grupos de la oposición, el que más impacto tendría en la opinión pública fue Patria y Libertad. Este grupo no se limitaba a la mera defensa, sino que propiciaba el conflicto y la disputa directa frente a la izquierda. Su tesis política principal era que solo una intervención de las Fuerzas Armadas podría poner fin a la tentativa totalitaria del gobierno de la Unidad Popular. Inicialmente irrumpió un grupo de choque para proteger a las marchas de la oposición, enfrentándose frecuentemente a brigadas izquierdistas en la calle, pero con el Paro de Octubre su estrategia tuvo una radicalización. Se pasó a lo que se denominó una "ofensiva civil", que implicaba librarse del gobierno por todos los medios posibles, adoptando actitudes propias de un grupo paramilitar. El carácter abiertamente nacionalista del grupo y su simbología hizo que la izquierda los acusara de ser fascistas, lo que justificaba la adopción de medidas más duras por cada uno

de estos bandos. Patria y Libertad colaboró con el fallido intento de sublevación que fue el Tanquetazo. Su dirigencia, presidida por Pablo Rodríguez, pidió asilo y el movimiento pasó a la clandestinidad, llamando a "la ofensiva total contra el marxismo armado". Luego algunos miembros desataron una campaña de atentados terroristas, destruyendo torres de alumbrado, gasolineras, vías férreas y vehículos. El 4 de agosto, miembros de Patria y Libertad y otros grupos de derecha asesinaron al edecán del presidente, el comandante Arturo Araya. Símbolo de la polarización, cada sector político acusó al otro de ser el responsable del asesinato, recurriéndose a teorías conspirativas.

Si bien no tan radicales como Patria y Libertad, el gremio de los camioneros fue uno de los principales dolores de cabeza para el gobierno, por la masividad de sus movilizaciones y su rol central en la distribución de productos. Por la extracción social de los camioneros, su actuación se presentaba como un desmentido claro a las concepciones marxistas de la lucha de clases. Los camioneros ya habían puesto en jaque al gobierno en octubre de 1972, bajando la movilización una vez que los militares entraron en el gabinete. La crítica situación de mediados de 1973 hizo que los camioneros volvieran a movilizarse. Pero en esta ocasión el paro fue mucho más radical, puesto que no confiaban nuevamente en una solución como el ingreso de los uniformados al gabinete. Allende lo intentó y el fracaso en ponerle fin al paro provocaría la salida de dos comandantes en Jefe. El nuevo paro se jugaba por el todo o nada, ya no se confiaba en el gobierno, acusando que este los había engañado demasiadas veces y que era claro que no estaba dispuesto a retroceder en su objetivo de convertir a Chile en una nación marxista.

La nueva movilización de camioneros se inició el 26 de julio de 1973. Pronto se sumaron otras agrupaciones, particularmente los gremios profesionales. Estos acusaban la transformación de los lugares de trabajo en "escenarios de una despiadada lucha de poder y de influencia destructora de todo espíritu de servicio y de superación", cuestión que, entre otras, provocaba un "desmesurado éxodo de profesionales de nuestro país". Irónicamente, era una

movilización política para ponerle fin a la politización del país. Si bien sus mensajes iniciales llamaban a que el Ejecutivo respetara la ley, al poco tiempo se empezó a pedir explícitamente que los militares fueran garantes de la buena actuación de las autoridades y, posteriormente, exigieron lisa y llanamente la renuncia del gobierno.

La respuesta de la izquierda fue una movilización propia, con convocatorias a paros y marchas en las calles. En ocasiones, los opositores replicaban con sus propios llamados a paro. Así, se dio la paradoja de que había días en que las dos mitades del país estaban paralizadas, por motivos absolutamente contrapuestos. Naturalmente, la paralización de actividades dañaba más al gobierno que a la oposición. Por lo mismo, la izquierda veía que sus herramientas clásicas ya no bastaban, por lo que profundizaron los preparativos para el enfrentamiento por la vía del "Poder Popular".

Ante tal polarización e hipermovilización, los hechos de violencia callejera subieron como espuma durante el año 1973. El diálogo y la razón fueron reemplazados por golpes y piedrazos. Entre las bases militantes, cualquier noción de amistad cívica, o siquiera respeto por los rivales, había desaparecido. Lo único claro es que la contraparte no tenía legitimidad, que eran los enemigos. Era un círculo de odios recíprocos, que crecía día a día y no parecía tener fin.

Aun entre quienes no participaban del ciclo de violencia, las relaciones sociales se vieron quebradas. Comenzaba a ser común que la gente solo se relacionara con personas con quienes compartían bando político. Así, a las reuniones sociales de gente que simpatizaba por la oposición no iban partidarios de la UP, y viceversa. La gente se dejaba de hablar en el trabajo, incluso entre las familias comenzaron a producirse distancias. A menos que todos fueran del mismo bando, no se podía hablar de política en forma civilizada.

La crisis política

El 21 de mayo de 1973, el presidente Allende pronunció la que sería su última cuenta anual a la nación. En un tono sombrío, comenzó afirmando: "Como pocas veces ha ocurrido en Chile, esperanzas y temores son compartidos por la razón y las pasiones de nuestros conciudadanos". Aseguró que los cambios revolucionarios se habían profundizado en el país, transfiriendo el poder a la clase trabajadora. Recordando el Paro de Octubre, aseguró que el objetivo de quienes lo habían dirigido fue "derrocar al gobierno". Los problemas económicos se habían generado por problemas del pasado y por desajustes propios de todos los procesos revolucionarios, aunque comprendía que en lo inmediato el pueblo estaba afectado por "la inflación, el bajo nivel de abastecimiento y la movilización colectiva". Valoró especialmente el resultado de las elecciones de marzo, al compararlo con el apoyo de otros gobiernos en similar etapa de sus respectivas administraciones y reiteró el objetivo de abrir el camino a la construcción del socialismo.

Como llegó a ser habitual en 1973, Allende se refirió al tema de una eventual guerra civil: "Los designios de provocar el caos político y económico, que amenazan vitalmente la seguridad nacional, no se detienen ni aun ante el peligro de guerra civil. Yo cumpliré con mi deber y haré uso de todos los recursos del Estado, pero guerra civil no habrá en este país". No sabemos qué tan convencido pronunció la palabra final de su discurso: "Venceremos". El discurso circuló oficialmente con un ilustrativo encabezado: "Por la democracia y la revolución, contra la guerra civil".

El contraste con 1971 no podía ser más notorio. En vez del ánimo optimista, de un futuro abierto que caracterizó el primer mensaje, ahora predominaba un tono lóbrego, que no podía hacer apelación a logros reales, sino a las amenazas latentes de guerra civil y crisis económica. Inminente o no, la guerra civil y el golpe de Estado pasaron a ser temas de la discusión cotidiana en el mundo político, lo que era expresión de la descomposición de la convivencia nacional y el riesgo efectivo del choque violento.

Por todas partes las posiciones se endurecían. Particularmente difíciles para el gobierno fueron los cambios que ocurrieron al interior de la Democracia Cristiana. En ese partido, el senador Patricio Aylwin había reemplazado a Renán Fuentealba como presidente de la colectividad, y se había presentado a las elecciones internas con un ilustrativo mensaje: "No dejar pasar una al gobierno".

En la izquierda, el líder del MIR, Miguel Enríquez, advirtió a mediados de junio que se había iniciado la ofensiva final de la "clase patronal", manifestando que se cerraba una etapa: "Termina el ciclo de las ilusiones reformistas de la 'vía chilena al socialismo', de la 'revolución sin costo social'", aseguró en un concurrido acto en el Teatro Caupolicán. En ese contexto, estaba convencido que "las leyes de hierro de la lucha de clases" habían terminado por imponerse, destruyendo "los sueños reformistas" y demostrando que no era posible "hacer revoluciones a medias con la democracia burguesa".

La sensación de estancamiento político que se vivía por esas fechas se vio radicalmente remecida el 29 de junio. Ese día, un grupo del Regimiento Blindado N° 2 se alzó en armas contra el gobierno. La idea de una intentona había surgido del capitán Sergio Rocha y el teniente Guillermo Gasset, en concomitancia con miembros de Patria y Libertad, que prestaban apoyo comunicacional. Pero Rocha fue descubierto y detenido, decidiendo las autoridades también relevar del cargo al comandante del regimiento, el teniente coronel Roberto Souper, por no poder controlar a sus hombres. El resto de los complotados decidieron seguir adelante, convenciendo a Souper para que asumiera el liderazgo de la intentona, que se esperaba sumaría espontáneamente a otras unidades militares.

Los sublevados tenían planeado atacar La Moneda y el Ministerio de Defensa, pero sus planes fueron frustrados puesto que no se les sumaron otras unidades. Y el Ejército, encabezado por Prats en persona, decidió reprimir el levantamiento. Siguieron fuertes enfrentamientos, en los que fallecieron 22 personas. El regimiento se rindió poco después del mediodía. Por su parte, la directiva de Patria y Libertad se asiló en la Embajada de Ecuador.

El presidente Allende tuvo una actitud equívoca durante la jornada. Su guardia personal lo mantuvo en la residencia de Tomás Moro, por lo que no pudo partir a La Moneda, como era previsible. Durante una de sus intervenciones radiales, aseguró:

> "Llamo al pueblo a que tome todas las industrias, todas las empresas, que esté alerta, que se vuelque al centro, pero no para ser victimados; que el pueblo salga a las calles, pero no para ser ametrallado; que lo hagan con prudencia, con cuanto elemento tengan en sus manos. Si llega la hora, armas tendrá el pueblo, pero yo confío en las Fuerzas Armadas leales al Gobierno".

En estas palabras se manifiesta un juego doble entre la legalidad y una eventual apelación a la vía armada. Finalmente, en una concentración nocturna en los balcones de La Moneda, en la cual la masa enardecida pedía el cierre del Congreso, Allende se hizo acompañar del general Carlos Prats y de otros uniformados, para agradecerles y para mostrar que contaba con ellos en medio de la creciente destrucción de la convivencia social y del orden institucional. Ello causaría un profundo resentimiento en la mayoría de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Mientras Allende ostentaba la presencia de los comandantes en Jefe, los uniformados comenzaban a discutir entre sí sobre las formas de ponerle fin a la crisis. Descubrieron que tenían muchas ideas en común.

El Tanquetazo demostró algo muy relevante: un grupo de militares estaba dispuesto a sublevarse contra el gobierno, aunque no tuviera la anuencia de los superiores. Esto, de repetirse, efectivamente podría dar paso a una guerra civil. Otra conclusión importante fue que el propio Ejército aplacó el levantamiento, mostrando que ahí radicaba una de las fortalezas principales del gobierno de la Unidad Popular, a pesar de la difícil situación del país. Finalmente, los cordones industriales, los grupos de obreros que supuestamente defenderían al gobierno en caso de necesidad, no llegaron en esa ocasión, lo que también ilustraba las debilidades "militares" de la izquierda gobernante.

El Tanquetazo colocó en una difícil posición al gobierno. De no hacerse algo, era probable que hubiera una nueva intentona militar, quizás con más apoyo. Ello hacía imprescindible encontrar una manera de superar el estancamiento político. Como la Unidad Popular era minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, la vía chilena al socialismo parecía inviable, al menos por medios legales y constitucionales. Por lo mismo, y por la situación de polarización que vivía Chile, el gobierno comenzó a buscar distintas alternativas para hacer frente a la situación: el presidente pensó en hacer una modificación ministerial, a través de la incorporación de las Fuerzas Armadas o de personeros cercanos o militantes de la Democracia Cristiana. A comienzos de julio hubo un cambio de gabinete, pero solo con miembros de la Unidad Popular.

A fines de ese mismo mes, Allende invitó a la Democracia Cristiana a un diálogo político. Patricio Aylwin estaba dispuesto a aceptar en la medida que existieran las condiciones necesarias para que tuviera frutos y no fuera una imposición del gobierno. La iniciativa no era fácil, considerando que tanto en la DC como en el Partido Socialista había resistencias a iniciar esas conversaciones: Carlos Altamirano pensaba que el diálogo era posible solo con las fuerzas que estuvieran "en contra de los explotadores" y "del imperialismo". En el falangismo existía una gran resistencia y desconfianza hacia el gobierno, e incluso el propio Eduardo Frei había rechazado asistir a La Moneda para reunirse con Allende.

Finalmente, fue Aylwin quien tomó la decisión de dialogar con el gobierno y aceptó la invitación, a pesar de las resistencias internas. Pero en el llamado del Presidente y en la respuesta del democratacristiano se advertían algunas discrepancias: Allende invitaba a un diálogo entre quienes "quieren ordenar un proceso de cambios y no con aquellos que anhelan volver a un pasado definitivamente superado", con lo que obviamente se refería a la derecha, pero posiblemente también a un sector de la propia DC. En su respuesta, Aylwin afirmó que aceptaba la invitación, pero exigió que terminaran los grupos paramilitares y se concretara la devolución de las industrias tomadas, petición que seguramente el gobierno no quería ni podía cumplir.

En la primera reunión de Allende con Aylwin –en realidad se vieron dos veces ese día 30 de julio– también estuvieron presentes el canciller Clodomiro Almeyda y el ministro del Interior Carlos Briones. El líder DC expuso la necesidad de afianzar el orden institucional, cumplir el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas, que no hubiera otros grupos armados, terminar con las tomas y otros medios ilegítimos de imponer la voluntad de algunos grupos y que de una vez por todas se delimitara el régimen de propiedad de las empresas. El presidente estimaba que era necesario llegar a acuerdos entre el gobierno y la DC, también estimaba necesario crear comisiones para ver algunos temas. Decidieron reunirse nuevamente en la noche: Allende estaba acompañado por los ministros José Cademártori y Humberto Martones. Aylwin recordaría que si en el primer encuentro "Allende estaba distendido, abierto", en el segundo su actitud era diferente: "Se mostró intransigente e insistió en su idea de crear comisiones para analizar los distintos puntos y tratar de alcanzar acuerdo, lo que no nos pareció realista ni compatible con la gravedad que vivíamos".

Al día siguiente se dio un intercambio de cartas. Una de las propuestas más importantes que planteó Aylwin, con autorización de su partido, fue la necesidad de incorporar institucionalmente a las Fuerzas Armadas a un nuevo gabinete y a los mandos medios, "para asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones del presidente dentro del marco de la constitución y las leyes". Allende rechazó la proposición, argumentando que "Llevar a cabo un nuevo cambio de Gabinete, apenas un mes después que asumiera el actual, no aportaría ninguna solución a lo que el país nos exige". Pero le planteó a Aylwin una oferta tentadora: la de aprobar la reforma constitucional de las tres áreas, a condición de que le acompañara otra reforma, que estableciera que en adelante se fijaría formalmente un quorum de dos tercios del Congreso para rechazar los vetos presidenciales.

La Democracia Cristiana no mordió el anzuelo y, el 3 de agosto, manifestó que el diálogo había terminado. En su argumentación, el partido afirmó que el presidente no parecía percibir la

gravedad y la urgencia de la situación. Pero lo central era que la Democracia Cristiana deseaba forzar al gobierno a abandonar su programa, con las Fuerzas Armadas como garantes de tal determinación. Pero lo único que parecía hacer el presidente era ganar tiempo sin ceder en nada substancial. Se mantenía el bloqueo y las opciones de una salida política a la crisis parecían reducirse cada vez más y más.

La crisis institucional

Al igual que en otros grandes momentos de crisis nacional, como 1891 y 1924, la crisis política de 1973 derivó en una crisis institucional, de choque de poderes del Estado, en donde el debate ya no era solo político o ideológico, sino que se cuestionaba la legitimidad y legalidad del gobierno y, en última instancia, del régimen político mismo.

El problema de fondo era que la Unidad Popular había presentado un programa de transformación revolucionaria de las estructuras políticas y socioeconómicas de Chile, pero no contaba con las mayorías requeridas en el Congreso. Por ello, desde el comienzo se manifestaron los problemas y contradicciones entre el ideal de una vía chilena al socialismo por medios institucionales y la realidad de su implementación, que utilizaba mecanismos de dudosa legalidad, como los denominados resquicios legales. A esto se sumaban muchas veces las vías de hecho, implementadas por sectores afines al gobierno o partidarios de la revolución socialista, lo cual implicaba tomas de tierras y de fábricas, paralizaciones y otras manifestaciones que alteraban no solo el funcionamiento de la economía, sino también el régimen legal y el propio programa de la UP.

Si bien los partidos de oposición habían cuestionado de manera permanente las arbitrariedades del gobierno, para 1973 las críticas más fuertes acusaban directamente que se estaba produciendo un quebrantamiento de la institucionalidad por parte de la UP. Ya no solo se trataba de un juicio de carácter político contra la

administración, sino que implicaría un choque entre los poderes del Estado.

En 1969, el Programa de Gobierno de la Unidad Popular había explicitado que "una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa". Si bien la administración no avanzó en esta línea, hubo numerosas críticas y ataques contra los miembros del Poder Judicial, especialmente contra los ministros de la Corte Suprema. Asimismo, la retórica izquierdista y el proyecto de la UP incluía la creación de los tribunales populares, que despertaban la ilusión de muchos revolucionarios y el temor de quienes imaginaban el paredón, en cruel repetición de lo que había acontecido tras la instalación de la dictadura de Fidel Castro. En todo esto se mezclaban las posturas reales de los actores políticos y sociales con las campañas del terror propias de años de polarización y tiempos revolucionarios.

Tales perspectivas no se materializaron, si bien en un momento el gobierno pretendió implementar una alternativa a los tribunales de justicia, los "tribunales vecinales", los cuales estarían integrados por vecinos que decidirían respecto de faltas menores en los ámbitos familiar y social. Ello despertó temores de que se trataría de un primer paso para instaurar los tribunales populares, pero la idea no se concretó.

El choque entre el gobierno y los tribunales se daría en otro ámbito, sobre la legalidad o no de los resquicios legales. Ante las tomas y requisiciones, los dueños de las empresas acudieron a la justicia. Los tribunales resolvieron cada vez con mayor frecuencia la devolución de empresas a sus dueños, muchas de las cuales se encontraban tomadas por los trabajadores o grupos partidarios de la revolución.

La decisión de los tribunales de justicia generaba un doble efecto. Por una parte, ponía límites a la ampliación de la denominada área social (o estatal) de la economía; por otra parte, ponía freno a la utilización de los resquicios legales. Esto desató la crisis entre los poderes del Estado, ya que el Ejecutivo –en la práctica– no prestó apoyo a las resoluciones de los tribunales, es decir, no las acompañó con la fuerza pública necesaria para hacer cumplir

las sentencias. Allende argumentaba que el gobierno era garante del orden público y la paz y debía prever eventuales consecuencias de la aplicación de las resoluciones judiciales. Por ello, recordó que las autoridades administrativas y políticas se veían "con frecuencia constreñidos a formular juicios de mérito u oportunidad para la prestación de la fuerza pública". Esto último, sin duda, era contrario a la legislación vigente y en la práctica anulaba la actuación de los tribunales en determinados casos.

Previo a 1973, la Corte Suprema había exigido el cumplimiento de las sentencias a los intendentes o a los ministros de Justicia. Estos hacían oídos sordos o, peor aún, abiertamente se vanagloriaban de desconocer el imperio de los tribunales. En una oportunidad, el intendente Jaime Faivovich les dijo a los habitantes de la población Lo Hermida: "Estoy con ustedes. Habría que asaltar los tribunales y masacrar a todos esos viejos momios. Sin embargo, hay que mantener la institucionalidad judicial".

Pero para 1973 la situación había llegado a un nivel crítico, por lo que la Corte Suprema elevó el problema al Presidente de la República. Sus intervenciones fueron cada vez más graves: primero había denunciado una "crisis del ordenamiento legal" (12 de abril de 1973), luego una "crisis del estado de derecho" (3 de mayo) y finalmente una "perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país" (26 de mayo). El presidente Allende no se mantuvo ajeno a la polémica y denunció que en la Corte Suprema y en muchos magistrados existía mayor atención a las pretensiones de los poderosos que a las necesidades de justicia que reclamaban "los más débiles y desposeídos". Con mordacidad, y escalando el conflicto, el tribunal superior hizo ver al gobernante que había asumido una tarea "difícil y penosa para quien conoce el derecho solo por terceristas". Allende resolvió devolver la carta sin contestarla, por considerarla "irrespetuosa e inconveniente". La Corte no se quedó atrás, declarando que "por tratarse de dos Poderes del Estado de igual rango constitucional, entre los cuales no existe subordinación, es inaceptable la actitud del presidente de la República de devolver el oficio a este tribunal".

En 1973 también se desataron los problemas entre el Presidente y la Contraloría General de la República, que comenzó a devolver muchas peticiones de requisición de empresas, además del decreto de "democratización de la enseñanza", conocido como Escuela Nacional Unificada (ENU), precisando que dicha reforma solo podía hacerse mediante una ley. El sistema chileno consagraba la posibilidad de que, en caso de ser rechazado un decreto del Ejecutivo por parte de la Contraloría, el Presidente podía insistir con la firma de todos los ministros: de ahí su nombre, decreto de insistencia.

En 1971 y 1972, la Contraloría había objetado la requisición de diferentes empresas, y señaló que era su deber representar los actos del Ejecutivo que superaran los límites legales y constitucionales, tras lo cual el gobierno debía someterse a las normas. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue una serie de decretos de insistencia. La Contraloría devolvía los decretos sin firmar y tachaba su legalidad, pero las empresas respectivas seguían de hecho ocupadas, en manos del gobierno o administradas por delegados oficiales. Tanto el órgano contralor como la oposición denunciaron que el gobierno había sobrepasado la legalidad de forma grave.

La situación se agudizó en 1973. Mientras hubo presencia de militares en el gabinete, Allende se abstuvo de enviar decretos de insistencia, pero una vez que los uniformados salieron del ministerio, vino un envío masivo de 41 decretos de insistencia, todos previamente declarados ilegales por la Contraloría. La oposición acusó que este era un acto abusivo y que encaminaba al país a una dictadura. También motivaría al Congreso a ponerle freno al gobierno mediante una de las herramientas más poderosas que disponía, la reforma constitucional.

Esta crisis tendría su punto máximo, como veremos más adelante, en la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo con motivo del Acuerdo de la Cámara sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República, que tenía ecos de otras grandes crisis, como las que enfrentaron Balmaceda y Alessandri, las que derivaron en quiebres institucionales.

Chile a mediados de 1973

Hacia mediados de 1973 –esto es, entre junio y agosto– Chile era un país profundamente cambiado y parecía encontrarse al borde de la guerra civil, al menos si analizamos las advertencias de los partidos políticos, especialmente de izquierda. La democracia chilena, que había enorgullecido al país y que despertaba admiración en otras naciones, se encontraba enferma y al borde del precipicio. Esta crisis tenía varias facetas, que se retroalimentaban y hacían cada vez más difícil la posibilidad de una salida institucional.

El primer aspecto era la apelación cada vez más desembozada hacia una solución violenta del conflicto político: "Yo digo responsablemente que una dictadura fascista y castrense pasa por la guerra civil. La dictadura del proletariado pasaría por la guerra civil", señaló el presidente Allende en El Salvador, el 11 de julio. Ese mismo día Patricio Aylwin había advertido en el Congreso que cada vez más chilenos veían en una dictadura militar la solución para los problemas del país. Se podía advertir una doble pérdida de confianza: entre el gobierno y la oposición, por una parte; y de los ciudadanos con la democracia, por otra.

En segundo lugar, la correlación de fuerzas sociales había experimentado un cambio importante, que se había comenzado a advertir de manera tenue desde fines de 1971 y con mayor fuerza durante el año siguiente. En 1973 la oposición había mostrado su fuerza en las calles, con ocasión de las protestas por la Escuela Nacional Unificada (ENU) y el paro de los trabajadores de El Teniente, que llevaron a una gran movilización social y a una pérdida de la conducción política para el gobierno. El paro nacional de agosto –que podría ser considerado como una última asonada contra el gobierno de Allende– logró sumar a más gremios y grupos contrarios a la construcción del socialismo. Como respuesta, la izquierda buscó acelerar el proceso de construcción del Poder Popular, con los cordones industriales como su punta de lanza, los que cada vez actuaban con mayor autonomía y empujaban a la radicalización del proceso.

En tercer lugar, Chile se fue transformando en un país progresivamente paralizado, con un sistema productivo en crisis permanente y una incapacidad de normalizar la vida económica. Incluso en un paro de apoyo al gobierno fijado para el 21 de julio, la CUT expresó que en Chile "no trabajará nadie". En las mismas fechas se desarrollaban paralizaciones en apoyo a los mineros de El Teniente. "En Chile nadie trabaja", le dijo escuetamente Patricio Aylwin al presidente Allende en su última reunión del 17 de agosto, sin que el gobernante lo contradijera.

En cuarto lugar, según hemos mencionado, distintos organismos consideraban que el gobierno de la Unidad Popular se había puesto fuera de la ley y de la Constitución, lo cual no solo generaba una contradicción dentro de la llamada "vía chilena al socialismo", sino también una violación a los acuerdos del Estatuto de Garantías Constitucionales y una crisis de legitimidad. Así lo hizo ver la oposición política, además de la Contraloría General de la República, la Corte Suprema, así como lo discutían los diputados y senadores en el Congreso Nacional.

Esto nos conduce al quinto factor: este problema también contribuiría a horadar la confianza y obediencia de las Fuerzas Armadas, lo que se sumaba a que diferentes instituciones, partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a pedir que las Fuerzas Armadas asumieran su responsabilidad, en un proceso de creciente de militarización de la política. Los uniformados aparecían como garantes del sistema democrático e incluso en los momentos complejos de estos meses el propio gobierno procuraría convocar a las Fuerzas Armadas nuevamente al gabinete. A esto se sumó un problema adicional, ya presente a fines de 1972, pero que resultaría imparable en 1973: la deliberación de los propios militares, que comenzaban a considerar la posibilidad de intervenir en la resolución del conflicto.

RUPTURA Y DESENLACE

La recta final

El Tanquetazo puso, en los hechos, al país en una cuenta regresiva. Si bien el gobierno había derrotado la intentona, la magnitud de esta era inédita y reflejaba que existía un descontento real dentro de las Fuerzas Armadas. Estaba claro que este no sería el último intento, con el riesgo de que una nueva sublevación pudiera arrastrar a más unidades militares, conduciendo al país a una guerra civil. Esto implicaba tanto un desafío para el gobierno como para los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes se veían ante la posibilidad cierta de ser desbordados por sus subordinados.

Tras el fracaso del primer diálogo Allende-Aylwin, el Presidente decidió convocar nuevamente a los militares al gabinete. Este fue otro intento de usar su legendaria muñeca política, pues la participación de militares había sido una de las peticiones de Aylwin, si bien no renunciaba a continuar avanzando en el proyecto de la UP como lo demandaba la DC.

Carlos Prats aceptó dubitativo, únicamente después de que sus pares de la Armada y la FACh hubieran aceptado. Al comunicarle su decisión al cuerpo de generales, estos recibieron la noticia con escepticismo, puesto que habían esperado que se siguiera la fórmula democratacristiana, por la cual los militares desplazaban a la UP del gobierno, lo que para Prats habría significado un "golpe seco".

Al asumir el nuevo gabinete el 9 de agosto, el presidente le encargó terminar con el "paro sedicioso", imponer el orden público, luchar contra la subversión y promulgar las leyes postergadas por el Congreso. Notorio es que en ningún momento se le ocurrió

moderar su lenguaje para calmar los ánimos, sino que deliberadamente buscó a los militares como aliados de su proyecto político.

El gabinete con integración militar no tuvo el mismo efecto que el de noviembre del año anterior. El gran talón de Aquiles era que la oposición había asociado a Prats como un personaje cercano a Allende, perdiendo ese respeto transversal del que anteriormente había disfrutado. Un grupo de senadores democratacristianos incluso lo acusó de incumplir los compromisos tomados durante el Paro de Octubre y de haber colocado a las Fuerzas Armadas al servicio de la represión contra los huelguistas, que solo demandaban el cumplimiento de la palabra empeñada.

La situación fue particularmente delicada para el comandante en Jefe de la FACh, César Ruiz, quien había asumido el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Ruiz intentó una posición conciliadora, pero fue saboteado por los propios funcionarios de la UP, que promovían una postura punitiva contra los huelguistas. El 17 de agosto, el general Ruiz presentó su renuncia, bajo el argumento de que no pudo terminar con el paro. Allende lo instó a recapacitar, advirtiéndole que, si renunciaba al ministerio, también tendría que hacerlo de la comandancia en Jefe, pues perdería su confianza. Ruiz insistió en su decisión, por lo que Allende le pidió su renuncia a su cargo en la FACh.

Allende intentó que otro general aceptara la comandancia en Jefe y el ministerio de Obras Públicas, pero se encontró con las resistencias de la Fuerza Aérea, por lo que debió contentarse con nombrar a Gustavo Leigh como jefe de esta rama y al general Hugo Magliochetti como ministro. Ambos asumieron el 18 de agosto. La jugada maestra de Allende para poner fin a la crisis, el gabinete con integración de los comandantes en Jefe, había fracasado apenas una semana después de su nombramiento.

Peor aún, la salida de Ruiz precipitaría a su vez la de Prats. Una vez conocida la renuncia del primero, un grupo de esposas de oficiales de la FACh protestaron frente a La Moneda. Fueron recibidas por Prats, a quien increparon por no haber solidarizado con su colega. Ruiz, por su parte, fue a un programa de televisión y reveló las condiciones en que había salido del gabinete,

transformándose de inmediato en un héroe para la oposición. El 20 de agosto, cuando se debía realizar la ceremonia de entrega del mando en la FACh, Ruiz se autoacuarteló con el resto de los generales de aviación. La situación podía resultar explosiva, quizás derivar en un nuevo Tanquetazo. El general Leigh tuvo que ir en persona a controlar la situación, dándole a entender al resto de los aviadores que él entendía sus preocupaciones y que estaba con ellos. Al tiempo que se desarrollaba ese drama, otro grupo de mujeres se reunía en el Ministerio de Defensa, coreando: "¡Viva Ruiz, abajo Prats y Montero!". Era solo un adelanto de lo que vendría.

En la tarde del 21 de agosto, el general Carlos Prats se encontraba en su hogar, afectado por una gripe. Fuera de su casa, comenzaron a reunirse un grupo de esposas de generales. Habían venido a entregarle una carta a la esposa de Prats, en la que hacían "un angustioso llamado": "Nuestros maridos ya no pueden usar el uniforme", como siempre lo habían hecho con orgullo, "para evitar ser insultados". La reunión pronto comenzó a cobrar grandes ribetes, reuniéndose cientos de personas, que empezaron a realizar cánticos en contra de la persona de Prats. A su domicilio llegaron el presidente Allende y varios generales, entre ellos Augusto Pinochet, los que fueron abucheados por la muchedumbre. Cansado de los gritos, el presidente ordenó a Carabineros disolver la manifestación, lo que se hizo en pocos minutos.

Prats quedó completamente desmoralizado, con su figura como comandante en Jefe seriamente cuestionada. Era difícil creer que las esposas de sus compañeros de armas hubieran actuado sin el consentimiento de estos. Por ello, Prats decidió reunir al cuerpo de generales para pedirles una muestra de apoyo público y que él por su parte olvidaría la participación de sus esposas en la manifestación. Les dio 24 horas para responder. Pero los generales habían perdido la confianza en su comandante en Jefe. Así se lo comunicó Pinochet a Prats, adelantándole también que dos de sus más cercanos, los generales Pickering y Sepúlveda, también habían renunciado. Estos creían que con sus dimisiones le abrían espacio para que Prats depurara el Ejército. Pero este último no compartía esa visión, puesto que a su juicio, una depuración

podría precipitar la guerra civil. La mejor opción para evitarla era presentar su propia renuncia y que Pinochet asumiera la comandancia en Jefe. Con un liderazgo fresco y algo de tiempo quizás este podría evitar la temida guerra civil.

Allende siguió el consejo de Prats y nombró a Pinochet como comandante en Jefe del Ejército. Para el nuevo líder de la institución, la restauración de la disciplina interna era el desafío fundamental. Por ello exigió que los generales le presentaran sus renuncias escritas, como una forma de comprobar su lealtad. Los generales más implicados en los preparativos del golpe, Sergio Arellano, Arturo Vivero y Javier Palacios se negaron a hacerlo. Incluso aceleraron sus planes, adelantando la fecha de la intervención militar para el 29 de agosto. En esos momentos existía un riesgo real de un quiebre en el Ejército. Pero Pinochet cambió su actitud y el 27 de agosto devolvió las renuncias, manifestando estar muy sentido por quienes no la presentaron.

Fracasado el intento del gabinete militar, Allende insistió en un acuerdo con la Democracia Cristiana. Por intermedio del cardenal Silva Henríquez, logró agendar una cena con Aylwin en casa del prelado, el 17 de agosto. Allende intentó encantar a Aylwin mediante un trato personal, con una conversación relajada, con buen humor. Le ofreció concesiones para la DC, como reincorporar funcionarios despedidos o devolver las empresas requisadas, y negociar algunos de los temas sensibles, como la Papelera o la promulgación de la reforma constitucional. A Aylwin le pareció que Allende no parecía captar la gravedad de la situación. Le planteó que pasaría a la historia como el presidente que conjugó marxismo y democracia, o como el que destruyó la democracia. Le echó en cara su permanente deseo de reconciliar lo irreconciliable: "Hay que definirse. Usted no puede estar bien con Altamirano y con la Marina. No puede estar bien con el MIR y pretender estarlo con nosotros. Parece que lo único que busca es conciliar cosas imposibles de conciliar".

Aylwin salió de la cena convencido de que no se había obtenido ninguna concesión de importancia por parte del presidente. Este había dado su garantía personal de que en el país no habría una

dictadura del proletariado. Pero para Aylwin, la palabra de Allende no era suficiente –la desconfianza había crecido en los tres años de la administración socialista–, puesto que "tantas veces [dijo] una cosa y el gobierno ha hecho la contraria". Básicamente, la DC le exigía a Allende romper con el proyecto político de la UP, quizás hasta con la coalición misma. Allende no lo podía aceptar, sería una traición al ideal político que había defendido a lo largo de su vida. Por ello trataba de hacer concesiones más bien inconsecuentes, que le permitieran ganar tiempo, para mejorar la correlación de fuerzas. Pero estas últimas estaban cada vez más en contra del gobierno.

Tras ello vino el Acuerdo de la Cámara de Diputados. Para el Presidente era evidente que la oposición se jugaba sus últimos cartuchos por lograr la caída anticipada del gobierno. Nunca se le pasó por la cabeza intentar alcanzar un consenso nacional, incluyendo al resto de la oposición. Nunca tampoco se le ocurrió cesar los ataques a los opositores, ya sea conteniendo a sus partidarios, que atacaban sin misericordia a Frei, anulando de paso cualquier posibilidad de entendimiento con la DC, o controlando sus propias palabras. A modo de ejemplo, al celebrar el tercer aniversario de su elección, Allende dijo que la oposición había roto "todas las formas de convivencia" y, ya que la legalidad no les sirve, "la pisotean": "Desde el Congreso invocan solemnemente el golpe de Estado, crimen de la patria, impulsan irresponsablemente la guerra fratricida". Allende estaba claramente superado por fuerzas más potentes, como lo era la división ideológica que se había apoderado del país. Cualquier conciliación, cualquier intento de negociación, iba a ser visto por sus partidarios como una capitulación inaceptable. Lo mismo se veía dentro de la oposición y, aunque quisiera, Aylwin habría tenido muchas dificultades para hacer cumplir un acuerdo con el gobierno si es que este se hubiera alcanzado, pues las bases e importantes dirigentes, como el propio Frei, lo hubieran desautorizado. Por su parte, el Partido Nacional llamó a paralizar todas las actividades hasta conseguir la renuncia de Allende, lo que hizo que la izquierda acusara que el PN había caído en la ilegalidad.

A mediados de agosto de 1973 la situación era desesperada para el gobernante. Cada día se escuchaban rumores de un inminente golpe de Estado. ¿Qué hacer? Una opción que parecería lógica, deshacerse de los militares a los que se consideraba golpistas, podría desatar la guerra civil en el momento mismo de su anuncio. También estaba el peligro de que el problema se desbordara por el lado de los militantes de izquierda, que parecían incluso querer acelerar la definición, aun si ello implicaba un enfrentamiento armado.

El caso más grave se dio con el descubrimiento en la Armada de un plan de suboficiales, partidarios del gobierno, de arrestar a sus superiores y tomarse la escuadra. Oficialmente, la UP y el gobierno condenaron la intentona, pero a medida que pasaban los días, los marineros arrestados empezaron a ganar la simpatía de la izquierda, especialmente desde que se acusara que Altamirano y Garretón estaban involucrados, así como el líder del MIR, Miguel Enríquez. Echando leña al fuego, Altamirano reconoció en un encendido discurso que se reunió con los marinos y que lo haría nuevamente: "¡Concurriré todas las veces que se me invite para denunciar cualquier acto en contra del gobierno legítimo y constitucional del presidente Salvador Allende!... La conjura de la derecha... solo puede ser aplastada con la fuerza invencible del pueblo unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno constituido".

Era casi como un deseo de muerte, de querer terminar la espera insoportable y llegar ya a la resolución, acelerando lo más posible la polarización política. Naturalmente, contaban con aplastar a la subversión y que el Ejército leal junto al pueblo derrotarían a la reacción. Se abriría así una nueva fase del proceso chileno, libre del aparataje institucional burgués. Por ello, mientras Allende buscaba alguna especie de salida, los partidos de la Unidad Popular enfatizaban la movilización de masas, bajo la premisa de que se aplastaría a los imperialistas y a los fascistas.

La última carta que se jugó Allende fue la del plebiscito. Esta opción para resolver la crisis política había estado en el debate desde comienzos de año, con motivo de la disputa respecto a la

reforma constitucional de las tres áreas. Este era el único tema sobre el cual Allende podría convocar a un referéndum, al menos en el corto plazo. Otra opción habría implicado el envío de una reforma constitucional, su rechazo y la convocatoria a un plebiscito, para lo que no daban los plazos, en vista de los temores por un golpe inminente. Por ello, es falsa la idea de que Allende plebiscitaría su continuidad en La Moneda, como se ha repetido continuamente. Eso era abiertamente ilegal, si bien Allende se había mostrado bastante abierto con respecto de su apego a la ley. Podría haber estado implícito que él presentaría su renuncia si es que perdía, al menos así se lo dio a entender a sus cercanos. Habría sido una forma digna de capitular, puesto que sometía su proyecto político al veredicto del pueblo, en vez de ceder a las demandas de la oposición. En el improbable caso de vencer, se contaba con que un nuevo ambiente político haría inviable un golpe.

Existía un problema legal, pues el plazo para convocar a un plebiscito por la reforma de las tres áreas ya había vencido, pero esto palidecía en comparación con el problema político que implicaba su convocatoria, pues Allende necesitaba la venia del Comité Político de la UP. Aquí jugó un rol catastrófico la necesidad de unanimidad. En el Comité la propuesta chocó con la negativa permanente del Partido Socialista, que estimaba que el presidente exageraba los peligros y que, si ocurría lo peor, la mayor parte del ejército estaría con el gobierno y se sucedería un contragolpe, que permitiría afianzar al gobierno y avanzar en forma más resuelta en el cumplimiento del programa. Naturalmente, Allende siempre tuvo la opción de simplemente ignorar las resoluciones del Comité Político, ya que este no tenía autoridad legal alguna. Este fue el camino que le recomendaron los comunistas, convocar al plebiscito aun a riesgo de romper con el PS. Pero Allende no se atrevía a ser desleal con el partido de toda su vida ni tampoco a quebrar a la izquierda.

Finalmente, en la noche del lunes 10, Allende se decidió a convocar el plebiscito como última salida posible. Ello ha llevado a muchos a pensar de que otra alternativa era posible al golpe de Estado. ¿Pero era realmente viable la salida plebiscitaria?

Probablemente no. La convocatoria no resolvería el problema profundo de la división ideológica, cualquiera hubiera sido el resultado. Tampoco se ve que ayudara a descomprimir el ambiente, puesto que el presidente había perdido toda credibilidad de la oposición. Una convocatoria a un plebiscito sería vista como otro de los trucos de Allende, hecho meramente para ganar tiempo y que no significaba ninguna concesión real. Y parece ser que este era uno de los objetivos últimos del plebiscito. Con todo, como registra Joan Garcés de las conversaciones de ese día, el tema de la consulta al pueblo quedaba en la penumbra, según afirmó el presidente Allende: "No voy a hacer público el contenido exacto del referéndum, que es una baza que me reservo", ambigüedad que no se condecía con la gravedad del momento histórico.

Orlando Letelier afirma que la noche del 10 de septiembre se discutieron las diversas alternativas para el retiro de los oficiales desleales: "Uno, el insinuado por Pinochet; no acelerar las cosas, la Junta de Calificación se reúne antes de fin de mes y, por razón de haber llegado a la edad de la jubilación, se podría reequilibrar el Alto Mando según los criterios del gobierno. Otro, pasar a retiro mañana mismo a los generales Bonilla y Arellano. El tercero es el recomendado por Prats: llamar a retiro antes del viernes a seis o siete generales". Allende le contestó, inclinándose por la última opción: "Mañana comunico este mensaje al país y, luego, sacamos de las Fuerzas Armadas a estos oficiales". Eso habría, con toda probabilidad, motivado un levantamiento inmediato, que no esperaría ningún resultado plebiscitario.

Sin embargo, semanas antes el destino del proceso parecía haberse zanjado.

La Cámara de Diputados y el quebrantamiento del orden constitucional

Con el Congreso existía un conflicto de poderes pendiente desde 1972 con respecto a la reforma constitucional de las tres áreas de la economía y el veto que ejerció el presidente al respecto. Según la oposición, bastaba la mayoría simple para rechazarlo, ya que

la reforma constitucional de 1970 había eliminado el requisito de los dos tercios. Por su parte, el presidente argumentaba que correspondía que fuera tratado como una ley, en donde valen los dos tercios. Probablemente Allende tenía razón en lo jurídico, pero no se daba cuenta de que el Congreso le estaba devolviendo la mano con un resquicio legal.

Debido al ya mencionado envío masivo de decretos de insistencia, la Democracia Cristiana instruyó a sus parlamentarios proceder de inmediato con el despacho de los vetos del Ejecutivo, que fueron rechazados por mayoría simple. El presidente decidió elevar el tema al Tribunal Constitucional. Pero este se declaró incompetente, dejando en una situación de vulnerabilidad al gobierno. Por ello, este decidió promulgar las partes de la reforma en que no había discrepancia, pero este esfuerzo fue detenido por la Contraloría, que lo declaró ilegal. Ya no había nadie a quien recurrir y el gobierno quedaba, en el mejor de los casos, en un limbo legal, puesto que tampoco podía recurrir al plebiscito, por haber vencido los plazos para convocarlo. Para la oposición, esta encrucijada legal fue uno de los mejores argumentos que tuvieron para decir que el gobierno estaba violando abiertamente la Constitución, pues no había promulgado una reforma aprobada por el legislativo ni la había puesto al juicio de la ciudadanía, que eran las únicas dos opciones que restaban, pero que habrían significado la paralización y el retroceso del proyecto político de la UP.

A esta forma de conflicto institucional se sumaba otra, que buscaba declarar la ilegalidad del gobierno. En agosto de 1972 los líderes de los partidos Demócrata Cristiano, Nacional, Izquierda Radical, PADENA y Democracia Radical denunciaron "que en Chile, bajo el actual Gobierno ya no existe verdadera democracia, porque sobrepasando el imperio de la Constitución y de la Ley, se está conduciendo al país, en forma cada vez más acelerada, hacia una dictadura totalitaria". En junio de 1973, el Partido Nacional reactivó la crítica a la legitimidad de Allende, acusando que este había viciado su mandato, por una serie de abusos cometidos contra la ciudadanía, instando al Congreso Nacional "a considerar la ilegitimidad de ejercicio" del mandatario. A las críticas de

la derecha se sumó la Democracia Cristiana. Patricio Aylwin dijo que se podía comprobar "el incumplimiento reiterado, abierto o encubierto, del Estatuto de Garantías Constitucionales" y que es "indiscutible que la institucionalidad democrática de Chile se encuentra quebrantada".

Todo esto sirvió de antesala para una de las sesiones más importantes de la Cámara de Diputados en toda su historia. El 22 de agosto de 1973, la mayoría de la Cámara Baja, compuesta principalmente por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, aprobó el histórico Acuerdo sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República.

La acusación contra el gobierno era de la mayor gravedad: el Presidente de la República había sido elegido por el Congreso tras el acuerdo del Estatuto de Garantías Democráticas; sin embargo, era "un hecho" que el gobierno se había ido "empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece". La Cámara acusaba al gobierno de haber incurrido en un sistema permanente de violaciones a la Carta Fundamental y a las leyes, por "desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado", y de violar "habitualmente" las garantías constitucionales, lo que permitió y amparó "la creación de poderes paralelos, ilegítimos", todo lo cual había destruido los "elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho". En la práctica, las acusaciones se referían al ataque contra los principios propios del constitucionalismo: los derechos constitucionales y la separación de poderes. A ellos se sumaban los atropellos contra el Congreso Nacional: le había usurpado su función de legislar, por medio de los decretos de insistencia y una serie de resquicios legales; burló sus funciones fiscalizadoras, al mantener a los ministros de Estado que violaron la Constitución y las leyes; y había hecho tabla rasa de la función de Poder Constituyente del Congreso, al no promulgar la reforma de las tres áreas de la economía.

En el plano de los poderes del Estado y de otras autoridades, el Acuerdo destacaba que el gobierno había incurrido en una serie de desmanes contra el Poder Judicial: había desarrollado una campaña de injurias y calumnias contra la Corte Suprema, amparando el atropello contra las atribuciones y personas de los jueces; burló la acción de la justicia, mediante el uso abusivo del indulto y el incumplimiento de las órdenes de detención; y había dejado sin aplicación las resoluciones judiciales o sentencias, e incluso el Presidente de la República había llegado "al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un 'juicio de mérito' a los fallos judiciales". Respecto de la Contraloría, acusaba que el gobierno había "violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él".

Entre sus acuerdos, representó a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros el "grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República", precisando que "les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos". En otras palabras, pedía que las Fuerzas Armadas controlaran al gobierno, o al menos le pusieran límites.

Si la acusación era grave, la respuesta del presidente Salvador Allende acentuó la complejidad del momento político, por cuanto no procuró comprender la posición de sus adversarios, para buscar un acuerdo que pudiera superar la crisis. Por el contrario, el gobernante acusó a la Cámara de Diputados de pretender "producir los mismos efectos de la acusación constitucional" sin contar para ello con los dos tercios que exigía la Constitución; implicaba una renuncia a los valores cívicos de la democracia y exhortaba a las Fuerzas Armadas y Carabineros para adoptar "una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo". La conclusión de Allende fue dramática: "Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y

dirección política del Presidente de la República es promover al golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil".

Podría decirse que entonces comenzó la cuenta regresiva, no solo por la declaración de la Cámara, sino también porque el 23 de agosto el general Carlos Prats renunció a la Comandancia en Jefe del Ejército y a su cargo de ministro. En la práctica, el gobierno perdió a su principal soporte en las Fuerzas Armadas y, adicionalmente, la oposición llamaba a estas instituciones a poner fin a las violaciones de la Constitución y las leyes.

La definición de los militares

Desde un comienzo hubo sectores entre los uniformados que deseaban ver un fin anticipado del gobierno, por la fuerza si era necesario. Pero el intento de Viaux en 1970 pareció cerrar esa posibilidad, al menos por el momento. Tal situación se mantuvo durante los dos primeros años de la presidencia de Allende, durante las cuales las Fuerzas Armadas mantuvieron una posición más bien prescindente. Todo ello cambió con el Paro de Octubre, tras el cual los uniformados entraron al gabinete como forma de darle solución temporal a la crisis, a la espera de la elección de marzo de 1973. Quisieran o no, los uniformados entraron de lleno en el debate político. La oposición esperaba que restablecieran la ley y pusieran fin a las arbitrariedades, en la práctica paralizando la aplicación del programa. Por su parte, los oficialistas esperaban que los militares acabaran con los intentos sediciosos y colaboraran en el cumplimiento del programa. Como en otros temas, se trataba de una contradicción insalvable.

Los comicios de marzo no resolvieron nada, pues en lo esencial se mantuvieron los equilibrios de fuerza. Parecía cerrarse, por ello mismo, una salida electoral a la crisis. Nuevas iniciativas gubernamentales aumentaron esta creciente politización. Con motivo de

la presentación de la ENU, varios oficiales mostraron su malestar con el proyecto educacional del gobierno. Allende estuvo a punto de castigar a los uniformados que más se opusieron, como el almirante Ismael Huerta, pero fue convencido de no hacerlo. Por su parte, Prats reprochó a los oficiales del Ejército que se habían manifestado en contra, lo que dañó mucho su imagen ante sus subordinados, que lo veían cada vez más asociado al proyecto político del presidente Allende.

El Tanquetazo precipitó aún más la politización al interior de las Fuerzas Armadas. Causó profunda molestia que el Presidente llamara a entregar armas al pueblo si llegaba el momento y que los comandantes en Jefe aparecieran en el balcón de La Moneda en una celebración abiertamente partidista y fuera de lugar. Los oficiales de las tres ramas que se encontraban en Santiago comenzaron a hablar abiertamente entre sí y encontraron que tenían una gran concordancia.

Ello dio paso a la creación del Comité de los 15, en el cual cada rama de las Fuerzas Armadas era representada por cinco oficiales, con el fin de discutir la crítica situación del país. Esta iniciativa fue puesta en conocimiento de los comandantes en Jefe, que también fueron invitados a participar. El grupo redactó un documento en que se alertaba de la crítica situación de poderes del Estado, que ponían en riesgo el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho, como asimismo la existencia de grupos paramilitares extremistas. Realizaron una serie de proposiciones, que era prácticamente un programa de gobierno. Entre sus principales medidas, pedían garantizar la independencia de los poderes del Estado, robustecer el principio de autoridad, poner fin a las huelgas y paros, aplicar en forma irrestricta la ley de control de armas, velar por la apoliticidad de las FF.AA., terminar con los enroques ministeriales y que Carabineros hicieran cumplir sus funciones sin consideraciones políticas.

El texto le fue comunicado al gobierno, pero el presidente, en vez de contestar, insistió en la formación de un nuevo gabinete militar, lo que produjo profundo malestar dentro de la mayoría de los oficiales. Ante tal parálisis, varios comenzaron a planear

deliberadamente la caída del gobierno por medio de la fuerza. Los más avanzados en los planes eran los de la Armada, cuya oficialidad estaba en contra del gobierno casi en forma unánime. La figura central de esta trama era el almirante José Toribio Merino, quien había ganado una alta estima entre sus subordinados, convirtiéndose en el líder de facto de la Armada. El comandante en Jefe, Raúl Montero, había quedado aislado por su colaboración con el gobierno, sin enterarse de los planes. Estos estuvieron listos a mediados de julio, conociéndose bajo la denominación de Plan Cochayuyo.

En la FACh también existía inquina contra el gobierno. Los generales del aire habían intentado convencer a Allende de que frenara la revolución, pero este les dijo que una revolución tenía su dinámica propia y que una vez empezada se debía llegar hasta el final. Posteriormente, los marinos le comunicaron a Leigh sus propósitos de poner fin al gobierno, a lo que este respondió comprometiéndose a sumarse cuando la Marina se declarara sublevada.

Una preocupación permanente de los grupos que planeaban poner fin al gobierno era evitar alguna intentona precipitada por parte de sus subordinados. Esto fue cada vez más difícil, en vista de que los uniformados eran increpados constantemente por la oposición para que pusieran fin a la situación. En algunos casos, se les arrojaba maíz, dándoles a entender que eran unas gallinas por no decidirse a actuar. Había que contenerlos, asegurándoles que sus oficiales sabían de sus inquietudes y las compartían.

Otro temor era sobre una posible acción de soldados y marinería partidarios del gobierno, que podrían tomar las armas y matar a sus oficiales. Esta posibilidad se convirtió en una amenaza real con el descubrimiento de planes de suboficiales de marina para tomarse la escuadra y arrestar a los oficiales, bajo la premisa de evitar el golpe y defender al gobierno. Y esa era la que se había logrado descubrir, puesto que podría haber otras que aún no salían a la luz. Todo ello hacía que estimaran que una rápida definición era necesaria.

Naturalmente, los militares también temían por los grupos paramilitares, si bien se concentraron en los de izquierda. Por

ello, presionaron para que el gobierno aplicara en forma estricta la ley de control de armas. Esto causó un efecto psicológico sobre soldados que iban a requisar fábricas, al experimentar el control de los espacios y conocer a sus posibles contrincantes.

Si bien la Armada y la FACh ya se encontraban decididas a actuar en contra del gobierno, la situación del Ejército era más complicada. Algunos generales como Sergio Arellano, Javier Palacios y Arturo Vivero ya estaban en concomitancia con las otras ramas y realizaban los preparativos, basándose en los planes de contrainsurgencia que regularmente actualizaba el alto mando. Pero había un gran obstáculo, que era el general Prats. Su salida tras la manifestación de las mujeres dejó una situación ambigua para quienes pretendían derrocar al gobierno. Si bien se habían deshecho del mayor obstáculo para sus planes, no se conocía el pensamiento político del nuevo comandante en Jefe, Augusto Pinochet. Este se había mostrado siempre partidario de Prats y de la prescindencia política de las Fuerzas Armadas. Había comentado a otros generales que el grupo de los 15 era un error y nadie debía participar. Era asimismo notorio que su esposa no había participado de ninguna de las protestas de los uniformados.

Al comenzar septiembre, la situación obligaba a una definición rápida. Tras la renuncia de René Montero al Ministerio de Defensa, el alto mando naval le hizo ver la necesidad de que renunciara también a la comandancia en Jefe. El sucesor lógico era Merino, quien era de facto el jefe de la Armada, pero Allende se resistió, diciendo que cursaría la renuncia de Montero en un momento más oportuno políticamente, lo que representaba una contradicción frente al argumento que había dado para precipitar la salida del general Ruiz Danyau de la FACh.

Para Merino, toda la situación, incluyendo a los marineros que habían tratado de tomarse la Escuadra, había creado una profunda inquietud en la Armada, particularmente en la infantería de Marina, por lo que había que tomar una decisión sobre la fecha de la intervención. Se reunió el 7 de septiembre con Carvajal y Arellano, llegando al acuerdo de que la mejor fecha sería el martes

11 de septiembre, pues el desafuero de Altamirano y Garretón les permitía una excusa para acuartelar las tropas. Después de la reunión, se le comunicó la decisión a Leigh y al general de Carabineros Arturo Yovane, que estaba realizando preparativos en su institución, sumando pronto al general César Mendoza.

Pero quedaba la interrogante de qué hacer con Pinochet. Arellano insistió en informarle del asunto, para evitar una posible guerra civil. Ello lo realizó el sábado 8 de septiembre, informándole a Pinochet de los preparativos y que tenía que tomar una decisión: o los generales, con su comandante en Jefe a la cabeza, asumían sus responsabilidades, o se desentendían y los comandantes se plegarían por su cuenta a la acción de las otras ramas. Con ello, el alto mando quedaría completamente desprestigiado. Pinochet le respondió con un "¡Yo no soy marxista, mierda!", y le prometió que se contactaría con Leigh por teléfono.

En Valparaíso, los almirantes discutieron la fecha propuesta por el almirante Merino. Le mostraron su apoyo, pero manifestaron su temor porque todavía no se había obtenido el compromiso del Ejército. El 9 de septiembre, se determinó que había que obtener por escrito un compromiso de las tres ramas. Como Merino estaba bajo vigilancia del gobierno, se le encargó al almirante Sergio Huidobro que le transmitiera un mensaje a Leigh y Pinochet.

En Santiago había preocupación porque Pinochet no había llamado a Leigh, como había prometido. Por ello, el comandante en jefe de la FACh fue a visitarlo a su hogar en persona para convencerlo directamente. Pinochet se mantenía dubitativo, pero en medio de la conversación llegó Huidobro con la carta de Merino. Esta decía:

> 9/Sept./73
> "Gustavo y Augusto:
> Bajo mi palabra de honor el día D será el 11 y la hora H 06.00.
> Si Uds. no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explícalo al reverso.
> El Almte. Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con Uds. Los saluda con esperanzas de comprensión. J. T. Merino".

Y al reverso agregaba:

> "Gustavo: Es la última oportunidad. J. T.
> Augusto: Si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para ver el futuro".

Leigh y Pinochet firmaron el documento. Con ello, habían cruzado el Rubicón y no habría vuelta atrás. Por lo mismo Pinochet comenzó a actuar en forma decidida a favor del golpe. El día 10, se reunió con el resto de generales y les informó de los planes, delegando los roles que debía cumplir cada uno. En paralelo, la FACh trasladaba sus aviones Hawker Hunter a Concepción y, en Valparaíso, la Escuadra abandonaba el puerto para, en teoría, ir a participar en la Operación Unitas.

El 11 de septiembre

En la madrugada del 11 de septiembre, los buques de la Escuadra dieron media vuelta en dirección a Valparaíso. Esta ciudad sería la primera en estar bajo el control de los uniformados. Tropas de Marina habían cortado las comunicaciones bajo el llamado Plan Silencio, que tuvo un éxito impecable. Solo se dejó abierta, adrede, una sola línea telefónica con Santiago.

En la capital, el Ejército comenzó su movilización a las 6 de la mañana, colocando en ejecución el Plan Hércules, que pondría bajo su control los servicios básicos, comunicaciones y líneas de abastecimiento. Además existía una preparación para la contención de las fuerzas de izquierda.

Salvador Allende había pasado gran parte de la noche discutiendo los detalles del posible plebiscito. Recibió informaciones de que existían movimientos de camiones del Ejército, pero los desestimó, puesto que los rumores de golpe se habían convertido en moneda corriente. Llegó a decir: "Son tantos los rumores... Hace meses que no dormiría si tuviera que atender cada rumor". A las 6:30 del 11 de septiembre, el Presidente fue despertado por miembros del GAP, que le comunicaron que había noticias de que

la infantería de Marina se había tomado las calles de Valparaíso. Allende pidió que se llamara a Pinochet, Leigh y Merino, pero estos se encontraban inubicables.

Por las noticias recibidas, Allende pensaba que se trataba de una rebelión limitada a la Marina. El haber dejado abierta una línea entre Valparaíso y Santiago había cumplido su objetivo: desviar la atención de las acciones del Ejército y la FACh. El presidente Allende decidió encaminarse lo más pronto posible a La Moneda, en contra de las recomendaciones de sus guardaespaldas.

Cerca de las 7:30, los dos protagonistas centrales de ese día, Salvador Allende y Augusto Pinochet, llegaron a sus puestos. El Presidente a La Moneda y el comandante en Jefe al Comando Central de Telecomunicaciones de Peñalolén. Desde el Palacio de Gobierno, Allende aprovechó para dirigirse al país a través de la radio. Acusó que un sector de la marina había ocupado Valparaíso, pero que en la capital no había ningún movimiento anormal. Llamó a los trabajadores a estar "atentos, vigilantes y que eviten provocaciones". En un segundo mensaje, remarcó el mensaje que los trabajadores debían esperar instrucciones y que las "fuerzas leales respetando el juramento hecho a las autoridades, junto a los trabajadores organizados, aplastarán el golpe fascista que amenaza a la Patria". Apenas terminó esta alocución, recibió un llamado de su edecán aéreo: la FACh le ofrecía un avión para salir del país. Parecía que el levantamiento no estaba limitado a la Armada.

Todo se aclaró a las 8:28 horas, cuando se dio por radio la primera proclama de las Fuerzas Armadas. Esta invocaba la grave crisis social y moral del país, la incapacidad del gobierno y el aumento de grupos paramilitares, con el peligro de una inevitable guerra civil, como fundamentos centrales de la intervención. Por ello, exigían la renuncia inmediata del Presidente de la República. Se prometía que las conquistas sociales de los trabajadores serían mantenidas. La proclama era firmada por Augusto Pinochet Ugarte, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza.

Era la peor situación en la que podría haber estado el gobierno, pues todas las Fuerzas Armadas y de Orden se presentaban unidas.

No se podría contar con tropas leales al gobierno. Tampoco habría guerra civil. Allende reaccionó con un nuevo mensaje, más oscuro en sus perspectivas, en el cual reconoció que la situación era crítica y anunciaba que lucharía hasta el final: "Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás... defenderé esta revolución chilena y defenderé el Gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo".

Los militares siguieron emitiendo bandos militares, uno de los cuales anunciaba que si La Moneda no se rendía, esta sería bombardeada. Por su parte, Allende todavía creía ver alternativas, y trató de convencer a los militares de que estos debían dirigirse a La Moneda a parlamentar. Al serle comunicada la proposición, Pinochet respondió negativamente y enfatizó que solo se aceptaría una rendición incondicional. A Allende se le entregaría un avión para sacarlo del país.

Al ver perdida toda posibilidad de diálogo, Allende se comenzó a preparar para el combate. Lo acompañaban en su puesto varios miembros del GAP, así como algunos colaboradores políticos. Sus edecanes, que también llegaron al palacio, trataron de convencerlo de que se rindiera, pero Allende les replicó que no lo haría, aunque bombardearan La Moneda, e insinuó que el último tiro se lo daría en su paladar.

Aproximadamente a las 10 de la mañana los militares comenzaron a acercarse a La Moneda. Ello provocó la reacción del GAP, desatándose una balacera cruzada que parecía no detenerse. Por su parte, el presidente Allende aprovechó el momento para realizar una última alocución a la población. Este discurso estaba dirigido sobre todo a los trabajadores, omitiendo cualquier mención a la UP o a sus partidos. Auguraba días difíciles, persecuciones, pero que el proyecto político que defendían no sería avasallado. En las partes más dramáticas de su alocución, dijo:

> "Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su

palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios...
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor".

La retórica siempre fue una de las mejores armas de Allende. Este era un discurso para la posteridad, con una fuerte carga moral, destinado a mantener vivo el proyecto histórico de la izquierda y para dejar una mancha sobre quienes se habían sublevado. Un lenguaje también maniqueo, sin autocrítica, de buenos y malos, de privilegiados y explotados. Detrás de este estaba la visión marxista de la lucha de clases. Parecía que la derrota del gobierno se hubiera debido a la maldad de la oposición y los militares, como representantes de las clases privilegiadas. Ciertamente sus palabras han ayudado a mantener viva esa simplificación, que parece borrar los mil días previos.

La batalla fuera de La Moneda era intensa, los tanques comenzaron a abrir fuego contra el palacio y varios edificios fueron ametrallados. Ante la no rendición de Allende, comenzaron los preparativos para el bombardeo a La Moneda. Este tenía por sobre todo un efecto simbólico, colocar toda la fuerza desde un primer momento para hacer claro que toda resistencia sería inútil ante la determinación de las Fuerzas Armadas. El bombardeo comenzó, con algo de retraso, a las 11:52 horas y se extendió por 20 minutos, que a los ocupantes del palacio debió parecerles eterno. Una vez terminado el ataque de los Hawker Hunters, se reinició

la balacera, con el propio Allende participando con el rifle AK-47 que le había regalado Fidel Castro.

Las tropas del ejército avanzaban lenta pero inexorablemente. En Peñalolén, Pinochet comenzaba a mostrar un dominio cada vez más grande de la situación. Rehusó todas las iniciativas de parlamentar, ordenando que se atacara con toda la fuerza y que se aplicara la ley marcial a quienes se sorprendiera con armas y explosivos. Si bien había sido el último en sumarse al golpe, ahora aparecía como su figura central.

La situación dentro de La Moneda se tornó desesperada. Al incendio provocado por el bombardeo, se sumaban las bombas lacrimógenas, que hacían irrespirable el aire. Las noticias que llegaban por teléfono confirmaban lo peor, la Junta controlaba todo el país y no había verdadera resistencia. El suicidio de uno de los combatientes de La Moneda, Augusto Olivares, afectó profundamente al mandatario. Todo ello le hizo reconsiderar su decisión de resistir hasta el final. Incluso intentó una última negociación: renunciaría si se constituía un gobierno militar sin civiles y se respetaban las conquistas sociales, pero el ofrecimiento tardío sería nuevamente rechazado por Pinochet.

Aproximadamente a las 14 horas, las tropas del general Palacios rompieron la puerta de Morandé 80 y comenzaron a entrar. Una vez ocupada la primera planta, se dio un ultimátum a quienes permanecían en el segundo piso, se les daría 10 minutos para bajar y rendirse. El presidente decidió la rendición, diciéndole a los suyos: "¡Bajen todos! ¡Dejen las armas y bajen! Yo lo haré al último". Los presentes empezaron a descender, pero el gobernante, en vez de sumarse a ellos, entró en el salón Independencia. Desde afuera, algunos de sus colaboradores alcanzaron a escuchar un último grito: "¡Allende no se rinde, mierda!".

Había muerto Salvador Allende. La batalla fuera de La Moneda comenzó a amainar. Los miembros del GAP que se encontraban en los edificios aledaños, cortos de municiones, se decidieron por acabar con el combate y salir del lugar. En otras partes de la capital habría enfrentamientos, los más duros en la Legua, donde fallecerían varios carabineros. Pero la izquierda no logró efectuar

una resistencia real. Sus afirmaciones de una inminente victoria en la guerra civil y sus preparativos para aplastar a la reacción condicionaron a que los militares actuaran con una fuerza abrumadora, anulando cualquier posibilidad de reacción. Algunos líderes de izquierda intentaron hacer algo en los cordones industriales, pero terminaron por iniciar la vida en la clandestinidad. Fuera de la capital, el control del país fue rápido y sin mayores complicaciones, salvo casos muy aislados.

En la tarde, los miembros de la Junta Militar se reunieron en la Escuela Militar. La población pudo seguir por televisión la ceremonia de juramento, con la que se establecía la creación de una Junta de Gobierno. Comenzaba una nueva etapa en la historia de Chile.

ANEXO: LOS MINISTERIOS DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE

Primer Gabinete
3 de noviembre de 1970 al 28 de enero de 1972

Cartera	Ministro	Partido
Interior	José Tohá* Alejandro Ríos**	Partido Socialista Partido Radical
Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda	Partido Socialista
Hacienda	Américo Zorrilla	Partido Comunista
Economía, Fomento y Reconstrucción	Pedro Vuskovic	Partido Socialista
Educación	Mario Astorga	Partido Radical
Justicia	Lisandro Cruz Ponce	Acción Popular Independiente
Defensa Nacional	Alejandro Ríos José Tohá*	Partido Radical Partido Socialista
Obras Públicas y Transportes	Pascual Barraza	Partido Comunista
Trabajo y Previsión Social	José Oyarce	Partido Comunista
Agricultura	Jacques Chonchol	MAPU
Salud Pública	Óscar Jiménez Juan Carlos Concha***	Partido Social Demócrata MAPU
Minería	Orlando Cantuarias	Partido Radical
Tierras y Colonización	Humberto Martones	Partido Social Demócrata
Vivienda y Urbanismo	Carlos Cortés Díaz Julio Benítez Castillo****	Partido Socialista Partido Socialista

* José Tohá fue acusado constitucionalmente, siendo suspendido de sus funciones por la Cámara el 7 de enero de 1972 y destituido por el Senado el 22 de enero. Ministro de Defensa desde el 7 de enero del mismo año.

** Subrogante de Interior desde el 7 de enero y titular desde el 24 de enero.

*** Ministro desde el 14 de agosto de 1971.

**** Ministro desde el 17 de septiembre de 1971.

Segundo Gabinete
28 de enero al 17 de junio de 1972

Cartera	Ministro	Partido
Interior	Hernán del Canto	Partido Socialista
Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda	Partido Socialista
Hacienda	Américo Zorrilla	Partido Comunista
Economía, Fomento y Reconstrucción	Pedro Vuskovic	Partido Socialista
Educación	Alejandro Ríos	Partido Radical
Justicia	Manuel Sanhueza Jorge Tapia*	Partido de Izquierda Radical Partido Radical
Defensa Nacional	José Tohá	Partido Socialista
Obras Públicas y Transportes	Pascual Barraza	Partido Comunista
Trabajo y Previsión Social	José Oyarce	Partido Comunista
Agricultura	Jacques Chonchol	MAPU
Salud Pública	Juan Carlos Concha	MAPU
Minería	Mauricio Yungk General Pedro Palacios Cameron*	Partido de Izquierda Radical Militar
Tierras y Colonización	Humberto Martones	Partido Social Demócrata
Vivienda y Urbanismo	Orlando Cantuarias	Partido Radical

* Tapia y Palacios asumieron como ministros el 6 de abril de 1972.

Tercer Gabinete
17 de junio al 2 de noviembre de 1972

Cartera	Ministro	Partido
Interior	Hernán del Canto* Jaime Suárez Bastidas**	Partido Socialista Partido Socialista
Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda	Partido Socialista
Hacienda	Orlando Millas	Partido Comunista
Economía, Fomento y Reconstrucción	Carlos Matus	Partido Socialista
Educación	Aníbal Palma	Partido Radical
Justicia	Jorge Tapia	Partido Radical
Defensa Nacional	José Tohá	Partido Socialista
Obras Públicas y Transportes	Pascual Barraza	Partido Comunista
Trabajo y Previsión Social	Mireya Baltra	Partido Comunista
Agricultura	Jacques Chonchol	MAPU
Salud Pública	Juan Carlos Concha	MAPU
Minería	Jorge Arrate Alfonso David Lebón***	Partido Socialista Acción Popular Independiente
Tierras y Colonización	Humberto Martones	Partido Social Demócrata
Vivienda y Urbanismo	Luis Matte	Partido Socialista

* Del Canto fue acusado constitucionalmente, siendo suspendido de sus funciones por la Cámara el 8 de julio y destituido por el Senado el 27 de julio.

** Clodomiro Almeyda actuó como suplente de Interior entre el 8 de julio y el 2 de agosto, fecha en que asumió Jaime Suárez como titular.

*** Ministro desde el 10 de julio.

Cuarto Gabinete
(primero con participación militar)
2 de noviembre de 1972 al 27 de marzo de 1973

Cartera	Ministro	Partido
Interior	General Carlos Prats	Militar
Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda	Partido Socialista
Hacienda	Orlando Millas* Fernando Flores**	Partido Comunista MAPU
Economía, Fomento y Reconstrucción	Fernando Flores Orlando Millas*	MAPU Partido Comunista
Educación	Jorge Tapia	Partido Radical
Justicia	Sergio Insunza	Partido Comunista
Defensa Nacional	José Tohá	Partido Socialista
Obras Públicas y Transportes	Contralmirante Ismael Huerta Contralmirante Daniel Arellano***	Militar Militar
Trabajo y Previsión Social	Luis Figueroa	Partido Comunista
Agricultura	Rolando Calderón	Partido Socialista
Salud Pública	Arturo Jirón	Independiente
Minería	General Claudio Sepúlveda	Militar
Tierras y Colonización	Humberto Martones	Partido Social Demócrata
Vivienda y Urbanismo	Luis Matte Valdés	Partido Socialista

* Millas fue acusado constitucionalmente, siendo suspendido de sus funciones por la Cámara el 28 de diciembre de 1972 y destituido por el Senado el 10 de enero de 1973. Ocupó de forma interina el ministerio de Economía desde el 29 de diciembre de 1972, pasando a ser titular desde el 11 de enero.

** Flores ocupó interinamente Hacienda desde el 29 de diciembre de 1972, pasando a ser titular desde el 11 de enero.

*** Ministro desde el 31 de enero de 1973.

Quinto Gabinete
27 de marzo de 1973 al 5 de julio de 1973

Cartera	Ministro	Partido
Interior	Gerardo Espinoza*	Partido Socialista
Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda** Orlando Letelier***	Partido Socialista Partido Socialista
Hacienda	Fernando Flores	MAPU
Economía, Fomento y Reconstrucción	Orlando Millas****	Partido Comunista
Educación	Jorge Tapia	Partido Radical
Justicia	Sergio Insunza	Partido Comunista
Defensa Nacional	José Tohá	Partido Socialista
Obras Públicas y Transportes	Humberto Martones	Partido Radical
Trabajo y Previsión Social	Luis Figueroa*****	Partido Comunista
Agricultura	Pedro Hidalgo Ramírez	Partido Socialista
Salud Pública	Arturo Jirón	Independiente
Minería	Sergio Bitar*****	Izquierda Cristiana
Tierras y Colonización	Roberto Cuéllar	Acción Popular Independiente
Vivienda y Urbanismo	Luis Matte Valdés	Partido Socialista

* Espinoza fue acusado constitucionalmente, siendo suspendido de sus funciones por la Cámara el 3 de julio, siendo la acusación aprobada por el Senado el 19 de julio de 1973.

** Almeyda se desempeñó como suplente de Interior entre el 23 de mayo al 5 de julio de 1973.

*** Ministro desde el 22 de mayo de 1973.

**** Millas fue acusado constitucionalmente, siendo suspendido de sus funciones por la Cámara el 20 de junio de 1973 y destituido por el Senado el 5 de julio de 1973.

***** Bitar y Figueroa fueron acusados constitucionalmente, siendo suspendidos de sus funciones por la Cámara el 6 de junio de 1973 y destituidos por el Senado el 20 de junio de 1973. Asumieron como subrogantes Luis Matte en Minería y Arturo Jirón en Trabajo.

Sexto Gabinete
5 de julio al 9 de agosto de 1973

Cartera	Ministro	Partido
Interior	Carlos Briones	Partido Socialista
Relaciones Exteriores	Orlando Letelier	Partido Socialista
Hacienda	Fernando Flores	MAPU
Economía, Fomento y Reconstrucción	José Cademártori	Partido Comunista
Educación	Edgardo Enríquez Frödden	Partido Radical
Justicia	Sergio Insunza	Partido Comunista
Defensa Nacional	Clodomiro Almeyda	Partido Socialista
Obras Públicas y Transportes	Humberto Martones	Partido Radical
Trabajo y Previsión Social	Jorge Godoy	Partido Comunista
Agricultura	Ernesto Torrealba Jaime Tohá*	Partido Socialista Partido Socialista
Salud Pública	Arturo Jirón	Independiente
Minería	Pedro Felipe Ramírez	Izquierda Cristiana
Tierras y Colonización	Roberto Cuéllar	Acción Popular Independiente
Vivienda y Urbanismo	Luis Matte Valdés	Partido Socialista

* Asumió como ministro el 13 de julio de 1973.

Séptimo gabinete
(segundo con participación militar)
9 al 28 de agosto de 1973

Cartera	Ministro	Partido
Interior	Orlando Letelier	Partido Socialista
Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda	Partido Socialista
Hacienda	Almirante Raúl Montero	Militar
Economía, Fomento y Reconstrucción	José Cademártori	Partido Comunista
Educación	Edgardo Enríquez Frödden	Partido Radical
Justicia	Sergio Insunza	Partido Comunista
Defensa Nacional	General Carlos Prats*	Militar
Obras Públicas y Transportes	General del Aire César Ruiz Danyau General del Aire Humberto Magliochetti**	Militar Militar
Trabajo y Previsión Social	Jorge Godoy	Partido Comunista
Agricultura	Jaime Tohá	Partido Socialista
Salud Pública	Arturo Jirón	Independiente
Minería	Pedro Felipe Ramírez	Izquierda Cristiana
Tierras y Colonización	General Director de Carabineros José María Sepúlveda	Uniformado
Vivienda y Urbanismo	Aníbal Palma	Partido Radical

* Prats renunció el 23 de agosto de 1973. Asumió como interno Orlando Letelier.
** Ministro desde el 18 de agosto de 1973, tras la renuncia de Ruíz.

Octavo y último gabinete
28 de agosto al 11 de septiembre de 1973

Cartera	Ministro	Partido
Interior	Carlos Briones	Partido Socialista
Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda	Partido Socialista
Hacienda	Contraalmirante Daniel Arellano	Militar
Economía, Fomento y Reconstrucción	José Cademártori	Partido Comunista
Educación	Edgardo Enríquez Frödden	Partido Radical
Justicia	Sergio Insunza	Partido Comunista
Defensa Nacional	Orlando Letelier	Partido Socialista
Obras Públicas y Transportes	General del Aire Humberto Magliochetti	Militar
Trabajo y Previsión Social	Jorge Godoy	Partido Comunista
Agricultura	Jaime Tohá	Partido Socialista
Salud Pública	Mario Lagos	Partido Radical
Minería	General Rolando González Acevedo	Militar
Tierras y Colonización	General Director de Carabineros José María Sepúlveda	Uniformado
Vivienda y Urbanismo	Pedro Felipe Ramírez	Izquierda Cristiana

ENSAYO BIBLIOGRÁFICO

La bibliografía sobre Allende y la Unidad Popular es abundantísima. En este pequeño ensayo bibliográfico, junto con mencionar las obras utilizadas para elaborar este trabajo, deseamos presentar una guía temática para no perderse dentro del océano de publicaciones, concentrándonos principalmente en libros.

***Fuentes*:** Han existido numerosos esfuerzos por recolectar o sintetizar fuentes de los años de la Unidad Popular. Dos de los trabajos más importantes han sido impulsados por el Centro de Estudios Públicos. El primero es *Los mil días de Allende* (Santiago, CEP, 1997), editado por Miguel González Pino y Arturo Fontaine Talavera, que en dos gruesos volúmenes recoge una selección de recortes de prensa y de documentos políticos e institucionales, además de una selección gráfica de portadas de prensa y caricaturas. El segundo esfuerzo de este centro de estudios es la obra de Víctor Farías, *La Izquierda Chilena (1969-1973). Documentos para el Estudio de su Línea Estratégica* (Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2000). Compuesta por seis tomos y más de cinco mil páginas, esta obra reproduce la documentación más importante elaborada por los partidos de izquierda. No existe una obra similar que se ocupe de la producción de la oposición. Este desbalance puede ayudar a entender el predominio de ciertos puntos de vista, si bien ello no fue el objetivo de las obras editadas por el CEP.

De escasos ejemplares, pero de inmensa utilidad, es una obra dirigida por Manuel Antonio Garretón, *Chile: cronología del período 1970-1973* (Santiago, FLACSO, 1979). En siete volúmenes y casi cuatro mil páginas, este trabajo sintetiza las noticias y editoriales de

siete periódicos (como *El Mercurio, La Prensa, La Nación* y *El Siglo*), de un modo exhaustivo y con gran nivel de detalle. Una cronología más accesible se encuentra en Teresa Donoso Loero, *Breve historia de la Unidad Popular: documento de "El Mercurio"* (Santiago, Lord Cochrane, 1974), si bien representando una perspectiva claramente opositora.

Particular atención se le ha dado a la reproducción de discursos de Salvador Allende. Durante años, las más completas fueron las de Patricio Quiroga (Editor), *Salvador Allende. Obras escogidas (1970-1973)* (Barcelona, Editorial Crítica, 1989) y Gonzalo Martner, *Salvador Allende, 1908-1973. Obras escogidas* (Santiago, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1992). Más recientemente, la Biblioteca Clodomiro Almeyda, del Partido Socialista, ha publicado online una colección denominada "Archivo Parlamentario Salvador Allende" (https://www.socialismo-chileno.org/PS/APSA/sag.html), de 15 tomos, en donde se ha intentado una recolección completa de los textos del mandatario. Curiosamente, en ninguna de estas obras se reproducen discursos de su campaña electoral de 1970, gran vacío que se mantiene hasta hoy.

Para la documentación extranjera, la mayor colección de documentos norteamericanos se encuentra en *Foreign Relations of The United States, 1969-1976*, Volúmenes XXI, *Chile, 1969-1973* y E-16, *Documents on Chile, 1969-1973*.

Sobre testimonios orales, se puede consultar la colección dirigida por Pedro Milos, *Memoria a 40 años* (Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2013), 4 volúmenes, que recoge comentarios de varios de los protagonistas de la época, si bien en su mayoría son perspectivas muy generales, con pocas novedades. Más incisivas son las entrevistas contenidas en Patricia Arancibia, *Cita con la historia* (Santiago, Biblioteca Americana, 2006).

Historias generales: Numerosas obras han tratado de dar cuenta del periodo 1970-1973, con diferentes estrategias. Hay algunas que pueden ser consideradas como obras generales, de gran extensión y uso de fuentes primarias, mientras que otras corresponden a ensayos interpretativos.

El esfuerzo individual más importante es Joaquín Fermandois, *La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2019, original de 2013), 3 tomos, realizada principalmente a partir de fuentes primarias. Enfatiza la dicotomía marxismo/antimarxismo y la conexión de la experiencia chilena con el resto del mundo, rechazando la perspectiva de que el conflicto ideológico fue una mera importación de influencias externas. La obra del politólogo Paul E. Sigmund, *The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976* (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1977), es quizás la primera obra de importancia sobre la UP, que todavía mantiene su vigencia. Particularmente destacable es su esfuerzo de imparcialidad, apenas transcurridos cinco años del derrocamiento de Allende. Su obra enfatiza las contradicciones desatadas por el proceso revolucionario y las consecuencias de las decisiones económicas tomadas por Allende. No podemos dejar de mencionar la obra en que los autores de este libro participaron, Alejandro San Francisco (Dirección general), José Manuel Castro, Milton Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo Larios, Monserrat Risco, Alejandro San Francisco y Ángel Soto, *Historia de Chile 1960-2010.* Tomos 5 y 6. *Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973)* (Santiago, CEUSS/Universidad San Sebastián, 2019). Asimismo, el libro de Mario Garcés, *La Unidad Popular y la Revolución en Chile* (Santiago, Lom Ediciones, 2020) traza la experiencia revolucionaria de la Unidad Popular incluyendo importante material visual; un buen trabajo reciente –breve e informativo– es el de Alfredo Sepúlveda, *La Unidad Popular. Los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo* (Santiago, Editorial Sudamericana, 2020).

También existen historias generales escritas por protagonistas de los hechos. En tal sentido destacan los trabajos de Joan Garcés, *Allende y la experiencia chilena* (Santiago, Ediciones BAT, 1990), Sergio Bitar, *El gobierno de Allende. Chile 1970– 1973* (Santiago, Pehuén, 2017) y la reciente obra de Patricio Aylwin, *Experiencia política de la Unidad Popular 1970*-1973 (Santiago, Debate, 2023). La obra de Garcés se concentra en la estrategia política desarrollada

por la UP, siendo él uno de los testigos centrales de ese proceso, analizando asimismo las causas del fracaso. El libro de Bitar, por su parte, tiene como uno de sus aspectos centrales las dificultades económicas del gobierno de Allende. Por su parte Aylwin, en su voluminosa obra, junto con mostrar sus recuerdos y actuaciones como líder de la oposición, enfatiza las constantes contradicciones en el proyecto de la UP, especialmente entre sus tendencias moderadas y radicales.

Entre las obras más breves de carácter interpretativo, ha existido un constante esfuerzo por dilucidar las causas del quiebre democrático. Arturo Valenzuela, *El quiebre de la democracia en Chile* (Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, original de 1978 en inglés), da importancia a la transformación del sistema de partidos y a la erosión del centro político, que permitió que el proceso de polarización condujera a la destrucción de la democracia. En diversas obras, Gonzalo Vial ha sostenido que el quiebre de los consensos de mediados de siglo XX fue la causa última del quiebre institucional. En *Salvador Allende: el fracaso de una ilusión* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario/Universidad Finis Terrae, 2005), Vial enfatiza la existencia de una contradicción inherente entre las finalidades políticas de la UP, la construcción del socialismo, y sus medios institucionales, con un Allende que oscilaba constantemente entre la fascinación por la revolución violenta y la vía pacífica.

En la izquierda, una obra importante de reevaluación de la UP la encontramos en Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulian, *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile* (Santiago, Ediciones Minga, 1983). Se enfatiza lo que se percibía como errores de la izquierda, especialmente el haberse concentrado en un proyecto popular, pero que no alcanzó a ser nacional, por haber excluido a las clases medias. Respondiendo a las tesis de Gonzalo Vial, un grupo de historiadores, liderados por Sergio Grez y Gabriel Salazar, redactaron el *Manifiesto de historiadores* (Santiago, LOM ediciones, 1999), en que se interpretaba la crisis desde una perspectiva estructural, acusando la existencia de tensiones económicas y sociales acumulades desde hacía décadas, cuya responsabilidad recaía en

los grupos oligárquicos y el imperialismo. Para estos autores, la UP aceleró y precipitó la crisis del sistema, pero no la provocó.

***Vida de Allende*:** En el estudio de la vida de Allende, una obra pionera es la de Diana Veneros, *Allende* (Santiago, Editorial Sudamericana, 2003), que exploró por primera vez en profundidad su vida antes de llegar a la primera magistratura y analizó la evolución de su pensamiento político. El aspecto de interpretación psicobiográfico es controversial, por su carácter altamente especulativo, si bien le da un toque interpretativo a la obra. El libro de Mario Amorós, *Allende. La biografía* (Santiago, Ediciones B, 2013), si bien más voluminoso y completo, es más bien hagiográfico.

Debido a que las cartas de Allende fueron quemadas en la embajada cubana el 11 de septiembre, no tenemos acceso a su vida privada más que por testimonios de quienes lo conocieron. En tal sentido, Eduardo Labarca, *Salvador Allende. Biografía sentimental* (Santiago, Catalonia, 2007), busca reproducir la vida privada del mandatario, particularmente sus relaciones personales. Una selección de sus discursos y otros documentos en Salvador Allende (1908-1973, *Obras escogidas* (Santiago, Ediciones del Centro de Estudios Políticos Lationamericanos Simón Bolívar/Fundación Presidente Allende España, 1992). En otro plano se encuentra el trabajo colectivo promovido por el Congreso Nacional, de David Vásquez (editor), *Salvador Allende. Vida política y parlamentaria 1908-1973* (Santiago, Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2008). La obra estudia la figura de Allende desde la perspectiva de su acción legislativa, su pensamiento en diversas áreas (educación, salud, vivienda, trabajo), su visión económica, así como reproduce algunas entrevistas y analiza la situación internacional, nacional y de la izquierda chilena durante la vida política del líder socialista. Además, el libro de Patricio Quiroga, *La dignidad de América. El retorno histórico a Salvador Allende* (Santiago, Ediciones Escaparate, 2016) se trata de una obra muy bien documentada.

También resultan especialmente valiosas las obras escritas por cercanos y colaboradores, si bien muestran un compromiso

marcado y carecen de distancia para mirar las posiciones de Salvador Allende y su gobierno: Osvaldo Puccio, *Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado* (Santiago, Editorial Emisión, 1985); Carlos Jorquera, *El Chicho Allende* (Santiago, Ediciones BAT, 1990); Ozren Agnic, *Allende. El hombre y el político. Memorias de un secretario privado* (Santiago, RIL Editores, 2008); Miguel Labarca, *Allende en persona. Testimonio de una intensa amistad y colaboración* (Santiago, Ediciones ChileAmérica CESOC, 2008); Óscar Soto, *Allende en el recuerdo* (Santiago, Sílex, 2013).

***Elecciones*:** Sobre la elección presidencial de 1970, dos obras de la época son útiles para conocer tanto los hechos como el ambiente: Eduardo Labarca, *Chile al Rojo* (Santiago, Ediciones de la Universidad Técnica del Estado, 1971) y Arturo Olavarría, *Chile bajo la democracia cristiana. Sexto año* (Santiago, Nascimento, 1971).

Por lo general, las obras académicas sobre la elección la han abordado considerando la acción de los partidos y la elaboración de programas políticos. Entre estos destacan Fernando Quezada Lagos, *La elección presidencial de 1970* (Santiago, Talleres Gráficos Smirnow, 1985), Alejandro San Francisco, "La elección presidencial de 1970. Sesenta días que conmovieron a Chile (y al mundo)", en Alejandro San Francisco y Ángel Soto (editores), *Camino a La Moneda. Las elecciones presidenciales en la historia de Chile 1920-2000* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario/ Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005), e Isabel Torres, *La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970* (Santiago, Editorial Universitaria/DIBAM/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2014), capítulo VI. Un trabajo que desarrolla el tema la intervención estadounidense durante y después de la elección es Diego Hurtado Torres y Sebastián Hurtado Torres, *La elección presidencial de 1970: pasado y futuro de un momento extraordinario* (Santiago, Historia Chilena, 2020). Todavía falta una obra que se adentre en la campaña misma, en las acciones de los candidatos para ganarse el voto de los ciudadanos.

***Partidos Políticos*:** La actuación de los partidos políticos ha dado fruto a una amplia bibliografía, de la cual aquí solo podemos rescatar algunos de sus componentes. Como obra general, Luis Corvalán Márquez, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre. Contribución al estudio del contexto histórico* (Santiago, Editorial USACH, 2016), da cuenta de las diferentes estrategias y cambios de alianzas de los partidos políticos, con gran uso de fuentes de prensa, siendo la obra de referencia sobre el tema.

Los partidos de izquierda han sido los que han tenido la mayor atención, si bien normalmente la UP es abordada dentro de obras generales con un horizonte temporal más amplio. En tal sentido, una visión de conjunto se encuentra en Jorge Arrate y Eduardo Rojas, *Memoria de la izquierda chilena Tomo II. (1970-2000)* (Santiago de Chile, Javier Vergara Editor, 2003), que tiene la debilidad de que no explicita sus fuentes. Del Partido Socialista se destaca Ricardo Núñez, *El gran desencuentro. Una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular y Salvador Allende* (Santiago, Fondo de Cultura Económica Chile, 2017), y Carlos Altamirano, *Dialéctica de una derrota* (Ciudad de México, Siglo XXI, 1977). Sorprendentemente, no hay ninguna obra dedicada en exclusividad a la actividad del Partido Comunista entre 1970 y 1973, aunque es relevante la reflexión del secretario general del PC en aquellos años, Luis Corvalán, *El gobierno de Salvador Allende* (Santiago, LOM Ediciones, 2003). Como compensación, puede recurrirse a los capítulos que se dedican a estos años en las obras de Carmelo Furci, *El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo* (Santiago, Ariadna Ediciones, 2008), y Alfredo Riquelme, *Rojo atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia* (Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009). Para el MAPU, está el libro de Cristina Moyano, *MAPU o la seducción del poder y la juventud. Los años fundacionales del partido-mito de nuestra transición (1969-1973)* (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009). Respecto al MIR, la obra más completa es Marian E. Schlotterbeck, *Beyond the vanguard: Everyday revolutionaries in Allende's Chile* (University of California Press, 2018). No hay obras monográficas dedicadas al Partido Radical durante estos años ni tampoco a la Izquierda Cristiana.

Respecto a la oposición, sobre la Democracia Cristiana se puede consultar Patricio Dooner, *Crónica de una democracia cansada. El Partido Demócrata Cristiano durante el gobierno de Allende* (Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1985). Respecto a la derecha, una obra que trata en paralelo al Partido Nacional y al gremialismo de Jaime Guzmán, en Verónica Valdivia, *Nacionales y gremialistas. El "parto" de la nueva derecha política chilena 1964-1973* (Santiago, LOM Ediciones, 2008). Sobre el rol de Jaime Guzmán en la campaña presidencial de 1970 y en la oposición gremial a la Unidad Popular, ver los últimos dos capítulos de José Manuel Castro, *Jaime Guzmán, ideas y política 1946-1973. Corporativismo, gremialismo, anticomunismo* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2016). Para Patria y Libertad, ver José Díaz Nieva, *Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2015).

Sobre los partidos y la democracia, hay dos obras fundamentales, destinadas a ser permanecer en el tiempo: Diego Hurtado, *Las palabras no se las lleva el viento. Lenguajes políticos y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2019), y Diego González Cañete, *La hora del pueblo. Ideas sobre la democracia en Chile a mediados del siglo XX* (Tesis Doctoral, Universidad Libre de Berlín, 2023).

***Economía*:** La introducción más accesible a la economía durante la Unidad Popular se encuentra en Patricio Meller, *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)* (Santiago, Uqbar Editores, 2016), capítulo 2. También ver Pablo Baraona, Martín Costabal y Álvaro Vial, *Mil días, mil por ciento. La economía chilena durante el gobierno de Allende* (Santiago, Universidad Finis Terrae, 1993). Para conocer la mentalidad económica de la UP, es útil *El pensamiento económico del gobierno de Allende* (Santiago, Editorial Universitaria, 1971), que recoge los principales textos de Allende y su equipo de colaboradores económicos. Sobre los resquicios legales, ver Eduardo Novoa Monreal, *Los resquicios legales* (Santiago, Ediciones BAT, 1992), y Cristián Villalonga, *Revolución y ley. La teoría crítica del derecho en Eduardo Novoa Monreal* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2018).

Sobre la reforma agraria, una obra de referencia es José Garrido Rojas, Cristián Guerrero Yoacham y María Soledad Valdés Leal, *Historia de la reforma agraria en Chile* (Santiago, Universitaria, 1988), si bien se concentra en un enfoque institucional y legal. Particularmente útil a quienes deseen investigar este proceso es el libro de Ángela Cousiño Vicuña y María Angélica Ovalle Gana, *Reforma Agraria Chilena. Testimonios de sus protagonistas* (Santiago, Memoriter, 2013), pues recoge la experiencia viva de los involucrados. Sobre la nacionalización del cobre, incluyendo el desarrollo histórico previo, Joaquín Fermandois, Jimena Bustos y María José Schneuer, *Historia política del cobre 1945-2008* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2009).

***Relaciones internacionales*:** Para una visión amplia de las relaciones exteriores, el texto clave sigue siendo Joaquín Fermandois, *Chile y el Mundo, 1970–1973. La política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el Sistema Internacional* (Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 1985). Para una visión que enfatiza la idea de Chile como campo de batalla de la guerra fría, en donde competían Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, reconociendo a la vez la agencia de los actores locales, en Tanya Harmer, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana* (Santiago: Universidad Diego Portales, 2013). Sobre obras respecto a la intervención norteamericana en Chile, basados en documentación desclasificada, ver Kristian Gustafson, *Hostile Intent: US Covert Operations in Chile, 1964-1974* (Potomac Books, Inc., 2007) y Stephen M. Streeter, *"Uncool and Incorrect" in Chile: The Nixon Administration and the Downfall of Salvador Allende* (McFarland, 2023); Jonathan Haslam, *The Nixon Administration and the Death of Allende's Chile* (Londres, Verso, 2005). Un estudio sobre la percepción del proceso chileno desde la vereda norteamericana en Antonia Fonck Larraín, *Miradas desclasificadas. El Chile de Salvador Allende en los documentos estadounidenses (1969-1973)* (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2020).

***Movimientos sociales*:** En la izquierda, el aspecto que más ha llamado la atención respecto a las movilizaciones sociales han

sido los cordones industriales, tema central del libro de Franck Gaudichaud, *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende* (Santiago, LOM, 2004). Una obra cercana, que trata de la experiencia de los trabajadores textiles partidarios de la UP en una fábrica tomada, en Peter Winn, *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de la industria Yarur y la vía chilena al socialismo* (Santiago, LOM, 2004). Además, se ha destacado la importancia de "la experiencia" de la Unidad Popular en la base social que adhería al gobierno en Julio Pinto (coordinador-editor), *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular* (Santiago, Lom Ediciones, 2005), y Julio Pinto (editor), *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular* (Santiago, Lom Ediciones, 2014).

Como contraparte, sobre la oposición, el énfasis ha estado en las movilizaciones femeninas contra la UP, con el libro de Margaret Power, *La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973* (Santiago, DIBAM/Centro de Investigación Diego Barros Arana, 2008), como su mejor exponente. Más recientemente, Marcelo Casals ha tratado la movilización de las clases medias durante el gobierno de la UP en el primer capítulo de *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar* (Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2023). El Paro de Octubre, que desató toda una serie de fuerzas sociales y polarizó a la sociedad chilena, no tiene obras históricas monográficas que den cuenta de su importancia. También falta por estudiar la experiencia del militante de base común y corriente, lo que serviría para contrarrestar las perspectivas que centran la actividad política en las cúpulas partidarias.

***Los militares*:** Una obra central para entender la actitud de los militares ha sido Carlos Prats, *Memorias. Testimonio de un soldado* (Santiago, Pehuén, 1985), donde el Comandante en Jefe del Ejército en los años de Allende narra las dificultades que tuvo que enfrentar, particularmente la politización de los militares (de las cuales él fue uno de los principales protagonistas) y la aparición de grupos que deseaban precipitar la caída del gobierno. Uno de

los cercanos a Prats, el general Guillermo Pickering Vásquez, ha dejado su testimonio en *Profesión soldado. Apuntes de un general del Ejército de Chile* (Santiago, LOM Ediciones, 2022).

Los marinos que propugnaron por el derrocamiento de Allende también han dejado testimonios, entre ellos Ismael Huerta Díaz, *Volvería a ser marino* (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1988), 2 tomos; Sergio Huidobro Justiniano, *Decisión naval* (Valparaíso, Imprenta de la Armada, 1990); y José Toribio Merino, *Bitácora de un almirante. Memorias* (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998), que quedó incompleta debido a la muerte de su autor. Augusto Pinochet también ha dejado sus memorias –si bien su participación en la planificación del 11 de septiembre ha sido cuestionada por sus propios colegas de armas–, en *El día decisivo* (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1979) y *Camino Recorrido* (Santiago, Instituto Geográfico Militar, 1990), Tomo I.

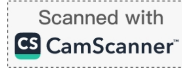
Las vivencias de los marineros que intentaron un autogolpe en favor del gobierno (que se autodefinen como "constitucionalistas") han sido recogidas en Jorge Magasich Huerta, *Testimonios de militares antigolpistas* (Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2019). Una obra monográfica sobre el tema ha sido realizada por el mismo Magasich en *Los que dijeron "no". Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973* (Santiago, LOM, 2008), obra lastrada por el exceso de detalles innecesarios y la falta de ideas en el análisis.

Resultan también útiles como visión general de la actuación de los uniformados Cristián Garay, *Entre la espada y la pared. Allende y los militares 1970-1973* (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2014), y Pablo Seguel, *Soldados de la represión. Anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975* (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2022).

11 de septiembre: Sobre la planificación del golpe de Estado del 11 de septiembre, una obra de referencia, si bien compleja en su forma de citar fuentes y por una narrativa enrevesada, es Mónica González, *La conjura* (Santiago, Catalonia/Universidad Diego Portales, 2017, Quinta edición). Sobre el "once" mismo

(y también algunos de sus preparativos), destacamos a Ascanio Cavallo y Margarita Serrano, *Golpe. 11 de septiembre de 1973. Las 24 horas más dramáticas del siglo 20* (Santiago, Uqbar editores, 2013), Ignacio González Camus, *El día en que murió Allende* (Santiago, Catalonia/Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, original de 1988), y Roberto Silva Bijit, Daniel Avendaño Caneo, Claudio Espejo Bórquez y Miguel Núñez Mercado, *Historia del 11 de septiembre de 1973. Antecedentes históricos, los sucesos del once y sus consecuencias para Chile* (Santiago, Editorial Catalonia/Editorial El Observador, 2013).

ANDROS IMPRESORES
www.androsimpresores.cl



Historia de Chile 1960-2010

TOMO 1
Democracia, esperanzas y frustraciones. Chile a mediados del siglo XX

TOMO 2
El preludio de las revoluciones. El gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964)

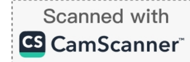
TOMO 3
Las revoluciones en marcha. El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970)
Primera Parte

TOMO 4
Las revoluciones en marcha. El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970)
Segunda Parte

TOMO 5
Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973)
Primera Parte

TOMO 6
Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973)
Segunda Parte

Autores:
Alejandro San Francisco
(Director general)
Sergio Carrasco
José Manuel Castro
Milton Cortés
Myriam Duchens
Gonzalo Larios
Montserrat Risco
Alejando San Francisco
Ángel Soto



En el aniversario 50º de la crisis y quiebre de la democracia en Chile, este libro busca contribuir al conocimiento de nuestro pasado, enfocándose principalmente en el análisis político del gobierno del presidente Salvador Allende, estudiando en forma cronológica y temática algunos de los desafíos y problemas principales que enfrentó el país en aquellos años.

Intercalando descripción e interpretación, en estas páginas se reconstruyen momentos dramáticos, como la elección de 1970, el asesinato del general Schneider, la visita de Fidel Castro, la movilización de la oposición, la extrema polarización de la sociedad, la fractura institucional y el derrocamiento de Allende.

El libro pone el acento en las tensiones y contradicciones que desató el proyecto de la izquierda, presentado como una transición al socialismo en "pluralismo, democracia y libertad", pero que terminó en una crisis profunda.

Este texto se inscribe dentro de una investigación colectiva, como es el proyecto "Historia de Chile 1960-2010", con seis tomos publicados a la fecha. El equipo que trabajó los tomos de la Unidad Popular está compuesto por Alejandro San Francisco (Director general), José Manuel Castro, Milton Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo Larios, Monserrat Risco y Ángel Soto.




ISBN: 978-956-6115-49-6
9 789566 115496